



INFORME
DEL
COMITE PARA LA ELIMINACION
DE LA
DISCRIMINACION RACIAL

ASAMBLEA GENERAL

DOCUMENTOS OFICIALES: TRIGESIMO PERIODO DE SESIONES
SUPLEMENTO No. 18 (A/10018)

NACIONES UNIDAS



INFORME
DEL
COMITE PARA LA ELIMINACION
DE LA
DISCRIMINACION RACIAL

ASAMBLEA GENERAL

DOCUMENTOS OFICIALES: TRIGESIMO PERIODO DE SESIONES
SUPLEMENTO No. 18 (A/10018)

NACIONES UNIDAS

Nueva York, 1975

NOTA

Las firmas de los documentos de las Naciones Unidas se componen de letras mayúsculas y cifras. La mención de una de tales firmas indica que se hace referencia a un documento de las Naciones Unidas.

INDICE

	<u>Párrafos</u>	<u>Página</u>
Carta de envío		vii
<u>Capítulo</u>		
I. INTRODUCCION	1 - 7	1
A. Estados partes en la Convención	1	1
B. Períodos de sesiones	2	1
C. Miembros y asistencia	3 - 4	1
D. Mesa del Comité	5	1
E. Programa:		
11.º período de sesiones	6	2
12.º período de sesiones	7	3
II. MEDIDAS ADOPTADAS POR LA ASAMBLEA GENERAL EN SU VIGESIMO NOVENO PERIODO DE SESIONES SOBRE EL QUINTO INFORME ANUAL DEL COMITE	8 - 32	5
A. Resolución 3266 (XXIX) de la Asamblea General . .	9 - 12	5
B. Examen del informe del Comité en la Tercera Comisión	13 - 21	6
C. Asistencia del Presidente, o de otro miembro designado por el Comité, a las sesiones de la Asamblea General cuando ésta examine el informe anual del Comité	22 - 32	9
III. DECENIO DE LA LUCHA CONTRA EL RACISMO Y LA DISCRIMINACION RACIAL	33 - 63	13
11.º período de sesiones	34 - 43	13
12.º período de sesiones	44 - 63	15
IV. EXAMEN DE LOS INFORMES, LAS OBSERVACIONES Y LA INFORMACION PRESENTADOS POR LOS ESTADOS PARTES DE CONFORMIDAD CON EL ARTICULO 9 DE LA CONVENCION	64 - 187	20
A. Recepción de los informes	64 - 73	20
Informes recibidos por el Comité	64 - 67	20
Informes no recibidos por el Comité	68	22

INDICE (continuación)

	<u>Párrafos</u>	<u>Página</u>
Medidas adoptadas por el Comité para asegurar la presentación de informes de los Estados partes en virtud del artículo 9 de la Convención	69 - 73	22
B. Examen de los informes.	74 - 187	26
Argentina	79 - 82	26
Bolivia	83 - 85	27
Chipre	86 - 90	28
India	91 - 93	29
Dinamarca	94 - 99	30
Níger	100 - 102	31
República Árabe Libia	103 - 104	32
Yugoslavia	105 - 109	33
Santa Sede	110 - 112	34
Malí	113 - 116	35
Países Bajos	117 - 120	36
Checoslovaquia	121 - 124	37
Suecia	125 - 130	38
Zambia	131 - 132	40
Mongolia	133 - 135	40
Reino Unido	136 - 145	41
Senegal	146 - 148	43
Haití	149 - 150	44
Venezuela	151 - 155	44
República Unida del Camerún	156 - 158	45
Chile	159 - 165	46
Trinidad y Tabago	166 - 169	49
Líbano	170 - 175	49
Uruguay	176 - 181	51
Botswana	182 - 184	52
C. Otras medidas sobre los informes	185 - 187	53

INDICE (continuación)

	<u>Párrafos</u>	<u>Página</u>
V. EXAMEN DE COPIAS DE PETICIONES E INFORMES Y DE OTRA INFORMACION RELACIONADA CON LOS TERRITORIOS BAJO ADMINISTRACION FIDUCIARIA O NO AUTONOMOS Y DE CUALESQUIERA OTROS TERRITORIOS A LOS CUALES SE APLIQUE LA RESOLUCION 1514 (XV) DE LA ASAMBLEA GENERAL, DE CONFORMIDAD CON EL ARTICULO 15 DE LA CONVENCIÓN	188 - 197	55
A. Territorios africanos		58
B. Territorios del Pacífico y del Océano Indico . . .		62
C. Territorios del Caribe y del Atlántico, incluido Gibraltar		65
VI. REUNIONES DEL COMITE EN 1976 Y 1977	198 - 204	69
VII. DECISIONES APROBADAS POR EL COMITE EN SUS 11º Y 12º PERIODOS DE SESIONES		70
A. 11º período de sesiones		70
1 (XI). Participación en el Programa para el Decenio de la Lucha contra el Racismo y la Discriminación Racial		70
2 (XI). Relaciones con los regímenes racistas		72
3 (XI). Información suministrada por Chipre referente a la situación en Chipre		73
4 (XI). Trigésimo aniversario de la derrota del nazismo y del fascismo		73
B. 12º período de sesiones		74
1 (XII). Información proporcionada por Chipre en relación con la situación en Chipre		74
2 (XII). Declaración hecha por el Comité para la Eliminación de la Discriminación Racial durante su examen del tema relativo al Decenio de la Lucha contra el Racismo y la Discriminación Racial		74
3 (XII). Asistencia de un miembro del Comité a las sesiones de la Tercera Comisión		75

ANEXOS

I.	ESTADOS PARTES EN LA CONVENCIÓN INTERNACIONAL SOBRE LA ELIMINACIÓN DE TODAS LAS FORMAS DE DISCRIMINACIÓN RACIAL AL 22 DE AGOSTO DE 1975	77
II.	COMPOSICIÓN DEL COMITÉ	80
III.	PRESENTACIÓN DE INFORMES E INFORMACIÓN ADICIONAL POR LOS ESTADOS PARTES, DE CONFORMIDAD CON EL ARTÍCULO 9 DE LA CONVENCIÓN, DURANTE EL AÑO QUE SE EXAMINA (30 de agosto de 1974 a 22 de agosto de 1975)	81
	A. Informes iniciales	81
	B. Segundos informes periódicos	82
	C. Terceros informes periódicos	83
	D. Información adicional solicitada por el Comité	85
IV.	EXAMEN POR EL COMITÉ EN SUS 11. ^o Y 12. ^o PERÍODOS DE SESIONES DE LOS INFORMES Y LA INFORMACIÓN PRESENTADOS POR LOS ESTADOS PARTES DE CONFORMIDAD CON EL ARTÍCULO 9 DE LA CONVENCIÓN	86
V.	DOCUMENTOS RECIBIDOS POR EL COMITÉ PARA LA ELIMINACIÓN DE LA DISCRIMINACIÓN RACIAL EN SUS PERÍODOS DE SESIONES 11. ^o Y 12. ^o CONFORME A LAS DECISIONES DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN FIDUCIARIA Y DEL COMITÉ ESPECIAL ENCARGADO DE EXAMINAR LA SITUACIÓN CON RESPECTO A LA APLICACIÓN DE LA DECLARACIÓN SOBRE LA CONCESIÓN DE LA INDEPENDENCIA A LOS PAÍSES Y PUEBLOS COLONIALES, DE CONFORMIDAD CON EL ARTÍCULO 15 DE LA CONVENCIÓN	87
	A. Documentos presentados en cumplimiento de la decisión adoptada por el Consejo de Administración Fiduciaria en su 42. ^o período de sesiones (1975)	87
	B. Documentos presentados en cumplimiento de decisiones del Comité Especial encargado de examinar la situación con respecto a la aplicación de la Declaración sobre la concesión de la independencia a los países y pueblos coloniales	87

CARTA DE ENVIO

22 de agosto de 1975

Excelentísimo Señor:

Tengo el honor de referirme al párrafo 2 del artículo 9 de la Convención Internacional sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación Racial, según el cual el Comité para la Eliminación de la Discriminación Racial, establecido en virtud de la Convención, "informará cada año, por conducto del Secretario General, a la Asamblea General de las Naciones Unidas sobre sus actividades".

El Comité para la Eliminación de la Discriminación Racial celebró dos períodos de sesiones en 1975 y, en su 267a. sesión, celebrada el día de hoy, aprobó por unanimidad el adjunto informe en cumplimiento de sus obligaciones en virtud de la Convención y se presenta a Vuestra Excelencia para que lo transmita a la Asamblea General.

Deseo llamar la atención sobre el hecho de que, en los debates sostenidos durante el séptimo período de sesiones del Comité sobre el tema relativo a las medidas adoptadas por la Asamblea General acerca del informe anual presentado por el Comité para la Eliminación de la Discriminación Racial en virtud del párrafo 2 del artículo 9 de la Convención (resolución 2921 (XXVII) de la Asamblea General), se ha expresado la opinión de que la Asamblea General debería considerar el informe del Comité independientemente de otros temas.

Deseo también llamar la atención sobre la decisión 3 (XII) aprobada por el Comité en su 261a. sesión, el 15 de agosto de 1975, en la cual el Comité recomienda a la Asamblea General que se invite a un miembro designado por el Comité a participar en las sesiones de la Tercera Comisión de la Asamblea General en las que se examine el informe del Comité para la Eliminación de la Discriminación Racial.

Aprovecho la oportunidad para reiterar a Vuestra Excelencia la seguridad de mi consideración más distinguida.

(Firmado) Adedokun A. HAASTRUP
Presidente del
Comité para la Eliminación de la
Discriminación Racial

Excelentísimo Señor Kurt Walheim
Secretario General de las Naciones Unidas
Nueva York

I. INTRODUCCION

A. Estados partes en la Convención

1. El 22 de agosto de 1975 había 84 Estados partes en la Convención Internacional sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación Racial, que fue aprobada por la Asamblea General de las Naciones Unidas en la resolución 2106 A (XX) de 21 de diciembre de 1965, se abrió a la firma y a la ratificación en Nueva York, el 7 de marzo de 1966, y entró en vigor el 4 de enero de 1969, de conformidad con el artículo 19 de la Convención. (Para la lista de Estados partes véase el anexo I 1/.)

B. Períodos de sesiones

2. En 1975, el Comité para la Eliminación de la Discriminación Racial celebró dos períodos ordinarios de sesiones en la Sede de las Naciones Unidas. El 11.^o período de sesiones se celebró del 31 de marzo al 18 de abril de 1975 y el 12.^o período de sesiones del 4 al 22 de agosto de 1975.

C. Miembros y asistencia

3. Los miembros del Comité fueron los mismos que en 1974 (véase el anexo II).

4. Todos los miembros del Comité asistieron al 11.^o período de sesiones; asistieron al 12.^o período de sesiones todos los miembros, menos el Sr. Dehlavi.

D. Mesa del Comité

5. Continuó actuando como Mesa del Comité en los períodos de sesiones 11.^o y 12.^o del Comité la Mesa siguiente, elegida por el Comité en su noveno período de sesiones para un período de dos años de conformidad con el párrafo 2 del artículo 10 de la Convención:

Presidente: Sr. Adedokun A. Haastrup

Vicepresidentes: Sr. Naste Dimo Čalovski
Sr. Ronald St. John Macdonald
Sr. Sebastián Soler

Relator: Sr. Fayez A. Sayegh

1/ La Convención entrará en vigor con respecto a Bélgica el 5 de septiembre de 1975. Con esto el número de Estados partes en la Convención será de 85.

11.º período de sesiones

6. Tras algún debate en su 225a. sesión, celebrada el 31 de marzo de 1975, el Comité aprobó los siguientes temas del programa provisional presentado por el Secretario General de conformidad con el artículo 6 del reglamento provisional, como programa del 11.º período de sesiones:

1. Aprobación del programa.
2. Medidas adoptadas por la Asamblea General en relación con el informe anual presentado por el Comité para la Eliminación de la Discriminación Racial en cumplimiento de lo dispuesto en el párrafo 2 del artículo 9 de la Convención (resolución 3266 (XXIX) de la Asamblea General, de 10 de diciembre de 1974).
3. Examen de los informes, observaciones e información presentados por los Estados partes de conformidad con el artículo 9 de la Convención:
 - a) Informes iniciales de los Estados partes que debían presentarse en 1972;
 - b) Informes iniciales de los Estados partes que debían presentarse en 1973;
 - c) Informes iniciales de los Estados partes que debían presentarse en 1974;
 - d) Segundos informes periódicos de los Estados partes que debían presentarse en 1973;
 - e) Segundos informes periódicos de los Estados partes que debían presentarse en 1974;
 - f) Terceros informes periódicos de los Estados partes que debían presentarse en 1974;
 - g) Informes iniciales de los Estados partes que deben presentarse en 1975;
 - h) Segundos informes periódicos de los Estados partes que deben presentarse en 1975;
 - i) Terceros informes periódicos de los Estados partes que deben presentarse en 1975;
 - j) Información de los Estados partes acerca de sus obligaciones de conformidad con lo dispuesto en el artículo 4 de la Convención.
4. Examen de copias de peticiones e informes y de otra información relacionada con los Territorios en Fideicomiso y no Autónomos y de cualesquiera otros territorios a los que se aplique la resolución 1514 (XV) de la Asamblea General, de conformidad con el artículo 15 de la Convención.

5. Decenio de la Lucha contra el Racismo y la Discriminación Racial.

6. Reuniones del Comité en 1976 y 1977.

12.º período de sesiones

7. En su 247ª. sesión, celebrada el 4 de agosto de 1975, el Comité examinó y aprobó el programa provisional presentado por el Secretario General. El programa del 12.º período de sesiones era el siguiente:

1. Aprobación del programa.

2. Examen de los informes observaciones o información presentados por los Estados partes de conformidad con el artículo 9 de la Convención:

a) Informes iniciales de los Estados partes que debían presentarse en 1972;

b) Informes iniciales de los Estados partes que debían presentarse en 1973;

c) Informes iniciales de los Estados partes que debían presentarse en 1974;

d) Segundos informes periódicos de los Estados partes que debían presentarse en 1974;

e) Terceros informes periódicos de los Estados partes que debían presentarse en 1974;

f) Informes iniciales de los Estados partes que deben presentarse en 1975;

g) Segundos informes periódicos de los Estados partes que deben presentarse en 1975;

h) Terceros informes periódicos de los Estados partes que deben presentarse en 1975;

i) Información de los Estados partes acerca de sus obligaciones de conformidad con lo dispuesto en el artículo 4 de la Convención.

3. Examen de copias de peticiones e informes y de otra información relacionada con los territorios bajo administración fiduciaria o no autónomos y de cualesquiera otros territorios a los cuales se aplique la resolución 1514 (XV) de la Asamblea General, de conformidad con el artículo 15 de la Convención.

4. Decenio de la Lucha contra el Racismo y la Discriminación Racial.

5. Reuniones del Comité en 1977.

6. Asistencia del Presidente, u otro miembro designado por el Comité, a los períodos de sesiones de la Asamblea General durante el examen del informe anual del Comité 2/.
7. Informe del Comité a la Asamblea General en su trigésimo período de sesiones de conformidad con el párrafo 2 del artículo 9 de la Convención.

2/ Para una reseña del examen de este tema por el Comité, véase el capítulo II, sec. C, párrs. 22 a 33, infra.

II. MEDIDAS ADOPTADAS POR LA ASAMBLEA GENERAL EN SU
VIGESIMO NOVENO PERIODO DE SESIONES SOBRE EL
QUINTO INFORME ANUAL DEL COMITE 3/

8. El Comité examinó este tema durante su 11.^o período de sesiones, en las sesiones 226a. a 228a., celebradas el 1.^o y 2 de abril de 1975, y durante su 12.^o período de sesiones, en las sesiones 260a. y 261a., celebradas el 15 de agosto de 1975.

A. Resolución 3266 (XXIX) de la Asamblea General

9. Los miembros del Comité expresaron su satisfacción por el impresionante apoyo que había brindado la Asamblea General a las actividades emprendidas por el Comité en cumplimiento de la Convención en su resolución 3266 (XXIX), de 10 de diciembre de 1974, sobre el quinto informe anual del Comité 3/. El Sr. Valencia Rodríguez se refirió a esta resolución como "un hito en la existencia del Comité" ya que "le brinda un respaldo decisivo y a la vez proporciona un estímulo para su labor futura". Destacó especialmente el tercer párrafo del preámbulo y los párrafos 7 y 8 de la parte dispositiva con los que "se han disipado las posibles dudas" acerca de algunas de las medidas adoptadas por el Comité y se "reafirma la procedencia y oportunidad" de otras.

10. Según el Sr. Dayal, la resolución examinada era más amplia que las dos resoluciones anteriores que, observó, "eran más de procedimiento que de fondo". Además, en dicha resolución "no sólo se apoyan plenamente las decisiones del Comité sino que se las refuerza". El texto de la resolución indicaba "cuán exactamente las actuaciones del Comité reflejan las opiniones de la vasta mayoría de los Estados Miembros de las Naciones Unidas".

11. Por otra parte, el Sr. Partsch estimó que la resolución "no da carácter legítimo a ninguna tentativa del Comité de ampliar sus atribuciones". Se refirió especialmente a los párrafos 3 y 7, señalando que en el párrafo 3 "la Asamblea sólo expresa su agradecimiento por la labor que realiza el Comité en cumplimiento de las disposiciones de la Convención Internacional", mientras que en el párrafo 7 la Asamblea sólo encomia "la práctica del Comité de recibir con beneplácito la información aunque en el proyecto original se encomiaba también la práctica de solicitar información".

12. El Sr. Ingles opinó que la resolución 3266 (XXIX) de la Asamblea General no apoyaba todas las recomendaciones del Comité y en particular las del inciso d) del párrafo 1 y las de los párrafos 3 y 4 de la decisión 2 (X) del Comité. Refiriéndose a los párrafos 3 y 4 de dicha decisión, el Sr. Ingles señaló que,

3/ Documentos Oficiales de la Asamblea General, vigésimo noveno período de sesiones, Suplemento No. 18 (A/9618). Para los cuatro informes anuales anteriores, véanse ibid., vigésimo quinto período de sesiones, Suplemento No. 27 (A/8027); ibid., vigésimo sexto período de sesiones, Suplemento No. 18 (A/8418 y Corr.3); ibid., vigésimo séptimo período de sesiones, Suplemento No. 18 (A/8718); e ibid., vigésimo octavo período de sesiones, Suplemento No. 18 (A/9018).

"aunque el Comité se ofreció a actuar más allá de su mandato" en virtud de la Convención con el fin de participar más plenamente en el Programa para el Decenio, "la Asamblea General no aceptó su ofrecimiento"; el párrafo 6 de la resolución 3266 (XXIX) contenía "disposiciones que restringen la acción del Comité dentro de su competencia en virtud de la Convención". Sin embargo, esta interpretación fue impugnada por varios miembros del Comité 4/.

B. Examen del informe del Comité en la Tercera Comisión

13. Varios miembros opinaron que el examen del quinto informe anual del Comité en la Tercera Comisión demostraba gran interés y reconocimiento. La Sra. Warzazi, quien inició el estudio de este tema en el Comité, expresó que el debate celebrado en la Tercera Comisión "demuestra el interés y el aprecio suscitados por los trabajos del Comité". Observó que "en el vigésimo noveno período de sesiones, la Tercera Comisión manifestó más interés que antes por los trabajos del Comité", y terminó diciendo que eso "debe ser motivo de complacencia para todos porque demuestra que se ha establecido un verdadero diálogo basado en el respeto y la confianza entre la Asamblea General y el Comité". El Sr. Dayal observó que "en la Tercera Comisión se hicieron una serie de observaciones relacionadas con la labor del Comité y halagadoras para él", y procedió a citar algunas de esas observaciones, como lo hizo también el Sr. Valencia Rodríguez. El Sr. Čalovski consideró "alentadora la actitud positiva demostrada en la Tercera Comisión por la mayoría de las delegaciones respecto de la labor del Comité". El Sr. Macdonald hizo suyos los conceptos de quienes "señalaron la satisfacción del Comité por la buena acogida que en la Tercera Comisión" había tenido su informe.

14. Por otra parte, el Sr. Ingles señaló que había que cuidarse de no señalar sólo "lo positivo" de la acogida recibida por el informe del Comité en la Tercera Comisión y en la Asamblea General y pasar por alto los "aspectos negativos". En su opinión, algunas de las recomendaciones del Comité no habían sido aprobadas por la Tercera Comisión y la Asamblea General. Observó que existía "una inevitable dicotomía porque, por una parte, se está tratando de aplicar un instrumento firmado por Estados partes y que no ha sido ratificado por muchos de los Estados Miembros de la Asamblea General y, por otra, estos últimos están entre quienes juzgan acerca de la aplicación de la Convención". El Sr. Ingles llegó a la conclusión de que "quizá el Comité no haya actuado en la forma más acertada al concentrar sus esfuerzos en establecer un diálogo con la Asamblea General en vez de dar mayor importancia a los contactos con los Estados partes en la Convención".

15. La Sra. Warzazi y los Sres. Čalovski, Dayal, Macdonald, Sayegh y Valencia Rodríguez señalaron en sus declaraciones la aprobación expresada en la Tercera Comisión por los representantes de algunos Estados Miembros con respecto a ciertas decisiones de procedimiento o de fondo adoptadas anteriormente por el Comité - incluida la decisión de eliminar la clasificación de los informes en satisfactorios o no satisfactorios; la decisión de clasificar las actas resumidas de las sesiones públicas del Comité, en su versión definitiva, como documentos de distribución general; la decisión de alentar a los Estados partes a informar al Comité

^{4/} Para un resumen del debate sobre esta cuestión, véase el cap. III, sección A, párrs. 34 a 43, infra.

sobre el estado de las relaciones que mantuvieran con los regímenes racistas; la decisión sobre la situación en las Alturas de Golán; y la decisión de desempeñar una función activa en relación con el Decenio de la Lucha contra el Racismo y la Discriminación Racial. Los miembros no olvidaban, sin embargo, que algunas de estas decisiones habían sido criticadas por ciertos representantes de Estados miembros en la Tercera Comisión; no sólo se tomó nota de esa crítica, sino que también fue examinada por algunos miembros del Comité.

16. Algunos miembros del Comité señalaron y examinaron ciertas sugerencias hechas por representantes de Estados miembros en la Tercera Comisión durante su examen del quinto informe anual del Comité. Por ejemplo, la Sra. Warzazi y los Sres. Dayal y Valencia Rodríguez se refirieron a la sugerencia del representante de Noruega de que el Comité estableciera estrechas relaciones de trabajo no sólo con los Estados partes sino también con los órganos y organismos especializados de las Naciones Unidas que se ocupaban de la discriminación racial. La Sra. Warzazi apoyó el establecimiento de relaciones de ese tipo con la Subcomisión de Prevención de Discriminaciones y Protección a las Minorías. El Sr. Dayal, recordando que en el pasado el Comité ya había tomado medidas de esta índole en relación con dos organismos especializados, no dudó de que así seguiría haciéndolo en el futuro.

17. Otra observación hecha por el representante de un Estado miembro en la Tercera Comisión que mereció la atención de varios miembros del Comité fue la esperanza expresada por el representante del Reino Unido de que el Comité no considerara exhaustiva la lista de derechos que figuraba en el artículo 5 de la Convención, observación que recordaron la Sra. Warzazi y los Sres. Dayal y Valencia Rodríguez. A ese respecto, los Sres. Sayegh y Valencia Rodríguez se refirieron al extenso examen del significado y el alcance del artículo 5 de la Convención 5/ que había realizado el Comité en su octavo período de sesiones. Recordaron que en esa oportunidad ningún miembro del Comité había manifestado desacuerdo con la opinión de que la lista de derechos que figuraba en el artículo 5 no era exhaustiva 6/. El Sr. Valencia Rodríguez llegó a la conclusión de que "en consecuencia, el Comité debe examinar la situación que se presenta en cada Estado parte, no solamente en relación con los derechos enumerados en el artículo 5, sino también en lo relativo a todas las otras manifestaciones de la discriminación racial" y que "el Comité tiene competencia para examinar la situación existente en los Estados partes no sólo a la luz de los derechos enumerados en el artículo 5 sino también a la luz de otros derechos". El Sr. Aboul-Nasr, aunque estuvo de acuerdo en que la lista de derechos mencionados en el artículo 5 de la Convención no era exhaustiva, sostuvo que "las categorías generales de derechos especificadas en el artículo, a saber, los derechos políticos, civiles, económicos, sociales y culturales, constituyen una lista exhaustiva, pues se refieren a los cinco principales derechos humanos proclamados en los Pactos internacionales de derechos humanos". No obstante, el Sr. Partsch estimó que "sería engañoso establecer una distinción entre los epígrafes y el contenido del artículo 5; en esencia, el artículo está integrado solamente por epígrafes. El término particularmente no excluye la posibilidad de que el Comité examine violaciones de otros derechos".

5/ Véase Documentos Oficiales de la Asamblea General, vigésimo octavo período de sesiones (A/9018), cap. V.

6/ Ibid., párrs. 57 y 58.

18. El rechazo, en la Tercera Comisión, de una enmienda oral presentada por el representante de los Países Bajos, cuyo efecto habría sido que la Asamblea General hiciera suya la recomendación contenida en el inciso d) del párrafo 1 de la decisión 2 (X) del Comité, dio origen a un extenso debate en el Comité.

19. Refiriéndose al hecho de que la enmienda de los Países Bajos hubiera sido rechazada por 33 votos contra 32 y 28 abstenciones, el Sr. Valencia Rodríguez observó que "este escaso margen significa que existe una tendencia muy valiosa en la Tercera Comisión a formular dicha recomendación". La Sra. Warzazi expresó la opinión de que "el hecho de que haya habido sólo un voto de diferencia entre los partidarios de la enmienda y sus opositores indica que tarde o temprano la cuestión será objeto de un voto positivo". El Sr. Dayal opinó también que "es posible que con el tiempo se cree un ambiente más propicio a la posición de los Países Bajos"; sin embargo, por el momento era evidente que la posición de los miembros del Comité que se habían opuesto a la propuesta original del Sr. Kapteyn (que se había convertido en el inciso d) del párrafo 1 de la decisión 2 (X) del Comité) en el décimo período de sesiones había sido acertada, como lo demostraba el resultado del debate celebrado en la Tercera Comisión, porque no se habían opuesto a la propuesta original del Sr. Kapteyn en principio, sino que simplemente habían tenido dudas acerca de su oportunidad. El Sr. Kapteyn se manifestó "complacido por el hecho de que la enmienda propuesta ... fuera derrotada sólo por una pequeña mayoría en la Tercera Comisión".

20. El Sr. Ingles se preguntó "por qué el Comité ha de pedir a la Asamblea General que señale el artículo 14 a la atención de los Estados partes en vez de hacerlo directamente, cuando se trata de una medida acorde con los objetivos de la Convención y que no contradice ninguna de sus disposiciones ... y el Comité tiene competencia para hacerlo". El Sr. Kapteyn dijo que "aparte del aspecto político, no ve objeción jurídica alguna ... por lo que concierne al artículo 9 de la Convención" a que el Comité dirigiera sus recomendaciones a los Estados partes en vez de a la Asamblea General; en realidad, pensaba que "dicha práctica podría estar más en conformidad con ese artículo". Explicó más tarde que no había sugerido que el Comité no debería formular sus recomendaciones a la Asamblea General: "El Comité debe aprovechar todas las posibilidades a su alcance y dirigir sus recomendaciones a la Asamblea General o a los Estados partes, según proceda". Sin embargo, "cuando el Comité desee comunicarse con los Estados partes, debe hacerlo directamente y no por conducto de la Asamblea General". Los Sres. Dayal, Partsch y Sayegh opinaron que el artículo 9 de la Convención permitía al Comité dirigir recomendaciones, sobre la base de su examen de los informes presentados por los Estados partes, a la Asamblea General o directamente a los Estados partes, siempre que el Comité comunicara dichas recomendaciones a la Asamblea con las observaciones que hubieran hecho los Estados partes. Sin embargo, los Sres. Sayegh y Valencia Rodríguez indicaron que aunque el Comité tenía competencia para dirigir recomendaciones sobre el artículo 14 de la Convención directamente a los Estados partes, tal medida no era necesaria (dado que los Estados partes, al ejercer su soberanía, podían aprobar su puesta en vigor en cualquier momento), ni atinada (dado que la Convención había reconocido el carácter único de las disposiciones de ese artículo y lo había señalado como el único artículo optativo de la Convención). El Sr. Aboul-Nasr expresó dudas de si el Comité tendría competencia para hacer recomendaciones a la Asamblea General de la misma manera que a los Estados partes.

21. Aunque la mayoría de los miembros expresaron su satisfacción con el diálogo anual entre el Comité y la Tercera Comisión y la esperanza de que éste continuara, los Sres. Dayal, Macdonald, Sayegh y Valencia Rodríguez hicieron hincapié en que sería útil que la Tercera Comisión siguiera examinando el informe anual del Comité separadamente de los otros temas de su programa en futuros períodos de sesiones de la Asamblea General.

C. Asistencia del Presidente, o de otro miembro designado por el Comité, a las sesiones de la Asamblea General cuando ésta examine el informe anual del Comité

22. En las 227a. y 228a. sesiones (11.º período de sesiones), el 1.º y el 2 de abril de 1975, el Sr. Aboul-Nasr, observando que el Presidente y la Sra. Warzazi habían asistido a las sesiones de la Tercera Comisión durante el examen por parte de ésta del quinto informe anual del Comité, expresó la esperanza de que, en el futuro, el Presidente, u otro miembro del Comité, fuera invitado a asistir a las sesiones de la Tercera Comisión dedicadas al examen del informe anual del Comité. Los Sres. Macdonald y Partsch apoyaron la sugerencia formulada por el Sr. Aboul-Nasr y propusieron que se pidiera al Secretario General que informara al Comité de sus consecuencias financieras.

23. En su 228a. sesión, el Comité acordó por consenso recomendar a la Asamblea General que el Presidente, u otro miembro designado por el Comité, fuera invitado a participar en las sesiones de la Tercera Comisión y de la Asamblea General en las que se examinara el informe del Comité; y acordó también solicitar al Secretario General que informara al Comité, en su próximo período de sesiones, de las consecuencias financieras de esa recomendación.

24. Durante su 12.º período de sesiones el Comité estudió la cuestión como un tema separado de su programa (véase párr. 7, supra), en sus 260a. y 261a. sesiones, el 15 de agosto de 1975.

25. De conformidad con el artículo 25 del reglamento provisional del Comité y de acuerdo con la solicitud del Comité mencionada en el párrafo 23 supra, el Secretario General presentó al Comité un documento sobre las consecuencias financieras de la asistencia de un miembro del Comité a las sesiones de la Tercera Comisión. El documento contenía información relativa a los gastos de viaje y dietas de ese miembro, que tendrían que ser sufragados por las Naciones Unidas.

26. Al comienzo del debate, el Sr. Sayegh sugirió que la recomendación del Comité se limitara a la asistencia de su Presidente, o de otro miembro designado por el mismo, a las sesiones de la Tercera Comisión y no hiciera referencia a la asistencia a las sesiones plenarias de la Asamblea General. Manifestó además que, según su interpretación de la recomendación, que debía ser aprobada por la Asamblea General antes de entrar en vigencia, tendría efecto a partir del trigésimo primer período de sesiones de la Asamblea. Esbozó también cuatro funciones que, en su opinión, podía desempeñar el representante del Comité: presentar el

informe anual del Comité; responder a las preguntas y pedidos de informes; formular comentarios, si fuera necesario, sobre las observaciones de los representantes de los Estados Miembros acerca de la labor del Comité; y, quizás, hacer observaciones sobre algunas disposiciones del proyecto de resolución que pudiera presentarse a la Tercera Comisión en el curso del examen por ésta del informe anual del Comité. Los Sres. Haastrup y Lamptey y la Sra. Warzazi estuvieron de acuerdo con los puntos de vista del Sr. Sayegh, y el Sr. Macdonald declaró que los apoyaba en general. El Sr. Safronchuk se opuso a la idea de que se abandonara la práctica consagrada de que un representante del Secretario General presentase a la Tercera Comisión el informe anual del Comité para que en cambio lo hiciera el Presidente u otro miembro del Comité, así como a la idea de que un miembro del Comité asumiera la responsabilidad de interpretar el informe y contestar a las preguntas en nombre de todo el Comité 7/. El Sr. Kapteyn manifestó sus dudas sobre la conveniencia de delegar a un solo miembro la tercera función descrita por el Sr. Sayegh; en su opinión, las observaciones de los representantes de los Estados Miembros debían ser contestadas sólo si se referían a cuestiones de hecho; en caso contrario, en particular si había involucradas cuestiones de política, debían ser remitidas nuevamente al Comité para su examen.

27. El Sr. Dayal recordó que el Comité era un órgano autónomo del sistema de las Naciones Unidas encargado expresamente de la tarea de aplicar las disposiciones de la Convención Internacional sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación Racial, y observó que nadie que no fuera un miembro designado por el Comité como su representante tenía facultades para hablar en su nombre ante la Tercera Comisión. Además, debían rectificarse en nombre del Comité algunas observaciones formuladas en la Tercera Comisión que demostraban cierta falta de comprensión de la labor del Comité y del ámbito de su competencia. Finalmente, la participación de un representante del Comité en los debates de la Tercera Comisión, cuando ésta examinara el informe anual del Comité, daría a la labor del Comité y a sus puntos de vista la necesaria difusión y publicidad.

28. El Sr. Ingles se preguntó si era absolutamente necesario que el Comité enviara un representante a la Tercera Comisión. La Convención no contenía ninguna disposición en ese sentido; y era posible que la Tercera Comisión se contentara con el informe anual y, tal vez, con las actas resumidas de las sesiones del Comité. El examen de las deliberaciones que habían tenido lugar en la Tercera Comisión sobre el informe anual del Comité figuraba cada año en el programa del Comité en su período de sesiones de primavera, y, por tanto, todos los miembros del Comité tenían la oportunidad de expresar sus opiniones, que se reflejaban luego en el informe anual presentado por el Comité a la Asamblea General en su siguiente período de sesiones. Además, el orador temía que se produjera un enfrentamiento entre el representante del Comité y un representante de un Estado Miembro en la Tercera Comisión. Por último, el supuesto en que se basaba la nota del Secretario General sobre las consecuencias financieras de la propuesta era que los gastos de viaje y las dietas del representante del Comité serían sufragados por las Naciones Unidas; sin embargo, la Asamblea General podría no estar de acuerdo con ese supuesto, en cuyo caso se aplicarían las disposiciones del párrafo 6 del artículo 8 de la Convención. Por tanto, surgía la cuestión de si el Comité debería consultar no sólo a la Asamblea General sino también a los Estados partes en la Convención cuyas opiniones tal vez no se habían tenido

7/ Para una exposición más completa de los puntos de vista del Sr. Safronchuk, véanse los párrafos 29 y 30 infra.

debidamente en cuenta en el asunto. Al hacer sus observaciones sobre esta cuestión, el Sr. Lamptey manifestó que, en caso de que la Asamblea General estuviera en desacuerdo con el supuesto en que se basaba la nota del Secretario General, entonces el Comité consideraría la posibilidad de dirigirse a los Estados partes sobre esa cuestión.

29. El Sr. Safronchuk dudaba que se ganara algo haciendo que un miembro del Comité participara en las sesiones de la Tercera Comisión. Algunos miembros habían sugerido que el caso del Comité era análogo al de otros órganos, tales como la Comisión de Derecho Internacional. Pero el Sr. Safronchuk llamó la atención sobre el hecho de que, la diferencia del informe de esa Comisión, que constituía de por sí un tema separado del programa de la Asamblea General y de la Sexta Comisión, el informe anual del Comité para la Eliminación de la Discriminación Racial era simplemente un subtema del programa de la Asamblea General y de la Tercera Comisión. Además, el Sr. Safronchuk señaló que la Comisión de Derecho Internacional preparaba proyectos de convención y tratados para su aprobación por la Asamblea General, y la participación de la Comisión en las deliberaciones sobre su informe estaba plenamente justificada. El Comité, en cambio, no preparaba proyectos para que la Asamblea General los aprobara como propios, sino simplemente informaba sobre sus actividades. Además de ser innecesario e injustificado, el procedimiento propuesto constituía una flagrante violación del párrafo 2 del artículo 9 de la Convención, que estipulaba que "el Comité informará cada año, por conducto del Secretario General, a la Asamblea General de las Naciones Unidas sobre sus actividades". La legalidad del procedimiento contemplado por el Comité era por tanto cuestionable y correspondía a los Estados partes en la Convención expresar sus opiniones sobre la cuestión.

30. El Sr. Tomko compartía las dudas del Sr. Safronchuk respecto del acierto de designar un miembro para que participara en las sesiones de la Tercera Comisión. Los Sres. Haastrup, Kapteyn y Lamptey no convinieron con el análisis de los aspectos jurídicos de la cuestión hecho por el Sr. Safronchuk. Recordaron que en el párrafo 1 del artículo 9 de la Convención (que disponía que los informes de los Estados partes se presentaran al Secretario General, para su examen por el Comité) se había asignado al Secretario General la tarea de transmitir tales informes al Comité, de la misma manera que en el párrafo 2 de dicho artículo se le confiaba la tarea de transmitir el informe del Comité a la Asamblea General. Por consiguiente, si la Asamblea invitaba a un representante del Comité a presentar y examinar su informe, la situación de la Asamblea sería análoga a la del Comité cuando, de conformidad con el artículo 64 A de su reglamento provisional, invitaba a los representantes de los Estados partes a presentar y examinar los informes de sus gobiernos en las sesiones del Comité. (Se recordará que la práctica iniciada por el artículo 64 A del reglamento provisional había sido sugerida por algunos miembros del Comité en primer lugar y posteriormente por la Asamblea General ^{8/} en el párrafo 5 de su resolución 2783 (XXVI), y había sido acogida después con beneplácito por la Asamblea en el párrafo 3 de su resolución 2921 (XXVII) y apoyada en el párrafo 2 de la resolución 3134 (XXVIII).) En respuesta

^{8/} Véase Documentos Oficiales de la Asamblea General, vigésimo séptimo período de sesiones. Suplemento No. 18 (A/8718), párr. 23.

a una pregunta que le hizo el Sr. Safronchuk respecto de la interpretación de la expresión "por conducto del Secretario General" del párrafo 2 del artículo 9 de la Convención, el representante del Secretario General se refirió a la forma como hasta el presente el propio Comité había interpretado y aplicado esa expresión, a saber, mediante una "carta de envío", dirigida al Secretario General por el Presidente del Comité, adjunta a cada uno de los cinco informes anuales del Comité presentados hasta el momento. En dicha carta, luego de hacer referencia a la frase pertinente del párrafo 2 del artículo 9 de la Convención, el Presidente manifestaba que presentaba el informe del Comité al Secretario General para que lo transmitiera a la Asamblea General.

31. Los Sres. Aboul-Nasr, Čalovski, Haastrup, Macdonald y Partsch, reafirmando su apoyo a la decisión adoptada en principio en el 11.º período de sesiones, observaron que era prematuro en la etapa actual entregarse a un debate pormenorizado sobre las funciones que desempeñaría el representante del Comité en las sesiones de la Tercera Comisión; sugirieron que tal debate se aplazara para un período de sesiones futuro, oportunidad en que se reanudaría si la Asamblea General hacía suya la recomendación del Comité. Los Sres. Ancel y Lamprey instaron al Comité a que procediera de inmediato a aprobar su recomendación en el actual período de sesiones.

32. En la 26.ª sesión, el Sr. Haastrup propuso el texto de un proyecto de recomendación. Los Sres. Safronchuk y Tomko reafirmaron sus reservas. No se propusieron enmiendas al proyecto de recomendación. Este fue aprobado sin votación. (Para el texto de la decisión 3 (XII), véase cap. VII, sec. B infra.)

III. DECENIO DE LA LUCHA CONTRA EL RACISMO Y LA DISCRIMINACION RACIAL

33. Se recordará que en su noveno período de sesiones 9/ el Comité decidió mantener este tema en su programa durante todo el Decenio. Durante el año que se examina, el Comité examinó este tema en su 11.º período de sesiones (en las sesiones 228a. a 231a., 233a., 242a. y 243a., celebradas entre el 2 y el 15 de abril de 1975) y en su 12.º período de sesiones (en las sesiones 259a. y 260a., celebradas el 12 y el 15 de agosto de 1975).

11.º período de sesiones

34. En su 11.º período de sesiones, el Comité tomó nota de las resoluciones 3223 (XXIX), de 6 de noviembre de 1974, y 3266 (XXIX), de 10 de diciembre de 1974, de la Asamblea General, así como de los informes del Secretario General al Consejo Económico y Social en su 58.º período de sesiones 10/, que fueron transmitidos al Comité de conformidad con la petición que hiciera al Secretario General en su noveno período de sesiones 9/.

35. Gran parte de los debates iniciales en el Comité se centró en la respuesta de la Asamblea General - expresada en esas dos resoluciones y, en particular, en el párrafo 10 de la resolución 3223 (XXIX) y en el párrafo 6 de la resolución 3266 (XXIX) - a las sugerencias hechas por el Comité en los párrafos 3 y 4 de su decisión 2 (X).

36. Los Sres. Aboul-Nasr, ^vCalovski, Dayal, Lamptey, Macdonald, Ortiz Martín, Safronchuk, Sayegh y Valencia Rodríguez y la Sra. Warzazi expresaron su satisfacción ante la aprobación dada por la Asamblea General a la decisión 2 (X) del Comité, relativa a su participación y cooperación en el programa para el Decenio. Propusieron que el Comité proporcionara ahora más detalles sobre las sugerencias y recomendaciones contenidas en su decisión 2 (X) formulando medios concretos por los cuales pudiera contribuir al cumplimiento de los objetivos del Decenio.

37. Sin embargo, los Sres. Ancel, Ingles y Soler no compartieron la opinión de que el párrafo 10 de la resolución 3223 (XXIX) y el párrafo 6 de la resolución 3266 (XXIX) de la Asamblea General constituyeran una aprobación de las sugerencias hechas por el Comité en su decisión 2 (X). El Sr. Ingles estimaba que la Asamblea no había ni aceptado ni rechazado el ofrecimiento del Comité que figura en los párrafos 3 y 4 de dicha decisión. Señaló que tal vez el ofrecimiento de cooperación del Comité se había redactado en forma ambigua y que sería conveniente manifestar específicamente en qué forma el Comité se proponía participar en el programa para el Decenio. A juicio del Sr. Ancel, la cuestión de si la Asamblea General había aprobado o no la decisión 2 (X) del Comité era una cuestión secundaria. El Comité había ofrecido sus servicios para participar en el Decenio, aunque su competencia estaba limitada por las disposiciones de la Convención, y la Asamblea General había elogiado la participación activa del Comité en la aplicación del programa para el

9/ Ibid., vigésimo noveno período de sesiones, Suplemento No. 18 (A/9618), párr. 38.

10/ E/5636 y Add.1 a 3 y E/5637 y Add.1 y 2.

Decenio "dentro de su competencia con arreglo a la Convención Internacional". Por consiguiente, había una "doble ambigüedad" y el Comité debía tratar de poner término a un debate que podría continuar indefinidamente. Sin embargo, el Sr. Ancel convino en que el Comité presentase propuestas concretas para su participación en el Decenio. En cambio, el Sr. Soler expresó serias dudas en cuanto a la competencia del Comité para participar en el programa para el Decenio. Además, a su juicio, la Asamblea General no había hecho plenamente suyas las sugerencias del Comité. Aunque no se podía hacer ninguna objeción a que los miembros del Comité actuaran a título personal para contribuir a los objetivos del programa, el Comité debía ser muy prudente en lo que se refería a seguir una línea colectiva más allá de sus atribuciones.

38. Durante el examen inicial del tema sobre el Decenio, los Sres. Aboul-Nasr, Lamptey y Sayegh y la Sra. Warzazi expresaron su decepción ante la gama y el ritmo de las actividades emprendidas hasta ese momento por las Naciones Unidas en la aplicación del Programa para el Decenio y señalaron la "falta de dinamismo" y la "lentitud" de esas actividades. Consideraban que, dado que la aplicación del programa se había colocado bajo la supervisión del Consejo Económico y Social y se había asignado una función importante al Secretario General, era esencial que se informara al Consejo acerca de la opinión del Comité. En cambio, el Sr. Valencia Rodríguez opinó que el Decenio estaba progresando plenamente, especialmente en esferas tales como la educación, la información pública, la negación de apoyo a los regímenes racistas, la introducción de reformas legislativas y la adhesión a la Convención.

39. La mayoría de los miembros del Comité sostuvo la opinión de que el Comité debía reiterar su deseo de participar en la conferencia internacional que sería convocada conforme al programa para el Decenio, que debía expresar clara y concretamente las formas en que podría contribuir a que se lograsen con éxito los objetivos del Decenio y que debía transmitir sus sugerencias y recomendaciones al Consejo Económico y Social, que era el comité preparatorio de la conferencia y el órgano de las Naciones Unidas encargado de la supervisión y coordinación de las actividades que se habían de emprender en virtud del programa.

40. En la 229a. sesión, el 2 de abril de 1975, el Sr. Lamptey propuso que, para que el Comité formulase sus ideas más concretamente, se crease un pequeño grupo de trabajo, bajo la presidencia del Relator, con el objeto de preparar un documento que contuviera sugerencias que el Comité examinaría y el Secretario General podría señalar luego a la atención del Consejo Económico y Social. Los Sres. Aboul-Nasr, Dehlavi, Macdonald y Tomko apoyaron la propuesta, pero los Sres. Ingles y Sayegh consideraron prematura la creación de un grupo de trabajo en esta etapa, porque debería darse a ese grupo directrices más adecuadas para que pudiese preparar un documento que reflejara el consenso del Comité. En la misma sesión, el Presidente sugirió que el grupo de trabajo estuviese integrado por los Sres. Calovski, Dayal, Kapteyn, Lamptey y Valencia Rodríguez, bajo la presidencia del Relator, y el Comité aceptó esa propuesta.

41. En la 230a. sesión, el 4 de abril de 1975, el Relator presentó el informe ~~de~~ del Grupo de Trabajo, que constaba de tres proyectos de decisión. A petición del Grupo de Trabajo, los dos primeros proyectos habían sido preparados por el Sr. Sayegh y el tercero por el Sr. Valencia Rodríguez, si bien todos ellos reflejaban el consenso a que se había llegado en el Grupo de Trabajo. Los tres proyectos de

decisión se relacionaban, respectivamente, con: a) la participación del Comité en el programa para el Decenio, b) las relaciones con los regímenes racistas, y c) el trigésimo aniversario de la derrota del nazismo y el fascismo. Los proyectos fueron examinados por el Comité en sus sesiones 230a., 231a., 233a., 242a. y 243a., celebradas entre el 4 y el 15 de abril de 1975.

42. Durante el examen de los tres proyectos de decisión, varios miembros del Comité sugirieron enmiendas. En la 242a. sesión, el Sr. Valencia Rodríguez presentó un texto revisado del tercer proyecto de decisión, relativo al trigésimo aniversario de la derrota del nazismo y el fascismo, en que se tenían en cuenta algunas de las observaciones formuladas por los miembros del Comité respecto del texto original.

43. En la 231a. sesión, el 4 de abril de 1975, se aprobó por unanimidad el primer proyecto de decisión, con algunas enmiendas (decisión 1 (XI)). En la 233a. sesión, el 7 de abril de 1975, se aprobó el segundo proyecto de decisión, con algunas enmiendas, por 11 votos contra ninguno y 3 abstenciones (decisión 2 (XI)). Por último, en la 242a. sesión, el 14 de abril de 1975, el texto revisado del tercer proyecto de decisión fue aprobado por consenso pero un miembro expresó reservas (decisión 4 (XI)). (Para los textos de esas decisiones, véase cap. VII, secc. A, infra.)

12.º período de sesiones

44. De conformidad con el párrafo 5 de la decisión 1 (XI) del Comité, el Secretario General informó al Comité, en su 12.º período de sesiones, sobre las medidas tomadas por el Consejo Económico y Social en su 58.º período de sesiones en relación con el programa para el Decenio. A ese respecto, fueron transmitidos al Comité el informe del Comité de Asuntos Sociales que figuraba en el documento E/5669, el texto de la resolución 1938 (LVIII) del Consejo Económico y Social y la nota del Secretario General a la Asamblea General que figuraba en el documento A/10145. El Secretario General facilitó además al Comité el texto del cuestionario que se había distribuido a los Estados Miembros de las Naciones Unidas de conformidad con el párrafo 18 e) del programa para el Decenio.

45. En la 259a. sesión, el 12 de agosto de 1975, el representante del Secretario General proporcionó oralmente al Comité información adicional sobre las actividades del Comité Administrativo de Coordinación en relación con el Programa para el Decenio y sobre las actividades de la División de Derechos Humanos y de la Oficina de Información Pública relacionadas con dicho Programa.

46. En esa sesión, varios miembros del Comité hicieron observaciones sobre el cuestionario enviado por el Secretario General de conformidad con el inciso e) del párrafo 18 del Programa para el Decenio, anexo a la resolución 3057 (XXVIII) de la Asamblea General, de 2 de noviembre de 1973, y sobre la resolución 1938 (LVIII) del Consejo Económico y Social, de 6 de mayo de 1975.

47. Con respecto a la pregunta 3 del cuestionario, el Sr. Aboul-Nasr opinó que se debería haber hecho referencia en términos más enérgicos a otras formas de discriminación racial, aparte de la difusión de ideas basadas en la superioridad y el odio raciales (mencionada en el inciso c) de esa pregunta). El Sr. Ancel opinó que el inciso c) de la pregunta No. 3 iba demasiado lejos y podía interpretarse como una violación de la libertad de expresión, ya que parecía suponer que los Estados Miembros debían castigar toda difusión de ideas basadas en la superioridad racial y

no solamente las actividades de propaganda encaminadas a fomentar la discriminación racial. En forma análoga, el Sr. Kapteyn opinó que la redacción del inciso c) de la pregunta No. 3 iba más allá de lo estipulado en el inciso iii) del párrafo 12 del Programa para el Decenio.

48. El Sr. Aboul-Nasr preguntó por qué la pregunta No. 4 se refería sólo a los derechos económicos, sociales y culturales, y no mencionaba igualmente los derechos civiles y políticos.

49. El Sr. Ancel estimó que podía interpretarse que la pregunta No. 5 sugería la creación de mecanismos especiales y procedimientos de recursos excepcionales, aparte de los mecanismos y procedimientos habituales.

50. Con respecto a las preguntas Nos. 11 y 12, el Sr. Aboul-Nasr preguntó por qué se mencionaba sólo la Convención Internacional sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación Racial, y no la Convención Internacional sobre la Represión y el Castigo del Crimen de Apartheid. El Sr. Sayegh consideró muy satisfactorio el inciso a) de la pregunta No. 12, pues se ajustaba plenamente al inciso d) del párrafo 3 de la decisión 1 (XI) del Comité.

51. La Sra. Warzazi estimó que la pregunta No. 13 era superflua, dado que la Asamblea General, en el inciso b) del párrafo 5 de la resolución 3223 (XXIX), había pedido encarecidamente a todos los Estados Miembros que firmaran y ratificaran, entre otros documentos, la Convención Internacional sobre la Represión y el Castigo del Crimen de Apartheid.

52. Algunos miembros del Comité lamentaron que no se hubieran incluido ciertas preguntas en el cuestionario enviado por el Secretario General. El Sr. Aboul-Nasr estimó que, de conformidad con el inciso e) del párrafo 13 del Programa para el Decenio debía haberse incluido en el cuestionario un párrafo en que se preguntara si los Gobiernos estaban denegando a los regímenes racistas todo apoyo o asistencia que les permitiera perpetuar sus políticas o prácticas. Y el Sr. Čalovski opinó que el cuestionario no era suficientemente explícito al solicitar información sobre la condición de las minorías étnicas y nacionales.

53. El Sr. Safronchuk consideró que las diez primeras preguntas del cuestionario correspondían a disposiciones sustantivas de la Convención Internacional sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación Racial respecto de las cuales, de conformidad con el artículo 9, los Estados partes en dicha Convención debían presentar informes periódicos. Por lo tanto, los Estados Miembros de las Naciones Unidas que fueran también partes en la Convención tendrían que presentar dos informes en los que figuraría aproximadamente la misma información. Sin embargo, el Sr. Sayegh llamó la atención hacia la comunicación del Secretario General que acompañaba el cuestionario, en la que se expresaba que, si los Gobiernos lo consideraran conveniente, al responder a cualquiera de las preguntas se podía hacer referencia concreta a la información transmitida anteriormente de conformidad con lo previsto en la Convención o en otras resoluciones de los órganos competentes de las Naciones Unidas. Refiriéndose al argumento de que iba a surgir una dificultad con respecto a la distribución de los informes conforme al artículo 9 a que se había referido un Estado parte en su respuesta al cuestionario, el Sr. Dayal declaró que había, a su juicio, una falta de lógica básica en el procedimiento del Comité que consideraba

el examen de los informes conforme al artículo 9 como libre, pero no los informes propiamente dichos, que se consideraban como reservados 11/. Mientras las reglas no fuesen enmendadas, consideró el Sr. Dayal, la falta de lógica de los procedimientos del Comité continuarían dando lugar a tales anomalías. Por lo tanto, para obviar la necesidad de tener que recurrir a subterfugios de procedimiento para salvar contradicciones análogas, el Sr. Dayal propuso que se introdujese la pertinente enmienda al reglamento provisional del Comité.

54. Los Sres. Safronchuk y Ancel opinaron que el cuestionario se componía de dos partes, en una de las cuales estaban agrupadas las preguntas correspondientes a las disposiciones sustantivas de la Convención Internacional sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación Racial. Según el Sr. Safronchuk, esa parte debió haber sido enviada sólo a los Estados Miembros que no eran aún partes en la Convención, para evitar la duplicación que se produciría al enviarla también a los Estados Partes en la Convención. Según el Sr. Ancel, a los Estados Miembros que no eran partes en la Convención no se les podía formular las preguntas relativas a la aplicación de las disposiciones de la Convención; sólo podía preguntárseles por qué no se habían adherido a la Convención. El Sr. Safronchuk sostuvo que la Asamblea General podía muy bien formular esas otras preguntas a los Estados que no eran partes en la Convención, ya que lo haría de conformidad con la Carta y otras obligaciones contraídas por todos los Estados Miembros. El Sr. Dayal afirmó que la Asamblea General procedía en debida forma al formular preguntas relativas a la aplicación de las disposiciones de la Convención a los Estados que no eran partes en ella, pues ello se ajustaba a su propia resolución 3266 (XVIX), en la cual, a la vez que hacía un llamamiento a los Estados que aún no eran partes en la Convención para que se adhirieran a ella, les pedía que mientras tanto se guiasen por las disposiciones básicas de la Convención en su política interna y externa. La Sra. Warzazi recordó que, en el párrafo 18 e) del Programa para el Decenio, no se había hecho distinción alguna entre los Estados Miembros según fueran o no partes en la Convención. Y el representante del Secretario General expresó que cualquiera distinción de esa índole debía ser hecha por los órganos y organismos competentes interesados y no por el Secretario General.

55. Durante el examen del cuestionario, el Sr. Aboul-Nasr dijo que era de lamentar que el documento no hubiese sido puesto a disposición del Comité en una fecha más temprana; el Sr. Ingles declaró que no creía que tuviese sentido llamar la atención sobre los defectos de un cuestionario que ya había sido distribuido a los Estados Partes, y que él tenía entendido que el cuestionario había sido distribuido a los miembros del Comité a fin de informarles de que el Secretario General había cumplido con lo solicitado en el párrafo 3 b) de la decisión 1 (XI) al incluir la pregunta No. 12 en el cuestionario; y la Sra. Warzazi expresó la esperanza de que las observaciones hechas por los miembros del Comité se tendrían en cuenta al preparar futuros cuestionarios. El representante del Secretario General, aunque señaló que el cuestionario se basaba fundamentalmente en el Programa para el Decenio y, en especial, en el párrafo 12, aseguró al Comité que todas las observaciones de sus miembros se tendrían en cuenta al preparar futuros cuestionarios.

11/ Véase Documentos Oficiales de la Asamblea General, vigésimo noveno período de sesiones, Suplemento No. 18 (A/9618), párrs. 21 a 30, y cap. VII, sec. A, decisión 1 (IX).

56. Respecto de la resolución 1938 A (LVIII) del Consejo Económico y Social, el Sr. Valencia Rodríguez señaló que el párrafo 3 de la parte dispositiva demostraba que la aprobación por el Comité de la decisión 1 (XI) era oportuna. Sin embargo, la mayor parte del debate giró en torno al proyecto de resolución contenido en el párrafo 5 de la parte dispositiva de la resolución que se examinaba.

57. El Sr. Valencia Rodríguez concedió especial importancia a los incisos a), b), f) y h) del párrafo 3 del proyecto de resolución propuesto por el Consejo Económico y Social. El Sr. Sayegh señaló que el inciso b) del párrafo 3 del proyecto de resolución reforzaba la decisión 2 (XI) del Comité. Y tanto él como el Sr. Safronchuk elogiaron el inciso f) del párrafo 3.

58. El párrafo 4 del propuesto proyecto de resolución fue objeto de observaciones por parte de la mayoría de los miembros del Comité que participaron en el debate. Los Sres. Aboul-Nasr, Čalovski, Dañal, Macdonald, Partsch, Safronchuk y Valencia Rodríguez y la Sra. Warzazi señalaron que la redacción de ese párrafo implicaba que los Estados partes cumplían plenamente las obligaciones que les incumbían en virtud de la Convención, incluidas las que se derivaban del artículo 9, lo que no estaba de acuerdo con la situación existente. Todos ellos convinieron en que la cuestión se debería señalar a la atención de la Asamblea General, aunque diferían respecto de cuáles eran los medios más apropiados que el Comité debería emplear para ello. Por otra parte, el Sr. Ingles no tenía objeciones al párrafo con cuyo principio general él no podía menos que convenir; además, dudaba de que fuera adecuada la propuesta de enmienda hecha por el Comité a un proyecto de resolución presentado por el Consejo Económico y Social a la Asamblea General.

59. En relación con el párrafo 6 del propuesto proyecto de resolución dirigido a las federaciones deportivas nacionales de los Estados Miembros, el Sr. Partsch señaló que "una cosa era aislar a los Gobiernos racistas, y otra cosa enteramente diferente era aislar a las poblaciones sometidas a esos Gobiernos, ya que de ese modo se les negaría la oportunidad de cambiar la situación existente en sus países". El Sr. Ancel hizo suya la posición adoptada por el Sr. Partsch, pero los Sres. Aboul-Nasr, Čalovski, Ingles y Kapteyn manifestaron que no podían apoyarla y afirmaron su apoyo al párrafo 6 del proyecto de resolución.

60. El Sr. Valencia Rodríguez interpretó el párrafo 7 del propuesto proyecto de resolución en el sentido de que estaba encaminada a animar al Comité a que participara activamente en el Programa para el Decenio; la Sra. Warzazi consideró que ese párrafo apoyaba las recomendaciones hechas por el Comité en su decisión 1 (XI); y a juicio de los Sres. Čalovski, Haastrup y Sayegh, dicho párrafo invitaba al Comité y a otros órganos a continuar haciendo sugerencias y acogía con beneplácito sus contribuciones. Sin embargo, el Sr. Ancel preguntó cuáles eran las actividades concretas pertinentes del Decenio en que podía cooperar el Comité, y el Sr. Soler formuló algunas reservas respecto de dicho párrafo que, a su juicio, planteaba un problema respecto de la cuestión de la competencia del Comité. Considerando que dicho párrafo constituía una invitación a que el Comité presentara contribuciones y sugerencias en relación con el Programa para el Decenio, el Sr. Safronchuk sugirió que el Comité estaba en condiciones de prestar ayuda, especialmente en lo relativo a las peticiones y otros documentos a que se hacía referencia en el artículo 15 de la Convención.

61. En relación con el párrafo 8 del propuesto proyecto de resolución, el Sr. Aboul-Nasr preguntó cuáles eran las medidas que el Secretario General tenía la intención de adoptar para aplicar dicho párrafo, en caso de que la Asamblea General aprobara el proyecto de resolución. El representante del Secretario General hizo referencia a algunas medidas ya adoptadas, incluida la convocación por parte de la División de Derechos Humanos de un seminario sobre "Derechos humanos de los trabajadores migrantes", respecto del cual se había invitado a un miembro del Comité, el Sr. Valencia Rodríguez, a que preparara uno de los documentos de antecedentes. También señaló que se esperaba que otro miembro del Comité, la Sra. Warzazi, que había preparado un estudio sobre el tema del seminario en su calidad de Relator Especial de la Subcomisión de Prevención de Discriminaciones y Protección a las Minorías, participara en ese seminario, y que la Oficina de Información Pública había organizado un programa de radio, en el que habían participado seis miembros del Comité.

62. En la 260a. sesión, el 15 de agosto de 1975, el Sr. Sayegh presentó un proyecto de declaración relativa al proyecto de resolución propuesto por el Consejo Económico y Social. Según dicho proyecto de declaración, el Comité acogería complacido los párrafos 3 f), 4, 7 y 8 de la parte dispositiva del proyecto de resolución, pero también expresaría la esperanza de que el texto del párrafo 4 fuera enmendado de manera que tuviera en cuenta la detallada información contenida en el capítulo IV, sección A, y el anexo III del presente informe. El Comité también manifestaría la opinión de que la palabra "continuar" del párrafo 4 de la parte dispositiva del proyecto de resolución implicaba una situación de pleno cumplimiento por parte de los Estados partes de las obligaciones que les incumbían en virtud de los artículos pertinentes de la Convención, lo que por desgracia no se daba en relación con el artículo 9. Además, el Comité pediría al Secretario General que señalara dicha declaración a la atención de la Tercera Comisión de la Asamblea General cuando examinara el proyecto de resolución.

63. En la misma sesión, el texto del proyecto de declaración con las enmiendas introducidas durante el debate fue aprobado sin objeciones. (Para el texto de la declaración aprobado por el Comité, véase el cap. VII, secc. B, decisión 2 (XII) infra).

IV. EXAMEN DE LOS INFORMES, LAS OBSERVACIONES Y LA INFORMACION
PRESENTADOS POR LOS ESTADOS PARTES DE CONFORMIDAD CON EL
ARTICULO 9 DE LA CONVENCION

A. Recepción de los informes 12/

Informes recibidos por el Comité

64. Desde la creación del Comité hasta la fecha de clausura de su 12.^o período de sesiones, debían haberse recibido 186 informes de Estados partes, de conformidad con el párrafo 1 del artículo 9 de la Convención, a saber: 81 informes iniciales, 65 segundos informes periódicos y 40 terceros informes periódicos. Al finalizar el 12.^o período de sesiones, se habían recibido 162 de esos informes: 73 informes iniciales, 53 segundos informes periódicos y 36 terceros informes periódicos. Durante el año que se examina (es decir, en el período comprendido entre el décimo período de sesiones y la terminación del 12.^o período de sesiones) se recibieron 23 informes, a saber: seis informes iniciales, siete segundos informes periódicos y diez terceros informes periódicos.

65. Además, al finalizar el 12.^o período de sesiones debían haberse recibido seis informes complementarios solicitados por el Comité de conformidad con el párrafo 1 del artículo 9 de la Convención; durante el período que se examina se recibieron tres.

66. En el cuadro 1 figura la información pertinente sobre todos los informes recibidos durante el año que se examina.

12/ En el anexo III se indican las fechas en que debían presentarse o se recibieron todos los informes (informes iniciales, segundos y terceros informes periódicos e informes complementarios) durante el año que se examina, así como las de los recordatorios (en su caso) enviados de conformidad con el artículo 66 del reglamento provisional y decisiones del Comité.

Cuadro 1

Informes recibidos durante el año que se examina

Estado parte	Tipo de informe	Fecha en que debía presentarse el informe	Fecha en que se presentó el informe	Número de recordatorios enviados al Estado parte
Líbano Zambia Senegal Trinidad y Tabago Botswana Malí	Inicial	12 de diciembre de 1972 5 de marzo de 1973 13 de mayo de 1973 4 de noviembre de 1974 22 de marzo de 1975 15 de agosto de 1975	30 de julio de 1975 11 de marzo de 1975 23 de abril de 1975 28 de julio de 1975 1.º de agosto de 1975 30 de diciembre de 1974	- 4 3 1 1 -
República Unida del Camerún Chile Suecia Dinamarca Países Bajos Cuba Austria	Segundo periódico	24 de julio de 1974 20 de noviembre de 1974 5 de enero de 1975 8 de enero de 1975 9 de enero de 1975 16 de marzo de 1975 8 de junio de 1975	11 de julio de 1975 16 de julio de 1975 2 de enero de 1975 8 de enero de 1975 18 de marzo de 1975 21 de mayo de 1975 12 de agosto de 1975	2 1 - - - - -
Checoslovaquia India Níger República Árabe Libia Uruguay Venezuela Yugoslavia Reino Unido Santa Sede Mongolia	Tercero periódico	5 de enero de 1974 5 de enero de 1974 5 de enero de 1974 5 de enero de 1974 5 de enero de 1974 5 de enero de 1974 5 de enero de 1974 5 de abril de 1974 1.º de junio de 1974 5 de septiembre de 1974	21 de octubre de 1974 22 de agosto de 1974 23 de agosto de 1974 8 de octubre de 1974 4 de agosto de 1975 15 de julio de 1975 14 de agosto de 1974 2 de marzo de 1975 3 de enero de 1975 9 de abril de 1975	2 - 1 2 3 3 1 1 1 -
Bolivia Haití Chipre	Complementario	31 de marzo de 1975 31 de marzo de 1975 4 de agosto de 1975	12 de diciembre de 1974 24 de abril de 1975 30 de junio de 1975	- - -

67. Tal como indica la información que figura en el cuadro 1, únicamente cinco de los informes recibidos durante el año que se examina fueron presentados puntualmente, los demás se presentaron con alguna demora, que osciló entre unos pocos días y 23 meses. En el caso de 14 de los informes recibidos durante el año, se enviaron de uno a cuatro recordatorios al Estado interesado antes de que el informe fuera presentado.

Informes no recibidos por el Comité

68. Al finalizar el 12.º período de sesiones del Comité, no se habían recibido 27 informes que debían haber sido presentados antes de esa fecha: ocho informes iniciales, 12 segundos informes periódicos, cuatro terceros informes periódicos y tres informes complementarios. La información pertinente sobre estos informes figura en el cuadro 2.

Medidas adoptadas por el Comité para asegurar la presentación de informes de los Estados partes en virtud del artículo 9 de la Convención

69. De conformidad con el párrafo 1 del artículo 66 de su reglamento provisional, el Comité, en su 11.º período de sesiones, pidió al Secretario General que enviara recordatorios a todos los Estados partes cuyos informes debían haber sido presentados antes de la fecha de clausura de ese período de sesiones, pero que para entonces no se habían recibido. En consecuencia, el Secretario General envió un sexto recordatorio a la República Centroafricana, un quinto recordatorio a Lesotho, terceros recordatorios al Togo, Túnez y la República Unida de Tanzania, segundos recordatorios a Jamaica y Malta, y primeros recordatorios a Argelia, Botswana, Chile, Francia, el Iraq, Laos, el Perú, Tonga, Trinidad y Tabago, el Uruguay, Venezuela y Zambia.

70. En su 12.º período de sesiones, el Comité examinó otros métodos para estimular a los Estados partes a cumplir sus obligaciones en virtud del artículo 9 de la Convención. En su 247a. sesión, el 4 de agosto de 1975, el Comité aprobó una propuesta, presentada por el Sr. Dayal, de que el Presidente invitara a los Representantes Permanentes de ciertos Estados partes a reunirse con él durante el período de sesiones, de modo que pudiera averiguar las razones por las cuales los Gobiernos de esos Estados no habían presentado sus informes iniciales. El Sr. Dayal sugirió que la invitación se dirigiera en primer término a los Representantes Permanentes de la República Centroafricana, Lesotho, el Togo y la República Unida de Tanzania, a cuyos Gobiernos se habían enviado tres o más recordatorios en relación con sus informes iniciales. El Comité también aprobó una sugerencia de que se incluyera al Perú en la lista, dado que el Comité había examinado en su décimo período de sesiones una comunicación del Perú 13/. En la 252a. sesión, el 7 de agosto de 1975, el Presidente comunicó al Comité que se habían efectuado los arreglos para celebrar una reunión con los representantes de cinco de los Estados partes interesados el 6 de agosto de 1975, pero que sólo habían asistido los representantes del Togo y de la República Unida de Tanzania. El Presidente exhortó a los miembros del Comité a que, de poder hacerlo, discutieran individualmente con los tres representantes que no habían respondido a la invitación del Presidente la importancia que el Comité concedía al cumplimiento por los Estados partes de sus obligaciones en virtud del artículo 9 de la Convención.

13/ Véase Documentos Oficiales de la Asamblea General, vigésimo noveno período de sesiones, Suplemento No. 18 (A/9618), párrs. 243 y 244 y anexo IV, sec. D.

Cuadro 2

Informes que debían haber sido presentados durante el año que se examina pero que no habían sido recibidos al finalizar el mismo

Estado parte	Tipo de informe	Fecha en que debía presentarse el informe	Número de recordatorios enviados antes del 12º período de sesiones
(República (Centroafricana	(Inicial	(14 de abril de 1972	(6
(República (Centroafricana	(Segundo	(14 de abril de 1974	(-
(Lesotho	(Inicial	(4 de diciembre de 1972	(5
(Lesotho	(Segundo	(4 de diciembre de 1974	(-
Togo	Inicial	1.º de octubre de 1973	3
República Unida de Tanzania	Inicial	26 de noviembre de 1973	3
Túnez	Tercero	5 de enero de 1974	3
Malta	Segundo	26 de junio de 1974	2
Jamaica	Segundo	5 de julio de 1974	2
Francia	Segundo	28 de agosto de 1974	1
(Perú	(Segundo	(30 de octubre de 1974	(1
(Perú	(Complementario	(31 de marzo de 1975	(-
Líbano	Segundo	12 de diciembre de 1974	-
Iraq	Tercero	15 de febrero de 1975	1
Zambia	Segundo	5 de marzo de 1975	1
Argelia	Segundo	15 de marzo de 1975	1
(Tonga	(Complementario	(25 de marzo de 1974	(-
(Tonga	(Segundo	(17 de marzo de 1975	(1
Laos	Inicial	24 de marzo de 1975	1
Sierra Leona	Complementario	31 de marzo de 1975	-
Senegal	Segundo	18 de mayo de 1975	-
Mauricio	Segundo	29 de junio de 1975	-
Jordania	Inicial	30 de junio de 1975	-
Grecia	Tercero	19 de julio de 1975	-
Emiratos Arabes Unidos	Inicial	21 de julio de 1975	-
Finlandia	Tercero	16 de agosto de 1975	-
Alto Volta	Inicial	18 de agosto de 1975	-

71. En la 261a. sesión (12.º período de sesiones), el 15 de agosto de 1975, el Comité aprobó varias propuestas formuladas por la Mesa en relación con los recordatorios que se habían de enviar a los Estados partes de conformidad con el párrafo 1 del artículo 66 del reglamento provisional. Teniendo en cuenta el número de recordatorios anteriormente enviados a cada uno de los Estados partes interesados, los informes aún pendientes y la fecha en que debía presentarse el próximo informe, el Comité decidió que se enviaran recordatorios a 19 Estados partes, según se indica a continuación:

1) Un séptimo recordatorio al Gobierno de la República Centroafricana en que se le solicite que presente en un solo documento su informe inicial y su segundo informe periódico, junto con su tercer informe periódico (que debería presentarse el 14 de abril de 1976), antes de la fecha de apertura del 13.º período de sesiones (29 de marzo de 1976);

2) Un sexto recordatorio al Gobierno de Lesotho, en que se le solicite que presente un solo documento, antes del 1.º de enero de 1976, su informe inicial y su segundo informe periódico;

3) Un cuarto recordatorio al Gobierno del Togo, en que se le solicite que presente en un solo documento su informe inicial y su segundo informe periódico antes del 1.º de octubre de 1975, fecha en que vence el plazo para la presentación de su segundo informe periódico;

4) Un cuarto recordatorio al Gobierno de la República Unida de Tanzania, en que se le solicite que presente su informe inicial y su segundo informe periódico en un solo documento, antes del 26 de noviembre de 1975, fecha en que vence el plazo para la presentación de su segundo informe periódico;

5) Un cuarto recordatorio al Gobierno de Túnez, en que se le solicite que presente sus informes periódicos tercero y cuarto en un solo documento antes del 5 de enero de 1976, fecha en que vence el plazo para la presentación de su cuarto informe periódico;

6) Terceros recordatorios a los Gobiernos de Jamaica y Malta, segundos recordatorios a los Gobiernos de Argelia, Francia y Zambia y un primer recordatorio al Gobierno de Mauricio, en que se pida a cada uno de estos países que envíen su segundo informe periódico antes del 1.º de enero de 1976;

7) Segundos recordatorios a los Gobiernos del Perú y de Tonga, en que se pida a cada uno de ellos que presente en un solo documento, antes del 1.º de enero de 1976, su segundo informe periódico y el informe suplementario solicitado anteriormente por el Comité;

8) Primeros recordatorios a los Gobiernos del Líbano y el Senegal, en que se pida a cada uno de ellos que presente su segundo informe periódico antes del 1.º de enero de 1976 y que incluya en ese informe la información adicional que había solicitado el Comité en su 12.º período de sesiones, en el curso de su examen del informe inicial de ese Gobierno;

9) Un segundo recordatorio al Gobierno de Laos, en que se le pida que envíe su informe inicial antes del 1.º de enero de 1976;

10) Un primer recordatorio al Gobierno de Sierra Leona, en que se le pida que presente en un solo documento, antes del 5 de enero de 1976, el informe suplementario que había solicitado anteriormente el Comité y el cuarto informe periódico, el plazo para cuya presentación vencerá en esa fecha;

11) Primeros recordatorios a los Gobiernos de los Emiratos Arabes Unidos y de Jordania, en que se les pida que presenten sus informes iniciales antes del 1º de enero de 1976.

El Comité aprobó también la sugerencia de la Mesa en el sentido de que no se enviaran recordatorios a los Gobiernos de Grecia y del Iraq, que ya habían informado al Comité de que sus informes respectivos estaban en preparación, ni tampoco a los Gobiernos del Alto Volta y de Finlandia, cuyos informes debían presentarse el 16 y el 18 de agosto de 1975, respectivamente.

72. Se recordará que el artículo 66 del reglamento provisional del Comité dispone:

"1. En cada período de sesiones, el Secretario General notificará al Comité acerca de todos los casos en que no se hubieran recibido los informes o la información adicional, según corresponda, previstos en el artículo 9 de la Convención. El Comité, en tales casos, podrá transmitir al Estado parte interesado, por intermedio del Secretario General, un recordatorio respecto de la presentación del informe o de la información adicional.

"2. Si aún después de transmitido el recordatorio a que se hace referencia en el párrafo 1 de este artículo, el Estado parte no presentara el informe o la información adicional requeridos en virtud del artículo 9 de la Convención, el Comité incluirá una referencia a este efecto en su informe anual a la Asamblea General." 14/

De conformidad con lo dispuesto en el párrafo 2 del artículo 66, el Comité señala a la atención de la Asamblea General la información correspondiente que figura en el cuadro 2, (párr. 68 supra).

73. A este respecto, el Comité reitera una vez más la siguiente comunicación aprobada en su primer período de sesiones y enviada a todos los Estados partes y a la Asamblea General:

"El Comité atribuye gran importancia a esos informes. La opinión unánime de sus miembros es que tales informes por constituir una fuente principal de información, proporcionan al Comité un elemento esencial para el desempeño de una de sus funciones más importantes, a saber, la presentación de informes a la Asamblea General de las Naciones Unidas, en virtud del párrafo 2 del artículo 9 de la Convención." 15/

El Comité mantiene esa opinión.

14/ Ibid., vigésimo quinto período de sesiones, Suplemento No. 27 (A/8027), anexo II.

15/ Ibid., anexo III, sec. A.

B. Examen de los informes

74. En sus períodos de sesiones 11.^o y 12.^o, el Comité terminó el estudio de todos los informes presentados de conformidad con el párrafo 1 del artículo 9 de la Convención por los Estados partes durante el año que se examina, sobre el segundo informe periódico de Cuba, cuyos anexos no se habían recibido al finalizar el 12.^o período de sesiones. Además, el Comité consideró los terceros informes periódicos de la Argentina y de Chipre, cuyo examen se había aplazado para el 11.^o período de sesiones a solicitud de los Gobiernos de esos dos Estados 16/.

75. En los períodos de sesiones 11.^o y 12.^o, el Comité examinó 27 informes presentados por 25 Estados partes (véase el anexo IV).

76. El Comité dedicó 26 de las 43 sesiones que celebró en 1975 al cumplimiento de sus obligaciones en virtud del artículo 9 de la Convención, tal como se describe en los dos párrafos precedentes.

77. De conformidad con el artículo 64 A de su reglamento provisional, el Comité continuó con la práctica - iniciada en su cuarto período de sesiones 17/ - de pedir al Secretario General que notificara a los Estados partes interesados de las fechas en que habrían de examinarse sus informes respectivos. El Comité se complace en señalar que un representante de un Estado informante participó en el examen de todos los informes presentados en virtud del artículo 9 de la Convención y considerados por el Comité en sus períodos de sesiones 11.^o y 12.^o.

78. Los párrafos siguientes se han dispuesto por países, según el orden adoptado por el Comité en sus períodos de sesiones 11.^o y 12.^o al examinar los informes presentados por los Estados partes, con excepción del caso del informe suplementario sobre Chipre, que fue solicitado por el Comité en el 11.^o período de sesiones y examinado en el 12.^o, y que se analiza más adelante junto con el tercer informe periódico de Chipre, que fue examinado en el 11.^o período de sesiones.

Argentina

79. Los miembros del Comité observaron que en la información que figuraba en el tercer informe periódico de la Argentina, junto con la información suministrada en informes anteriores, se describía el cumplimiento por el Estado informante de sus obligaciones en virtud de los artículos 4, 5 y 6 de la Convención. También se advirtió que, además de ocuparse de los artículos constitucionales y las disposiciones legislativas, el informe se refería a las medidas judiciales, tal como se solicitaba en el párrafo 1 del artículo 9 de la Convención. Se observó que se suministraban los textos completos de todos los artículos pertinentes de la Constitución y todas las disposiciones legislativas a que se hacía referencia en dicho informe o en informes anteriores. En cambio, no se presentaba información alguna sobre el cumplimiento de las obligaciones en virtud del artículo 7 de la Convención. El Estado informante tampoco proporcionaba la información prevista en las recomendaciones generales III (sobre relaciones con regímenes racistas) y IV (sobre población).

16/ Ibid., vigésimo noveno período de sesiones, Suplemento No. 18 (A/9618), párr. 75.

17/ Ibid., vigésimo sexto período de sesiones, Suplemento No. 18 (A/8418 y Corr.2), párr. 36.

80. Algunos miembros dudaron de que la información disponible fuese suficiente para demostrar que el Estado informante había dado pleno cumplimiento a las exigencias del artículo 4 de la Convención, y otros quedaron en la incertidumbre con respecto a la situación actual de la legislación correspondiente al tema de los párrafos a) y b) de ese artículo. Los miembros opinaron que, según lo informado, la legislación en vigencia sólo satisfacía parcialmente los requisitos de los artículos 5 y 6 de la Convención.

81. Se formularon preguntas sobre el alcance de los "derechos civiles" en la legislación argentina; sobre la connotación de la expresión "prerrogativas de sangre y nacimiento" empleada en el artículo 16 de la Constitución; sobre los derechos de que gozaban los trabajadores migrantes; sobre si los derechos de que gozaban los extranjeros, según los artículos 14 a 20 de la Constitución, que al parecer aseguraban a los extranjeros los mismos derechos de que gozaban los ciudadanos, incluían los derechos políticos; sobre la aplicabilidad del recurso de amparo a los actos de discriminación racial perpetrados por particulares o grupos; y sobre el alcance territorial de la aplicación de la ley relativa al recurso de amparo, y en especial si era aplicable a la Antártida.

82. La representante de la Argentina hizo comentarios sobre las preguntas relativas a los derechos de los trabajadores migrantes y a la aplicabilidad del recurso de amparo a la Antártida. Indicó que transmitiría a su Gobierno las observaciones formuladas por los miembros del Comité, para que fueran tenidas en consideración en informes futuros.

Bolivia

83. La mayoría de los miembros del Comité observaron que el segundo informe periódico de Bolivia contenía más información que el inicial y que la subsiguiente comunicación de Bolivia, que se había examinado en los períodos de sesiones cuarto y décimo, respectivamente. Sin embargo, afirmaron que buena medida de la información contenida en el segundo informe periódico guardaba, en el mejor de los casos, una relación indirecta con las disposiciones de la Convención, en tanto que faltaba la mayor parte de la información requerida en virtud del artículo 9 de la Convención. Salvo el texto del artículo 6 de la Constitución, no se proporcionaba información sobre las medidas legislativas, judiciales, administrativas o de otra índole que se hubieran adoptado para hacer efectivas las disposiciones de la Convención. El informe no contenía información alguna que indicara el cumplimiento por el Estado informante de sus obligaciones en virtud de los artículos 2, párrafos 1 c) y 2, 4, párrafos a) y b), 5, 6 y 7 de la Convención. No se proporcionaba la información prevista por el Comité en las recomendaciones generales III (sobre relaciones con los regímenes racistas) y IV (sobre la composición de la población). El informe tampoco tomaba en cuenta las observaciones hechas por miembros del Comité en su décimo período de sesiones, oportunidad en que se había examinado una comunicación de Bolivia 18/. Finalmente, el informe no estaba organizado según las pautas generales establecidas por el Comité en su primer período de sesiones.

18/ Ibid, vigésimo noveno período de sesiones, Suplemento No. 18 (A/9618), párrs. 178 y 179.

84. Varios miembros hicieron comentarios sobre la declaración inicial del informe, según la cual "en Bolivia, no existe ninguna disposición legal que sancione la discriminación, ya que no existe la discriminación racial en ningún aspecto". En opinión unánime de esos miembros, aun la existencia de una situación de facto satisfactoria no excluía la necesidad de que se sancionaran ciertas leyes, particularmente en relación con determinados artículos de la Convención, como el artículo 4, que son obligatorios y requieren la adopción de medidas legislativas positivas.

85. La representante de Bolivia indicó que transmitiría las observaciones de los miembros del Comité al Gobierno de su país, "el cual no tendría inconveniente en presentar información más completa en los informes subsiguientes".

Chipre

86. El tercer informe periódico de Chipre, de fecha 14 de junio de 1974, fue recibido antes del décimo período de sesiones del Comité, pero se aplazó su examen hasta el 11.º período de sesiones a solicitud del Estado informante. El informe se limitaba a señalar que no se había producido cambio alguno en la situación desde la presentación del segundo informe periódico en diciembre de 1972.

87. Sin embargo, al comienzo del examen del informe por el Comité en su 11.º período de sesiones, el representante de Chipre proporcionó al Comité información verbal adicional de que en una parte del territorio de Chipre sobre la cual el Gobierno de Chipre no tenía control efectivo se estaba practicando la discriminación racial en gran escala. Señaló a la atención del Comité que éste se había encontrado frente a situaciones análogas en el pasado, al examinar informes de la República Árabe Siria y de Panamá: en estos tres casos, el Estado informante había comunicado al Comité que le era imposible cumplir con sus obligaciones en virtud de la Convención en un sector de su territorio nacional que se encontraba bajo el control efectivo de otro Estado que no era parte en la Convención. El representante de Chipre sugirió que el Comité actuara con respecto al informe de Chipre como había actuado con respecto a las situaciones análogas citadas.

88. Todos los miembros convinieron en que el Comité no podía dejar de expresar su preocupación ante la información de que se practicaba la discriminación racial en el territorio de un Estado parte sobre el cual dicho Estado no podía ejercer un control efectivo; asimismo, todos los miembros estuvieron de acuerdo en que los aspectos políticos internacionales y los aspectos militares de la situación en Chipre no eran de competencia del Comité. Hubo un extenso debate sobre otras dos cuestiones: primera, si el Comité debía expresar su preocupación por la información que había tenido ante sí en el 11.º período de sesiones o si debía - simultánea o alternativamente - solicitar al Estado informante que le proporcionara información adicional para examinar en el 12.º período de sesiones; y, segunda, si el Comité debía expresar la esperanza de que la situación en Chipre se arreglara conforme a las disposiciones de las resoluciones aprobadas por los organismos competentes de las Naciones Unidas. Se llegó a un acuerdo general sobre la necesidad de que el Comité expresara, en su 11.º período de sesiones, preocupación por la información que había tenido ante sí y la esperanza de "una rápida normalización de la situación en Chipre", y solicitara al Gobierno de Chipre que proporcionara información adicional para examinar en el 12.º período de sesiones. A solicitud del Presidente,

el Relator presentó un proyecto de decisión que reflejaba el consenso logrado durante el debate. El proyecto fue aprobado por el Comité sin objeciones en la 235a. sesión, el 8 de abril de 1975. (Para el texto de la decisión 3 (XI), véase cap. VII, sec. A, infra.)

89. El informe complementario de Chipre, que contiene la información solicitada por el Comité en su decisión 3 (XI), fue examinado en el 12^o período de sesiones. Fue complementado por información adicional presentada en una declaración verbal del representante de Chipre. El Comité tomó en cuenta también la información contenida en comunicados de prensa emitidos por la Oficina de Información Pública de las Naciones Unidas, con respecto a los logros de las tres series de conversaciones entre las comunidades directamente interesadas, incluso el acuerdo de celebrar una cuarta serie de conversaciones en septiembre de 1975.

90. Se presentó un proyecto de decisión, en el que se expresaba una vez más la preocupación expresada en la decisión 3 (XI) del Comité y la esperanza de que continuaran los progresos logrados hasta la fecha, se aplicaran las resoluciones aprobadas por los organismos competentes de las Naciones Unidas, se efectuara una rápida normalización de la situación en Chipre, y se permitiera que los refugiados y otros seres humanos que sufrían penurias en Chipre a causa de su origen racial o étnico disfrutaran plenamente de sus derechos humanos fundamentales sin discriminación. Las enmiendas presentadas por tres miembros del Comité fueron aceptadas por el autor del proyecto de decisión, y, en la 251a. sesión del Comité, el 6 de agosto de 1975, se aprobó el proyecto de decisión en su forma enmendada sin someterlo a votación; un miembro del Comité expresó sus reservas. (Para el texto de la decisión 1 (XII), véase cap. VII, sec. B, infra.)

India

91. El tercer informe periódico de la India, en opinión de los miembros del Comité, complementaba la amplia información contenida en los informes anteriores y actualizaba parte de esa información. En particular, se expresó satisfacción por el hecho de que, aunque el informe proporcionaba información sobre cambios en la legislación efectuados durante el período examinado, incluidas enmiendas al Código Penal, se ocupaba también extensamente de medidas administrativas y de otra índole y suministraba asimismo información adicional sobre casos judiciales, conforme a lo requerido en el párrafo 1 del artículo 9 de la Convención. Varias medidas especiales tendientes a promover y salvaguardar los derechos de las castas registradas y las tribus registradas se consideraron medidas adoptadas en cumplimiento de las obligaciones del Estado informante en virtud del párrafo 2 del artículo 2 de la Convención. Sin embargo, algunos miembros indicaron que no estaban seguros de que la legislación en vigor cumpliera plenamente, conforme se informaba, con lo exigido en el párrafo b) del artículo 4 de la Convención. En opinión de algunos miembros faltaba información sobre las medidas adoptadas en virtud de los artículos 6 y 7 de la Convención.

92. Algunos miembros expresaron interés en recibir, en informes futuros, información sobre la composición racial de las tribus registradas y de cualesquiera otros grupos que pudieran estar incluidos en el concepto de "intocabilidad", sobre otras castas o tribus (de haberlas) que no habían sido registradas, y sobre las diferencias jurídicas entre tribus registradas y no registradas, así como información adicional sobre la medida en que habían tenido éxito las disposiciones prácticas tendientes a prestar asistencia a las castas y tribus registradas y sobre el contenido de los informes presentados por el Comisionado para castas y tribus registradas.

Además, dado que en el informe se decía que el artículo 46 de la Constitución era "pertinente" para el "desarrollo socioeconómico de las castas registradas y las tribus registradas", se solicitó el texto de ese artículo. Algunos miembros preguntaron por un caso mencionado en los informes anteriores y en el informe que se examinaba y del que se decía que había llevado a una decisión de la Corte Suprema, a la que había seguido, a su vez, una enmienda de la Constitución, y a decisiones adicionales de la Corte Suprema, todas relacionadas con la cuestión de si los derechos garantizados por la Constitución podían ser válidamente limitados o restringidos por enmiendas a la Constitución.

93. El representante de la India hizo observaciones sobre la última cuestión mencionada en el párrafo precedente desde el punto de vista de su relación con las obligaciones de la India en virtud de la Convención. Dijo que informaría a su Gobierno de las observaciones y solicitudes hechas por los miembros del Comité.

Dinamarca

94. Los miembros del Comité observaron que, aunque no se había promulgado en Dinamarca ninguna ley nueva relativa a la discriminación racial desde la presentación del informe inicial, el segundo informe periódico contenía información amplia, que se había organizado de conformidad con las directrices establecidas por el Comité. En el informe se tenían en cuenta las solicitudes de información adicional, así como las observaciones hechas por los miembros del Comité durante su examen del informe inicial. El segundo informe periódico contenía una sección sobre Groenlandia y los textos de las disposiciones legislativas a que se hacía referencia, de conformidad con los deseos expresados por el Comité. Se incluía también, en respuesta a la recomendación general IV del Comité, alguna información sobre la composición demográfica de Dinamarca, e información demográfica separada sobre Groenlandia. Sin embargo, los miembros del Comité observaron que no se suministraba la información prevista en la recomendación general III y que la información sobre decisiones judiciales y sobre la aplicación del artículo 7 de la Convención era escasa.

95. Varios miembros del Comité opinaron que la legislación destinada a poner en práctica las disposiciones de los párrafos a) y b) del artículo 4 de la Convención satisfacía lo requerido por ese artículo; que las medidas adoptadas para aplicar el artículo 6 de la Convención eran satisfactorias; que la situación con respecto a la aplicación de las disposiciones de la Convención en Groenlandia era también satisfactoria; y que las medidas especiales y las políticas descritas en el informe relativas a las minorías alemanas y a los gitanos se ajustaban a las disposiciones del párrafo 2 del artículo 2 de la Convención.

96. Se expresaron dudas en cuanto a la compatibilidad de las distinciones hechas entre trabajadores migrantes sobre la base de sus países de origen con las disposiciones del artículo 1 de la Convención. Se señaló que se hacían distinciones entre los nacionales de países nórdicos, los de Estados miembros de las comunidades europeas y las de otros países, con respecto a la necesidad de permisos de trabajo. Algunos miembros del Comité, aunque reconocieron que el tratamiento preferencial en ese sentido otorgado a trabajadores de los países nórdicos y de otros países europeos era el resultado de las disposiciones de instrumentos internacionales en que Dinamarca era parte, opinaron que la situación que se examinaba constituía un conflicto entre los compromisos de Dinamarca en virtud de esos instrumentos y los compromisos que había asumido con arreglo a la Convención.

97. Durante la consideración del informe se formularon las siguientes preguntas: ¿Qué tribunales eran competentes para entender en los casos relacionados con el inciso 2 del artículo 78 de la Constitución, que preveía la disolución de algunas asociaciones por sentencia judicial? ¿Cómo se aplicaba el artículo 7 de la Convención? ¿Cómo se imponían las multas aplicadas fuera de los tribunales en los casos mencionados en el informe y relativas a la admisión en restaurantes? ¿Se había aplicado la suspensión impuesta a la inmigración de mano de obra extranjera a fines de 1973 a los nacionales de todos los países, sin excepciones con respecto a los trabajadores de países nórdicos o de otros países europeos? ¿Se extendía la competencia del ombudsman danés también a Groenlandia? ¿Se referían los casos de discriminación racial directamente a Groenlandia? ¿Podía el ombudsman proporcionar protección eficaz en los casos de discriminación racial?

98. El representante de Dinamarca aseguró al Comité que todas las preguntas hechas durante el debate sobre el informe de su Gobierno se tratarían en informes futuros. Mientras tanto, dio las siguientes respuestas preliminares a algunas de las preguntas. Los casos relacionados con el inciso 2 del artículo 78 de la Constitución serían ventilados en tribunales ordinarios de primera instancia, con posibilidades de apelación hasta la Corte Suprema. En Dinamarca había una comisión encargada de los libros de texto escolares que se esforzaba por incluir en ellos información sobre los derechos humanos y la discriminación racial; las escuelas tenían libertad de elegir los textos que preferían entre los ofrecidos por la Comisión. Con respecto a las multas impuestas fuera de los tribunales, las imponía la policía; si la persona multada aceptaba pagar, se cerraba el caso; si la persona no aceptaba pagar, podía recurrirse a los tribunales.

99. Con respecto a los trabajadores migrantes, el representante de Dinamarca señaló que el requisito de que los nacionales de países que no fueran países nórdicos o Estados miembros de la comunidad europea obtuvieran permisos de trabajo antes de aceptar empleo no podía considerarse discriminatorio: era una preferencia otorgada por Dinamarca a algunas nacionalidades de conformidad con tratados internacionales que había concertado.

Níger

100. Los miembros del Comité tomaron nota de que en el tercer informe periódico del Níger se señalaba que, desde la presentación del segundo informe periódico, no se había adoptado ninguna nueva medida legislativa, judicial, administrativa o de otra índole que fuera en alguna medida pertinente a la aplicación de la Convención y que la suspensión de la Constitución en abril de 1974 no había provocado cambio alguno en la aplicabilidad de otras disposiciones jurídicas (incluido el artículo 102 del Código Penal, relativo a la discriminación), pero observaron que el Estado informante no había suministrado aún informaciones, en ninguno de sus informes, sobre la aplicación del párrafo b) del artículo 4 y de los artículos 6 y 7 de la Convención, ni sobre medidas legislativas de carácter secundario que pusieran en vigor el principio de la igualdad consagrado en la Constitución y los otros derechos que se enunciaban en el artículo 5 de la Convención. En los informes sucesivos del Níger tampoco se proporcionaba la información prevista en la recomendación general III del Comité, referente a las relaciones con regímenes racistas. También se observó que los informes del Níger no estaban organizados según las directrices establecidas por el Comité en su primer período de sesiones.

101. Aunque reconocieron que suspender la Constitución era un derecho soberano de todo Estado, los miembros del Comité opinaron que estaba dentro de la esfera de legítima preocupación del Comité averiguar si la suspensión tenía un carácter general, aplicable a todos los ciudadanos, sin restricciones, limitaciones o preferencias en favor o en contra de ningún grupo racial o étnico dado. Algunos miembros hicieron notar que el artículo 6 de la Constitución, que había sido suspendido era la disposición legislativa básica relativa a la aplicación por el Estado informante del párrafo a) del artículo 4 y del artículo 6 de la Convención, y preguntaron si se habían adoptado otras medidas para garantizar la aplicación permanente de esos artículos de la Convención. También se preguntó si la ordenanza No. 59-135, que ponía en vigor las disposiciones del artículo 4, párrafo a), de la Convención, se había visto afectada por la suspensión de la Constitución. Se pidió que el Estado informante especificara exactamente en su próximo informe qué disposiciones de la Constitución habían sido suspendidas y qué otras leyes se habían promulgado para reemplazar esas disposiciones, especialmente en lo tocante a los derechos humanos.

102. El representante del Níger comunicó al Comité que su país no mantenía relaciones con el régimen de Sudáfrica; que su Gobierno había prohibido mucho tiempo atrás todo comercio con Sudáfrica y había negado el derecho de sobrevolar su territorio y aterrizar en él a las aeronaves sudafricanas; y que seguían en vigor las garantías de los derechos de la persona humana y el Código Penal, a pesar de la suspensión de la Constitución. El representante del Níger aseguró al Comité que, cuando preparara su próximo informe, su Gobierno tomaría en cuenta todas las preguntas que habían quedado sin respuesta, así como las observaciones formuladas por los miembros del Comité.

República Árabe Libia

103. El debate sobre el tercer informe periódico de la República Árabe Libia giró principalmente en torno a la medida en que la legislación en vigor, según se había dado a conocer, satisfacía las exigencias de los párrafos a) y b) del artículo 4 de la Convención. Los miembros consideraron que la información disponible demostraba que las disposiciones de los artículos del Código Penal citados en el informe satisfacían en parte los requisitos de ambos párrafos; sin embargo, dado que esos artículos se parafraseaban en lugar de ser reproducidos textualmente en su totalidad, y vistas también las aparentes ambigüedades de la traducción del texto original, redactado en idioma árabe, los miembros indicaron que no estaban en condiciones de determinar con precisión la medida en que las disposiciones pertinentes del Código Penal correspondían a las disposiciones del artículo 4 de la Convención. Se observó que no se proporcionaba información sobre la composición étnica de la población, ni tampoco sobre la aplicación de los artículos 6 y 7 de la Convención. No obstante, se recordó que en los dos informes anteriores se había incluido amplia información de conformidad con el párrafo 1 del artículo 9 de la Convención, y que la información prevista en la recomendación general III (relativa a las relaciones con regímenes racistas) había sido suministrada anteriormente al Comité.

104. El representante de la República Árabe Libia dio respuesta a una pregunta concreta relativa al término empleado en el texto árabe original para definir el concepto de "ciudadano". El representante aseguró al Comité que en el próximo informe, o incluso antes, se suministraría el texto completo de los artículos citados en el tercer informe periódico, y que transmitiría a su Gobierno las demás observaciones formuladas por los miembros del Comité durante el debate.

Yugoslavia

105. Gran parte del debate sobre el tercer informe periódico de Yugoslavia se centró en el nuevo orden constitucional descrito en el informe y la nueva división del poder entre las autoridades federales y las de las repúblicas constitutivas y las provincias autónomas. Se observó que en 1974 se había promulgado una nueva Constitución en Yugoslavia y que también se habían promulgado nuevas constituciones en las repúblicas socialistas y en las provincias autónomas socialistas y que, de conformidad con los nuevos arreglos, la protección de los derechos y libertades de los ciudadanos había recaído en las repúblicas, que tenían la responsabilidad de adoptar sus propios códigos penales. Esta información dio origen a varias preguntas. ¿Era necesario ahora que las repúblicas y provincias se adhirieran nuevamente a la Convención, o bastaba con que Yugoslavia fuera parte en ella? Si era necesario que las diversas repúblicas y provincias adoptaran sus propios códigos penales a fin de reglamentar la protección de los ciudadanos contra la discriminación, ¿retendrían entre tanto los tribunales federales su jurisdicción en los casos relativos a discriminaciones hasta el momento en que las repúblicas y provincias autónomas promulgaran sus códigos penales respectivos? ¿Qué garantías existían de que los diversos códigos penales incorporaran realmente disposiciones correspondientes a las exigencias de la Convención? Y en su calidad de Estado parte en la Convención, con la obligación de aplicar sus disposiciones, ¿tenía la Federación la capacidad de asegurar que en los códigos penales de sus repúblicas constitutivas y provincias autónomas se daría cumplimiento a las disposiciones de la Convención? Se observó que el Estado informante debía transmitir al Comité las disposiciones constitucionales pertinentes y las leyes mediante las cuales se aplicaban estas disposiciones en las diversas repúblicas y las provincias autónomas.

106. En lo relativo a la nueva Constitución federal, se destacaron las disposiciones correspondientes a las exigencias de los artículos 5 y 6 de la Convención. También se hicieron notar los artículos pertinentes del Código Penal Yugoslavo, mediante los cuales se ponía en vigor el artículo 4 de la Convención, aunque se indicó que existía cierta duda de que todos los requisitos del párrafo b) de ese artículo quedaran satisfechos por las disposiciones legislativas mencionadas en el informe. También se preguntó si había procedimientos administrativos o judiciales para declarar ilegal a una organización que promoviera la discriminación racial o incitara a ella.

107. Se observó que en el informe no se proporcionaba ninguna información relativa a la aplicación del artículo 7 de la Convención, y se preguntó si algún tribunal había dictado algún fallo sobre cuestiones comprendidas dentro del alcance de la Convención.

108. Varios miembros del Comité observaron con satisfacción la amplitud de la información proporcionada en el informe y la utilidad del material adicional distribuido a los miembros, incluso un libro titulado Nations and Nationalities in Yugoslavia (Naciones y nacionalidades de Yugoslavia), publicado con ocasión de un seminario de las Naciones Unidas sobre la promoción y la protección de los derechos humanos de las minorías nacionales, étnicas y de otra índole, celebrado en Ohrid en 1974.

109. La representante de Yugoslavia se refirió a las preguntas relativas al vehículo existente entre las repúblicas y la Federación. Informó al Comité de que la Federación se encargaba de garantizar el cumplimiento de las obligaciones internacionales contraídas en todo el territorio de Yugoslavia. Indicó que existía un

procedimiento para la celebración de consultas antes de la aprobación de un instrumento jurídico internacional. En cuanto a las preguntas formuladas respecto de los códigos penales, dijo que los códigos penales de las diferentes repúblicas estaban aún en proceso de redacción y que, entre tanto, seguía en vigor el Código Penal existente. Agregó que las constituciones de las repúblicas se promulgaban en los idiomas de las diversas naciones y nacionalidades de cada república y que, tan pronto como se hubieren traducido a los idiomas oficiales de las Naciones Unidas, sus textos serían enviados al Comité. En relación con los artículos del Código Penal citados en un informe anterior, indicó que las disposiciones de esos artículos se referían tanto a los organizadores como a los miembros de grupos; en la legislación yugoslava se tenían en cuenta las exigencias de los párrafos a) y b) del artículo 4 de la Convención. En lo tocante a la pregunta sobre si los tribunales habían dictado algún fallo con respecto a la lucha contra la discriminación racial, declaró que no se habían dictado fallos de esa índole, y aseguró al Comité que, si se aprobaban sentencias que quedaran comprendidas dentro del alcance de la Convención, el Comité sería informado oportunamente al respecto. Por último, afirmó que en los próximos informes se contestaría a todas las preguntas que hubiesen quedado sin respuesta.

Santa Sede

110. Al examinar el tercer informe periódico de la Santa Sede, los miembros del Comité recordaron - tal como lo habían hecho al examinar el segundo informe periódico - que las obligaciones del Estado informante en virtud de la Convención debían considerarse a la luz de las características singulares de ese Estado. Los miembros del Comité compartieron la opinión, expresada en el informe, de que la contribución de la Santa Sede se enmarca básicamente en la esfera de la educación y la formación de la opinión pública, y tomaron nota de los pasajes de los principales documentos, decretos y declaraciones que figuraban en el informe.

111. Se tomó nota de una declaración del Papa, en el sentido de que la simple denuncia, a menudo tardía o ineficaz, no es suficiente, y se planteó la cuestión de si la propia Santa Sede había ido más allá de una "simple denuncia" de la discriminación racial en términos demasiado generales y sin identificar los regímenes y políticas que promovían la discriminación racial. Se formularon observaciones en relación con una Declaración sobre Derechos Humanos formulada por el Sínodo de Obispos, en la que se manifestaba: "Actualmente, ninguna nación es inocente en lo que respecta a los derechos humanos. No corresponde al Sínodo identificar transgresiones específicas; ello se puede hacer en mejor forma al nivel local". Algunos miembros estimaron que, aunque tal vez fuera cierto que ninguna nación era inocente era incorrecto concluir que, por lo tanto, todas las naciones eran igualmente culpables en lo concerniente a la discriminación racial, y que era necesario identificar y condenar, no sólo al nivel local, sino también por la autoridad central, a los regímenes que hacían de la discriminación racial la piedra angular de su política nacional. Se observó que no se proporcionaba información respecto de las medidas específicas que se tomaban al nivel local para luchar contra la discriminación racial, especialmente en los casos en que su práctica era una cuestión de política nacional. Por último, se expresó una vez más interés (al igual que en el séptimo período de sesiones) en recibir el informe del Coloquio Internacional sobre Discriminación Racial, que había organizado la Comisión Pontificia Pax et Justitia en 1972.

112. El representante de la Santa Sede confirmó el parecer de algunos miembros del Comité en el sentido de que el carácter singular de la Santa Sede había influido en la naturaleza de su informe y la había movido a concentrarse en declaraciones de principio más que en ejemplos específicos de acción. Señaló que, aunque sería más difícil encontrar ejemplos de medidas concretas, puesto que tales medidas tenían lugar en diversos países y no en la Santa Sede, se haría todo lo posible para que el próximo informe fuera más específico. El representante de la Santa Sede interpretó la declaración del Sínodo de Obispos, a la que se había hecho referencia en el debate, en el sentido de que no correspondía al Sínodo identificar transgresiones específicas, sino elaborar directrices generales que podrían, luego, aplicarse al nivel local. Las denuncias de situaciones determinadas correspondían a los obispos locales y, de hecho, los obispos de Rhodesia habían sido muy francos al respecto. Sin embargo, probablemente era cierto que no se había hecho lo suficiente al nivel local y que hacía falta un mayor dinamismo. Más aún, si bien era totalmente cierto que la simple denuncia no era suficiente, no se podía subestimar el efecto de una denuncia formulada por un órgano con el peso moral de la Iglesia Católica y, en todo caso, la denuncia moral era una de las pocas armas de que disponía la Santa Sede. Por último, el representante de la Santa Sede comunicó al Comité que el informe del Coloquio internacional era un documento interno de trabajo de la Comisión Pontificia interesada y que no se había previsto su publicación; no obstante, estaba dispuesto a averiguar qué posibilidad había de que se lo publicara.

Malí

113. Algunos miembros del Comité observaron que el informe inicial de Malí contenía un gran número de informaciones útiles y que el informe estaba organizado sobre la base de las directrices establecidas por el Comité en su primer período de sesiones, así como de los textos de las disposiciones más importantes de la Constitución y del código penal a los que se hacía referencia. La información y los textos proporcionados guardaban cierta relación con las disposiciones de la mayoría de los artículos sustantivos de la parte I de la Convención, inclusive el párrafo 2 del artículo 1, el artículo 3, el párrafo a) del artículo 4 y los artículos 5, 6 y 7. Sin embargo, también se hizo notar que en el informe se citaban algunas disposiciones de la Constitución pero no figuraba su texto literal, que la información que figuraba en el informe se refería solamente a algunas partes de las disposiciones de los artículos 4, 5, 6 y 7 de la Convención y que no se había proporcionado la información prevista en las recomendaciones generales III (acerca de las relaciones con los regímenes racistas) y IV (acerca de la composición de la población) hecha por el Comité.

114. Se observó que en el informe no se enunciaban con precisión los derechos de que gozaban los extranjeros residentes en el Estado informante. Algunos miembros preguntaron si los extranjeros residentes gozaban en Malí de todos los derechos civiles y sólo estaban sujetos a limitaciones en sus derechos políticos y expresaron interés en recibir los textos legales pertinentes. En todo caso, otros miembros hicieron notar que, según el informe, los nacionales de países extranjeros podían conseguir empleo en la administración pública del país.

115. Gran parte del debate giró en torno del artículo 55 del Código Penal, al que se asignaba gran importancia en el informe. Varios miembros hicieron observaciones acerca del alcance de ese artículo; en todo caso estimaron que, si bien era muy amplio, no cumplía con todos los requisitos del artículo 4 de la Convención.

Se estimó que el artículo mencionado debía ser complementado con disposiciones legislativas más precisas y que era necesario que se proporcionara información acerca de la forma en que los tribunales y las autoridades públicas lo interpretaban y aplicaban. Más concretamente, se preguntó si sería correcto suponer que los tribunales de Malí podían invocar el artículo 55 del Código Penal para ocuparse de las organizaciones mencionadas en el párrafo b) del artículo 4 de la Convención, y se preguntó qué connotación tenía el concepto de "propaganda regionalista".

116. El representante de Malí confirmó que era posible invocar el artículo 55 del Código Penal para ocuparse de organizaciones tales como las descritas en el párrafo b) del artículo 4 de la Convención, y explicó el concepto de "propaganda regionalista", previsto en la legislación penal de Malí. El representante de Malí confirmó que, con la excepción evidente de algunos puestos políticos, los puestos de la administración pública estaban abiertos para nacionales de minorías extranjeras que vivieran en Malí, y aseguró al Comité de que el próximo informe de su Gobierno incluiría una explicación completa acerca de la situación de las minorías en la administración pública. El representante de Malí informó al Comité de que su Gobierno prohibía todas las relaciones con los regímenes coloniales o racistas y que no se permitía que aeronaves sudafricanas sobrevolaran el territorio de Malí; en el próximo informe de su Gobierno figurarían los textos de las leyes pertinentes. Por último, el representante de Malí aseguró al Comité que transmitiría a su Gobierno todas las cuestiones que se habían planteado.

Países Bajos

117. Algunos miembros del Comité observaron que el segundo informe periódico de los Países Bajos contenía información detallada sobre medidas judiciales y administrativas para hacer efectivas las disposiciones de la Convención, de conformidad con el párrafo 1 del artículo 9 de la Convención, así como información detallada sobre el número y la situación de los trabajadores migrantes, súbditos del Reino oriundos de Surinam y las Antillas Neerlandesas, y naturales de las Molucas que viven en el Estado informante. Se observó que en el informe se tenían en cuenta y se comentaban las observaciones y las preguntas formuladas por algunos miembros del Comité durante el examen del informe inicial de los Países Bajos. Algunos miembros estimaron útil la inclusión, en un anexo al informe, de las interpelaciones hechas por miembros del Parlamento (Segunda Cámara), y la respuesta escrita del Gobierno, con respecto a asuntos comprendidos dentro del alcance de la Convención. Se señaló también que el informe era honesto e informativo; planteaba los problemas y exponía soluciones.

118. Se tomó nota especialmente de las medidas - previstas en el párrafo 2 del artículo 2 de la Convención - que habían sido adoptadas con respecto a los nacionales del Estado informante oriundos de Surinam y las Antillas; del principio de promover la integración de grupos minoritarios y no su completa asimilación; y de las medidas adoptadas con respecto a los trabajadores extranjeros.

119. Se observó que, aunque en el período que abarcaba el informe no se había promulgado legislación adicional alguna, el Gobierno había aprobado decretos que anulaban una ordenanza discriminatoria del municipio de Rotterdam, y había iniciado procedimientos contra una persona, de conformidad con las disposiciones del párrafo a) del artículo 4 de la Convención, y contra otras seis, en cumplimiento del párrafo f) del artículo 5 de la Convención. A este respecto, algunos miembros

del Comité solicitaron informaciones adicionales sobre el resultado de dichos procedimientos. Se hizo notar que, según la información suministrada, el Ministro de Justicia había demostrado, al menos en dos casos, cierta renuencia a enjuiciar actos de discriminación racial.

120. El representante de los Países Bajos hizo comentarios detallados sobre la mayoría de las preguntas que habían formulado los miembros del Comité durante su examen del informe del Gobierno de los Países Bajos, y aseguró al Comité que comunicaría todas las observaciones y preguntas a su Gobierno. Comunicó al Comité, entre otras cosas, que los trabajadores migrantes gozaban, tanto de jure como de facto, de la misma protección que los nacionales y tenían exactamente los mismos derechos que los trabajadores nacionales, a reserva de algunas restricciones en cuanto a actividades políticas únicamente, pero no en cuanto a derechos sociales o económicos; que la diferencia de trato de los trabajadores extranjeros provenientes de países de la Comunidad Económica Europea y los trabajadores extranjeros provenientes de otros países radicaba en el hecho de que los del primer grupo entraban en los Países Bajos en virtud de un tratado multilateral que les reconocía libertad de circulación dentro de la Comunidad, mientras que el segundo grupo lo hacía sobre la base de acuerdos bilaterales; y que su Gobierno siempre había sostenido que el apartheid era una violación de los derechos humanos, se había negado a prestar asistencia para perpetuar dicha política y había observado plenamente las resoluciones del Consejo de Seguridad sobre sanciones, pero no estaba totalmente de acuerdo en que el aislamiento de Sudáfrica podría solucionar el problema del apartheid y creía que el diálogo con Sudáfrica podía tener resultados positivos.

Checoslovaquia

121. Algunos miembros del Comité observaron que, al no haberse producido durante el período que se examinaba cambio alguno que afectase la legislación pertinente del Estado informante, los datos contenidos en el tercer informe periódico de Checoslovaquia se referían principalmente a políticas y actividades en la esfera de la enseñanza y de los medios públicos de información, y a actividades realizadas por organizaciones nacionales checoslovacas, en cumplimiento de los artículos 7 y 3 y del párrafo 1 e) del artículo 2 de la Convención, así como actividades en el plano internacional, incluso programas de asistencia a países y pueblos que luchan por liberarse de la opresión racial y colonial y medidas encaminadas a cumplir las resoluciones del Consejo de Seguridad y la Asamblea General de las Naciones Unidas relativas a las relaciones con los regímenes racistas del Africa meridional. Algunos miembros del Comité también tomaron nota de la afirmación de que se estaban haciendo preparativos legislativos para ratificar los dos Pactos Internacionales de Derechos Humanos ya firmados por el Estado informante, así como para firmar la Convención Internacional sobre la Represión y el Castigo del Crimen de Apartheid. Se observó, sin embargo, que en el informe faltaba la información demográfica prevista en la recomendación general IV del Comité, así como la información sobre medidas judiciales, administrativas y de otra índole (requerida en virtud del párrafo 1 del artículo 9 de la Convención). Algunos miembros preguntaron si existía alguna disposición legislativa relativa a las obligaciones de los Estados partes con respecto a la reparación, de conformidad con el artículo 6 de la Convención.

122. Se hicieron preguntas sobre la situación de los trabajadores extranjeros en Checoslovaquia y las medidas que se hubieran tomado para lograr que los gitanos se integrasen con éxito en la sociedad checoslovaca.

123. Con respecto a la información contenida en el informe adicional presentado en respuesta a la decisión 3 (VII) del Comité, algunos miembros observaron que las disposiciones del Código Penal checoslovaco que correspondían a las disposiciones del artículo 4 de la Convención parecían estar limitadas por la exigencia de que, para constituir un delito, un acto debía ser público y debía también provocar indignación, requisitos que no figuraban en el artículo 4 de la Convención; no obstante, otros miembros opinaron que las obligaciones que imponía el artículo 4 de la Convención (incluso las del párrafo b)) quedaban plenamente cumplidas.

124. Refiriéndose a la cuestión del artículo 4 de la Convención, el representante de Checoslovaquia explicó que una manifestación de odio racial se consideraba pública si ocurría en un grupo de tres o más personas o si se expresaba en un programa de radio o televisión o en la prensa. En lo tocante a las reparaciones por daños, explicó que si un delito tipificado en la Convención constituía un delito con arreglo a la legislación checoslovaca y daba lugar a una reclamación por daños, la cuestión de la reparación se regiría por los principios generales del derecho checoslovaco en materia de reparación. En lo que atañe a los trabajadores extranjeros, afirmó que su situación y sus derechos eran los mismos que los de los trabajadores checoslovacos e informó al Comité de que la mayoría de los trabajadores extranjeros en Checoslovaquia venían de países socialista en virtud de acuerdos intergubernamentales que aplicaban las autoridades nacionales interesadas. Aseguró al Comité que las observaciones hechas por los miembros se transmitirían a su Gobierno y se tendrían en cuenta al preparar el próximo informe periódico.

Suecia

125. Al examinar el segundo informe periódico de Suecia, los miembros del Comité tomaron nota de la información adicional transmitida al Comité como complemento de dicho informe, y en particular del resumen del informe definitivo de la Comisión de Inmigración y de las atribuciones otorgadas por el Gobierno a una Comisión sobre el derecho a elegir y a ser elegido en el régimen municipal. El Comité tomó nota de las declaraciones que figuran en el informe en el sentido de que, durante el período que se examina, no se habían adoptado ni se había considerado necesario adoptar medidas legislativas para aplicar las disposiciones de la Convención, y de que ni los tribunales ni las autoridades administrativas habían fallado ningún caso de contravención de las disposiciones de la Convención. También tomó nota de que, habida cuenta de la manera en que se presentan las estadísticas de Suecia, no era posible dar información sobre la composición demográfica del Estado informante ateniéndose a las categorías utilizadas en el artículo 1 de la Convención.

126. Sin embargo, algunos miembros señalaron que, si bien el informe decía que no se había considerado necesario aprobar nuevas leyes contra la discriminación racial en relación con la Convención, la Comisión de Inmigración había estimado que eran necesarias algunas medidas. Se plantearon algunas cuestiones acerca del carácter de las diferencias legales todavía existentes entre los ciudadanos

suecos y los extranjeros, a las que hace referencia el informe de la Comisión, y se expresó la esperanza de que el Gobierno tuviera en cuenta las recomendaciones de la Comisión para la eliminación de esas diferencias. El Comité esperaba también que el próximo informe incluyera información sobre los progresos logrados en este sentido. Algunos miembros se mostraron sorprendidos de que no se dispusiera de información sobre la composición demográfica de la población, en especial, habida cuenta de que la Comisión de Inmigración había podido conseguirla.

127. En lo que respecta a la afirmación de que no se habían registrado casos de contravenciones de las disposiciones de la Convención, se planteó la cuestión de si era posible que algunas contravenciones no hubiesen sido comunicadas al Ombudsman.

128. Observando que el texto del artículo 8 del capítulo I de la Constitución, que figuraba como apéndice del informe que se examina, hacía referencia a los tribunales y autoridades administrativas, algunos miembros del Comité preguntaron si existían disposiciones análogas de la Constitución que obligaran al cuerpo legislativo. También preguntaron qué mecanismo judicial existía en Suecia, de conformidad con el artículo 6 de la Convención, para garantizar el ejercicio efectivo del derecho de las personas a la satisfacción o reparación justa.

129. Refiriéndose a la información complementaria relativa a la aplicación del artículo 4 presentada en respuesta a la decisión 3 (VII) del Comité, los miembros de éste observaron que el artículo 8 del capítulo 16 del Código Penal, tal como había sido enmendado, parecía ahora ajustarse al párrafo a) del artículo 4 de la Convención, pero que no podían determinar, sin haber recibido el texto exacto, si ese artículo y el artículo 5 del capítulo 16 se ajustaban al párrafo b) del artículo 4 de la Convención. Se pidió que el texto del artículo 5 del capítulo 16 del Código Penal fuera transmitido al Comité.

130. En su declaración formulada ante el Comité, el representante de Suecia leyó el texto del artículo 1 del capítulo 2 de la Constitución de Suecia, que demostraba que no se hacía ninguna distinción entre ciudadanos y no ciudadanos, excepto que los no ciudadanos no podían participar en el proceso electoral. Sin embargo, informó al Comité de que el Gobierno estaba en la actualidad estudiando la posibilidad de que los extranjeros participaran en las elecciones municipales. Con respecto al derecho a la reparación jurídica, estipulado en el artículo 6 de la Convención, hizo referencia a una nueva Ley sobre daños y perjuicios, formulada en 1972, que llenaba un vacío en la legislación sueca en lo concerniente a la reparación jurídica. Refiriéndose a la cuestión de las contravenciones comunicadas al Ombudsman, expresó su opinión de que se habría dado parte a los tribunales de cualesquiera medidas adoptadas por este último. En lo concerniente al párrafo b) del artículo 4 de la Convención, hizo referencia al informe de la Comisión establecida para estudiar el ordenamiento jurídico sueco antes de la ratificación de la Convención, (con especial referencia a lo exigido en el párrafo 1 d) del artículo 2 de esta última) basándose en el cual las autoridades suecas habían decidido que no era necesario promulgar una ley especial para aplicar el párrafo b) del artículo 4 de la Convención. Finalmente, mencionó que Suecia se oponía a la discriminación racial y a toda ideología basada en dicha discriminación, y afirmó que el apoyo prestado por Suecia "a los tres Fondos Fiduciarios de las Naciones Unidas para Sudáfrica y al movimiento de liberación" era un ejemplo de esa oposición.

Zambia

131. La información contenida en el informe inicial de Zambia y en la información complementaria relativa a la aplicación del artículo 4 presentada en respuesta a la decisión 3 (VII) del Comité se ajustaba en lo esencial a los artículos 3, 5 y 6 de la Convención; sin embargo, los miembros del Comité observaron que faltaba información sobre la aplicación de los artículos 4 y 7 de la Convención y sobre las medidas administrativas y de otra índole encaminadas a aplicar las disposiciones de la Convención. También se observó que el informe no estaba organizado sobre la base de las directrices establecidas por el Comité en su primer período de sesiones, y que no se presentaba la información prevista en las recomendaciones generales III (referente a las relaciones con regímenes racistas) y IV (referente a la composición de la población) del Comité. Los miembros del Comité expresaron la esperanza de que en el próximo informe se presentaran los textos completos de los artículos de la Constitución y las disposiciones legislativas mencionadas en el informe, junto con los textos de otros artículos y disposiciones pertinentes.

132. El representante de Zambia aseguró al Comité que las observaciones y preguntas de sus miembros serían debidamente transmitidas a su Gobierno y se tendrían en cuenta en el siguiente informe, que también incluiría los textos de las disposiciones pertinentes de las Constituciones de 1964 y 1973.

Mongolia

133. Los miembros del Comité tomaron nota de las afirmaciones que figuran en el tercer informe periódico de Mongolia en el sentido de que, durante el período que se examina, no se habían adoptado nuevas leyes relativas a la eliminación de la discriminación racial, que todas las leyes a las que se había hecho referencia en informes anteriores seguían en vigor y eran plenamente respetadas, y que no se había llevado ante los tribunales ningún asunto que tuviera que ver con la discriminación racial. Se observó también que Mongolia había ratificado los dos Pactos Internacionales de Derechos Humanos así como la Convención Internacional sobre la Represión y el Castigo del Crimen de Apartheid en 1974. El Comité tomó nota de la información sobre las medidas adoptadas para aplicar las disposiciones del artículo 7 y del párrafo 2 del artículo 2 de la Convención. En lo que respecta a la aplicación del artículo 6 de la Convención, la información sobre la oficina del Procurador parecía pertinente. Los miembros tomaron nota de la información sobre el firme apoyo que el Estado informante presta a la política de no establecer relaciones diplomáticas, comerciales o de otra índole con regímenes coloniales o racistas y de aplicar sanciones a los regímenes racistas en todas las esferas de actividad internacional.

134. Sin embargo, el Comité observó que no se presentaba el texto del artículo 53 del Código Penal, que, según parece, correspondía a las disposiciones del párrafo a) del artículo 4 de la Convención, y se pidió que el texto de dicho artículo fuera incluido en el próximo informe, y se pidieron aclaraciones acerca de la connotación del concepto de "ideas nacionalistas", cuya difusión parecía ser objeto de graves sanciones en virtud de dicho artículo. Se preguntó si había otras disposiciones del Código Penal que aplicaran las disposiciones obligatorias del párrafo b) del artículo 4 de la Convención. En lo que respecta al artículo 6 de la Convención, se preguntó si las personas que deseaban presentar una denuncia relativa a actos de discriminación racial realizados por las autoridades o por

otras personas podía pedir al Procurador que emprendiera acción judicial contra ellos o si esta decisión corría a cargo del Procurador. Se hicieron preguntas acerca de la composición étnica de la población y, en particular, por qué la información contenida en el informe que se examina se limitaba a las medidas especiales relativas a los kazakhs mientras que en informes anteriores se había hecho también mención de otras minorías.

135. El representante de Mongolia aseguró al Comité que en el próximo informe de su Gobierno, se incluiría el texto del artículo 53 del Código Penal. En lo que respecta a las palabras "ideas nacionalistas", utilizadas en las traducciones, sugirió que posiblemente fuera más exacto hablar de "ideas patrióticas". En el futuro, su Gobierno intentaría ampliar la información relativa a la aplicación del artículo 4 de la Convención. En el informe que se examina se hacía únicamente referencia explícita a los kazakhs porque, a excepción de los chinos y los rusos, los demás grupos mencionados en informes anteriores formaban parte del grupo mongol y hablaban dialectos de la lengua mongólica: los kazakhs eran la única minoría nacional auténtica. En cuanto a los rusos y chinos, los que tenían residencia permanente en Mongolia gozaban de los mismos derechos que los mongoles, pero los que conservaban la ciudadanía china o soviética no podían participar en la vida política.

Reino Unido

136. Los miembros del Comité señalaron que la información contenida en el tercer informe periódico del Reino Unido y sus voluminosos anexos era detallada y amplia y se ajustaba a todos los requisitos del párrafo 1 del artículo 9 de la Convención. Además, al igual que los informes anteriores presentados por el Estado informante, el informe objeto de examen había sido organizado de conformidad con las directrices estipuladas por el Comité en su primer período de sesiones. Se proporcionaba en detalle la información prevista por el Comité en su recomendación general IV. Se observó también que en el informe se mantenía un diálogo con el Comité, respondiendo a las preguntas y haciendo comentarios sobre observaciones formuladas por los miembros durante el examen de informes anteriores. Los miembros del Comité tomaron nota del hecho de que, en el informe objeto de examen, existía un equilibrio entre el cumplimiento de la obligación de luchar contra la discriminación racial y la observación de la obligación de fomentar la tolerancia y la coexistencia raciales. También había equilibrio entre los organismos públicos y privados a los que se habían confiado esas tareas. En ese sentido, se subrayó la información proporcionada en cumplimiento del artículo 7 de la Convención. Por último, algunos miembros calificaron el informe de serio y franco al admitir que en el Reino Unido seguía existiendo la discriminación racial y al transmitir gran número de textos jurídicos aprobados para eliminarla.

137. Algunos miembros del Comité tomaron nota, no obstante, con pesar de que el Estado informante había mantenido su política de no responder a la recomendación general III del Comité, relativa a la información sobre las relaciones con los regímenes racistas.

138. Se señaló que la información contenida en los anexos al informe objeto de examen indicaba que aún había discriminación racial en el Reino Unido, que el número de reclamaciones sobre esa cuestión - que se referían principalmente a violaciones del derecho al trabajo, a la vivienda, a servicios sanitarios, a beneficios sociales y acceso a lugares públicos - aumentaba cada año, y que muchas de esas

reclamaciones tenían una base real, y se indicó que el motivo por el cual, pese a los esfuerzos realizados para aplicar la Convención, el Gobierno del Reino Unido aún no había logrado los resultados deseados, era que existían deficiencias en las medidas administrativas y judiciales necesarias para poner en práctica un conjunto de leyes que era por lo demás satisfactorio.

139. Se señaló que en la Race Relations Act de 1968 se preveían ciertas excepciones a las disposiciones básicas, algunas de las cuales eran de carácter provisional y habían sido abolidas, en tanto que otras seguían en vigor. Algunos miembros recordaron que la Convención prohibía el mantenimiento de tales excepciones y expresaron la esperanza de que, en la revisión de las políticas que se estaba efectuando en ese momento, el Gobierno del Reino Unido aboliría todas esas excepciones e informaría de ello al Comité en su informe siguiente.

140. Se señaló además que la propia Junta de Relaciones Raciales había llegado a la conclusión de que su competencia y papel eran limitados e inadecuados para erradicar la discriminación racial y había hecho algunas recomendaciones respecto de reformas; y se expresó la esperanza de que las opiniones de la Junta se tomaran en cuenta y de que el Gobierno le proporcionara los medios para aumentar su eficacia.

141. Se expresó preocupación por el hecho de que, a pesar de que la Junta de Relaciones Raciales había incluido las reclamaciones respecto del procedimiento para la selección de miembros de los clubes de trabajadores y la admisión de dichos miembros como socios en otros clubes afiliados en la categoría de actos de discriminación en el suministro de servicios, y a pesar de que el Tribunal de Apelaciones había dictaminado que era ilegal denegar a socios de color la admisión a esos clubes, la Cámara de los Lores hubiera dictaminado más recientemente que el procedimiento para la selección de miembros para esos clubes no estaba previsto en la Race Relations Act, de forma que, a menos que se introdujeran cambios, no se consideraría delito denegar a ciertas personas la admisión a determinados clubes por motivos de raza o color, contrariamente a lo previsto en el párrafo f) del artículo 5 de la Convención.

142. Los miembros del Comité formularon comentarios sobre las observaciones que figuraban en los informes de la Junta de Relaciones Raciales y de la Comisión de Relaciones Comunitarias respecto de la poca confianza que despertaban en los grupos minoritarios las intenciones de la sociedad y del Gobierno, como resultado de lo cual los miembros de los grupos minoritarios no utilizaban más plenamente los recursos legales y administrativos previstos contra las prácticas discriminatorias. Por lo que respecta a la Immigration Act de 1971, algunos miembros opinaron que se necesitaba más información sobre las políticas de inmigración del Reino Unido a fin de determinar si se practicaba algún tipo de discriminación comprendida en el alcance de la Convención. Se planteó igualmente la cuestión de saber si existía un mecanismo que permitiera determinar las opiniones de los representantes de los grupos minoritarios en cuanto a la eficacia de las políticas del Gobierno del Reino Unido para luchar contra la discriminación racial y si se habían tomado disposiciones para consultarles sobre las cuestiones que afectaban sus intereses.

143. Se subrayó que se recibiría con agrado información adicional sobre la verdadera situación social y económica de los grupos minoritarios, así como sobre la manera en que éstos consideraban su situación particular en el contexto de la sociedad en su totalidad.

144. Una afirmación contenida en el informe del Reino Unido en el sentido de que "cada Estado parte en la Convención conserva el derecho a decidir cuáles han de ser las nuevas medidas legislativas que habrá de adoptar para aplicar el artículo 4" fue objeto de comentarios de todos los miembros del Comité que participaron en el debate, la mayoría de los cuales se manifestaron en desacuerdo con dicha afirmación. Algunos miembros consideraron fuera de lugar la aseveración contenida en el informe en el sentido de que "no se han formulado objeciones ni impugnaciones contra la declaración interpretativa" formulada por el Reino Unido al firmar la Convención y reafirmada al ratificarla, por cuanto ni el Gobierno del Reino Unido ni el Secretario General habían considerado que esa declaración interpretativa fuera una reserva de conformidad con el artículo 20 de la Convención. Algunos miembros sugirieron que el Comité pidiera al Gobierno del Reino Unido que proporcionara al Comité una declaración oficial sobre la cuestión.

145. El representante del Reino Unido, en sus diversas exposiciones ante el Comité, hizo las siguientes observaciones: a) respecto de las violaciones a la Race Relations Act y las reclamaciones mencionadas en los informes de la Junta de Relaciones Raciales, dijo que la situación en materia de vivienda y de empleo en el Reino Unido había mejorado desde el momento en que se establecieron las cifras mencionadas en el debate. b) Informó al Comité de que su Gobierno estaba llevando a cabo una revisión de la legislación sobre las relaciones raciales, inclusive las facultades y obligaciones de los organismos interesados en su ejecución; que las opiniones y sugerencias de la Junta de Relaciones Raciales habían ocupado un lugar destacado en esa revisión; que en septiembre de 1975 se daría a conocer un Libro Blanco con propuestas para consolidar la legislación, y que la legislación se presentaría al Parlamento a la mayor brevedad después de esa fecha. c) Respecto de la admisión a los clubes de trabajadores, dijo que, de conformidad con la decisión de la Cámara de los Lores, el Secretario del Interior había anunciado que en las enmiendas propuestas a la legislación se incluirían disposiciones sobre ese tema. d) Aseguró al Comité que el interés que había manifestado en la política de inmigración de su Gobierno se reflejaría en su próximo informe. e) Respecto del cumplimiento del artículo 4 de la Convención, dijo que su Gobierno estaba dispuesto a proporcionar una explicación más detallada en futuros informes.

Senegal

146. Los miembros del Comité tomaron nota de la información que figuraba en el informe inicial del Senegal y, en especial de los artículos de la Constitución que declaraban que los actos de discriminación racial o étnica eran delitos penados por la ley y proclamaban la igualdad de todos ante la ley, y de las actividades de la Asociación Senegalesa pro Naciones Unidas. Sin embargo, observaron que los artículos del Código Penal que parecían dar efecto, en parte, a las disposiciones del párrafo a) del artículo 4 de la Convención estaban parafraseadas en el informe; y que no se daba ninguna información sobre la aplicación del párrafo b) del artículo 4 y los artículos 6 y 7 de la Convención, ni sobre las medidas de carácter judicial, administrativo y de otra índole. Además, el Senegal tampoco proporcionaba la información prevista por el Comité en su recomendación general III (sobre las relaciones con regímenes racistas) y su recomendación general IV (sobre la composición de la población). Finalmente, los miembros del Comité observaron que la información contenida en el informe no estaba organizada de conformidad con las directrices establecidas por el Comité en su primer período de sesiones.

147. Se preguntó si el artículo 7 de la Constitución, que determinaba que toda decisión administrativa basada en la discriminación racial o étnica era ilegal, se aplicaba también a actos legislativos de tal naturaleza; y si el artículo 56 de la Constitución, que disponía que se prescribirían por ley las normas relativas a las garantías fundamentales de que disfrutaban los ciudadanos, estaba complementado por disposiciones legislativas que permitiesen su eficaz aplicación.

148. El representante del Senegal aseguró al Comité que su Gobierno tomaría en cuenta las observaciones hechas y trataría de corregir las insuficiencias señaladas durante los debates. Con respecto a las relaciones con los regímenes racistas del Africa meridional, informó al Comité de que, ya desde 1963, su Gobierno había roto las relaciones consulares con Sudáfrica y había prohibido que aviones sudafricanos volasen sobre territorio senegalés y aterrizasen en aeródromos situados en territorio senegalés, había prohibido que los ciudadanos sudafricanos entrasen en el Senegal y había prohibido la importación de productos originarios de Sudáfrica.

Haití

149. Se recordará que, en su décimo período de sesiones, el Comité examinó el informe inicial de Haití sin la participación de un representante del Estado informante; que la opinión unánime del Comité fue que el informe no cumplía con los requisitos del párrafo 1 del artículo 9 de la Convención, y que el Comité decidió por unanimidad solicitar al Gobierno de Haití que presentara lo antes posible un informe que satisficiera esos requisitos, a más tardar con ocasión de la apertura del 11.º período de sesiones (el 31 de marzo de 1975) 19/.

150. En su 12.º período de sesiones, el Comité tuvo ante sí un informe de Haití de fecha 24 de abril de 1975 que, aparte de las cláusulas inicial y final, era idéntico al primer informe. El Comité oyó una declaración del representante de Haití en la que éste se refirió entre otras cosas, a algunas de las observaciones formuladas por algunos miembros del Comité durante el examen del informe inicial de su Gobierno durante el décimo período de sesiones. Luego de un debate preliminar sobre el nuevo informe, en el curso del cual el representante de Haití formuló, en una segunda declaración, algunas observaciones, el Comité decidió informar al Gobierno de Haití, a través de su representante, de que, en su opinión, el informe que tenía ante sí, al ser idéntico al examinado durante el décimo período de sesiones, no podía considerarse una respuesta del Gobierno de Haití a la comunicación que le había sido dirigida en ese período de sesiones y que esperaba que el Secretario General recibiera una respuesta satisfactoria con tiempo suficiente para ser examinada en el 13.º período de sesiones del Comité.

Venezuela

151. Se observó que el tercer informe periódico de Venezuela contenía información amplia, que complementaba la anteriormente proporcionada por el Estado informante; que se suministraban los textos de las disposiciones pertinentes de la Constitución y del Código Penal a que se hacía referencia en el informe; y que se proporcionaba la información prevista por el Comité en su recomendación general III, sobre las

19/ Ibid., párrs. 208 y 209, y anexo IV, sec. C.

relaciones con regímenes racistas. Los miembros del Comité tomaron nota asimismo de la indicación de que, desde que Venezuela se había independizado, no había habido ninguna decisión judicial relativa a actos del tipo de los comprendidos en la Convención. Sin embargo, se observó que la información contenida en el informe no estaba organizada de acuerdo con las directrices fijadas por el Comité en su primer período de sesiones.

152. Los miembros del Comité tomaron nota de la indicación de que no se podían suministrar estadísticas exactas sobre la composición demográfica del país, de conformidad con la recomendación general IV del Comité, porque en Venezuela no se exigía que los documentos pertinentes contuvieran datos sobre el color de las personas. No obstante, algunos miembros observaron que, puesto que el párrafo 1 del artículo 1 de la Convención y la recomendación general IV se referían no sólo a la raza o al color, sino también al linaje y al origen nacional o étnico, el Estado informante no debería tener mayores dificultades para suministrar alguna información pertinente - no necesariamente de carácter estadístico - sobre la composición de la población, incluso información sobre los inmigrantes.

153. Los miembros del Comité expresaron la esperanza de que en futuros informes se incluyera información sobre la aplicación del artículo 7 de la Convención, así como sobre la condición de los trabajadores migrantes en Venezuela. También sería conveniente que se aclararan en alguna medida los procedimientos relativos a la aplicación del párrafo f) del artículo 5 de la Convención, en particular con respecto a dos cuestiones: los medios a disposición de la víctima para formular su reclamación ante las autoridades y los artículos del Código Penal (fuera de los artículos 286 y 295, que no eran aplicables) que podían invocarse en los procedimientos penales que debían seguir a las medidas administrativas que las autoridades pudieran adoptar y que, según cabía presumir, tendrían carácter temporal.

154. Varios miembros del Comité sostuvieron que la legislación existente no satisfacía suficientemente todos los requisitos de los párrafos a) y b) del artículo 4 de la Convención; manifestaron la esperanza de que, en el estudio que actualmente se está haciendo de la reforma del Código Penal, se tuvieran en cuenta las observaciones formuladas durante el debate relativo al artículo 286 de ese Código y la opinión unánime del Comité acerca del carácter ineludible de las obligaciones estipuladas en el artículo 4 de la Convención.

155. El representante de Venezuela informó al Comité de que transmitiría a su Gobierno todas las observaciones formuladas durante el examen y de que, en su opinión, los comentarios relativos al artículo 286 del Código Penal serían de particular interés en vista de la reforma del Código Penal actualmente en estudio.

República Unida del Camerún

156. Los miembros del Comité observaron que el segundo informe periódico del Camerún daba gran parte de la información que faltaba en el informe inicial y mostraba que en su preparación se habían tenido debidamente en cuenta las opiniones y los deseos expresados durante los debates celebrados sobre el informe anterior. Se proporcionaban los textos de algunas de las disposiciones legislativas a que se hacía referencia en los dos informes. Además, el informe no se limitaba a las medidas legislativas, sino que suministraba también información sobre decisiones de los tribunales. Se daba información sobre la aplicación de los artículos 3, 4 (párr. a)) y 5 de la Convención, así como información sobre la aplicación de las

resoluciones de los órganos pertinentes de las Naciones Unidas sobre las relaciones con los regímenes racistas, tema al que se refería la recomendación general III del Comité. Sin embargo, se observó que faltaba información sobre la aplicación de los artículos 4 (párr. b)) y 7 de la Convención, al igual que la información prevista en la recomendación general IV del Comité (sobre la composición de la población).

157. Se expresó la esperanza de que en informes futuros del Camerún se suministrara el texto del artículo 152 del Código Penal (al que se refiere el artículo 241 de ese Código), a fin de que el Comité pudiera determinar el grado en que el Estado informante cumplía con sus obligaciones en virtud del párrafo a) del artículo 4 de la Convención. Se hicieron averiguaciones respecto de las disposiciones de la legislación del Camerún, si las había, que aseguraban la aplicación del principio de la igualdad de los cameruneses y los extranjeros ante la ley, afirmada en el artículo 1 del Código Penal, y respecto de los casos citados en el informe en relación con ese artículo, y sobre si alguno de ellos se refería a actos de discriminación racial en el sentido del artículo 1 de la Convención. Algunos miembros preguntaron si era posible que un particular instituyera una acción basada directamente en las disposiciones del preámbulo de la Constitución en el que se enuncian los derechos básicos de todos los seres humanos. Se hicieron preguntas sobre la definición precisa de las palabras "racismo" y "tribalismo" utilizadas en algunos de los artículos de las leyes del Camerún citadas en el informe, así como sobre el significado de las palabras "con condición asimilada" utilizadas en el informe.

158. El representante de la República Unida del Camerún aseguró al Comité que comunicaría a su Gobierno las observaciones formuladas durante el debate.

Chile

159. Tan pronto como el Comité inició su examen del segundo informe periódico de Chile, y antes de que se invitara al representante de ese Estado a participar en el debate de conformidad con el artículo 64 A del reglamento provisional, el Comité examinó una propuesta presentada por uno de sus miembros sobre una cuestión de orden en el sentido de que no debía examinarse el informe. El miembro que presentó dicha propuesta y otros miembros que la apoyaron sostuvieron que no podía considerarse que el documento hubiera sido presentado por el legítimo Gobierno de Chile; que, al usurpar el poder, la Junta militar que actualmente gobierna Chile había violado la Constitución de ese país, que era una hipocresía descarada que en el informe se aludiera a la Constitución de Chile cuando dicha Constitución no había estado en vigor desde el golpe de estado; y que el Comité no podía considerar seriamente el examen de un documento basado en una Constitución que había sido dejada sin efecto mediante toda una serie de decretos inconstitucionales. Los miembros del Comité que se opusieron a la propuesta - algunos de los cuales subrayaron que compartían las preocupaciones expresadas por sus colegas con respecto a la situación de respeto de los derechos humanos en Chile - señalaron que el Comité no era competente para determinar la legitimidad de las autoridades que presentaban los informes de los Estados partes, los cuales eran enviados al Comité por el Secretario General de conformidad con el párrafo 1 del artículo 9 de la Convención; que la situación general en Chile no estaba comprendida en el alcance de la Convención y, por consiguiente, no podía ser examinada por el Comité; y que el Comité estaba obligado a examinar el informe que tenía ante sí, que había sido presentado y enviado en la forma debida y de conformidad con el procedimiento

establecido. Sin embargo, algunos de esos miembros sugirieron que el Comité procediera inmediatamente a preguntar al representante de Chile si se encontraba en vigor la Constitución, y en qué medida, y en particular si estaban vigentes en su totalidad o en forma limitada las disposiciones de la Constitución relacionadas con las de la Convención. Otros miembros del Comité se opusieron a que se formulara semejante pregunta al representante de Chile, señalando que la suspensión de la Constitución de un país o la restricción de la aplicación de algunas de sus disposiciones estaban esencialmente dentro de la jurisdicción interna de un Estado soberano y fuera de la competencia del Comité. El Comité convino en invitar al representante de Chile a participar en el examen del informe de su Gobierno y formularle, en primer lugar, la pregunta relativa a la vigencia de la Constitución y, en particular, de las disposiciones de la Constitución que se mencionaban en el informe.

160. El representante de Chile aseguró al Comité que la Constitución de Chile estaba en vigor y que se estaba aplicando la totalidad de sus 110 artículos generales. Agregó que en ese momento prevalecía en Chile un estado de emergencia - constitucional, ya que estaba previsto expresamente en la Constitución - y que se había proclamado un estado de sitio, pero que las disposiciones civiles, culturales y educacionales se estaban aplicando en todo Chile en completa igualdad. Se preguntó concretamente al representante de Chile si las disposiciones de la Constitución que se mencionaban en el informe, y sobre las cuales se basaba todo el informe (salvo una sección que se ocupaba de la aplicación del párrafo 2 del artículo 2 de la Convención), a saber, los párrafos 1, 2, 7, 8, 9, 10, 14, 15 y 17 del artículo 10, se estaban aplicando total o parcialmente o si habían sido suspendidas en virtud del estado de sitio. En respuesta, el representante de Chile señaló que la Constitución en vigor era general e incluía las disposiciones mencionadas en el informe, las que estaban siendo aplicadas en la medida que lo permitía el estado de sitio, que había sido proclamado constitucionalmente. Explicó que tal vez esas disposiciones no estuvieran en vigor en su totalidad debido a la aplicación de otras disposiciones constitucionales que surgían del estado de sitio. Se preguntó al representante de Chile si esa declaración se aplicaba también a la sección 15 del artículo 10 de la Constitución, en la que se garantizaba a todos los habitantes de la República la libertad de vivir en cualquier parte de ella y trasladarse de un lugar a otro, y contestó que ese derecho estaba garantizado para todas las personas siempre que no participaran en ninguna actividad que pudiera considerarse una violación del estado de sitio. Hizo hincapié en que el estado de sitio había sido proclamado mediante lo que él denominó un "Decreto Supremo" del poder ejecutivo, en ejercicio de facultades que le confería expresamente la Constitución en el artículo 72, cuyas disposiciones autorizaban al poder ejecutivo a restringir los derechos garantizados en virtud de la sección 15 del artículo 10 de la Constitución. Agregó que eso no significaba que la Constitución no estuviese en vigor y que no tenía nada que ver con problemas de discriminación racial, que no se producían en Chile.

161. Algunos miembros del Comité tomaron nota con pesar de que, aunque las disposiciones del artículo 10 de la Constitución constituían su piedra angular, en el segundo informe periódico de Chile no se mencionaba en absoluto el hecho de que el ejercicio de algunos de los derechos garantizados en virtud de ese artículo estaba en realidad sujeto a algunas restricciones, omisión que algunos miembros estimaban que era tan grave que arrojaba dudas sobre la veracidad del informe en su totalidad, así como sobre el hecho de que valiera la pena que el Comité lo examinara.

162. El Comité pidió al representante de Chile que le proporcionara el texto del "Decreto Supremo" por el que se declaró el estado de sitio, así como el texto de las secciones pertinentes del artículo 72 de la Constitución en que se basaba ese decreto.

163. Algunos miembros del Comité hicieron observaciones sobre los dos textos suministrados por el representante de Chile, señalando que la declaración que dicho representante había hecho ante el Comité, en el sentido de que el estado de sitio había sido proclamado constitucionalmente, no estaba corroborada por los textos disponibles. Observaron que el "Decreto Legislativo No. 3" de 18 de septiembre de 1973 había sido proclamado por la Subsecretaría de Guerra del Ministerio de Defensa Nacional y había sido firmado por cuatro oficiales militares, mientras que en la sección 17 del artículo 72 de la Constitución se confería la facultad de declarar el estado de sitio al Congreso y, en caso de que el Congreso no estuviera reunido, al Presidente, quien estaba en la obligación de fijar la duración del estado de sitio; se observó también que la declaración del Decreto Legislativo No. 3 no especificaba la duración del estado de sitio. Sin embargo, algunos miembros del Comité negaron la competencia de éste para ocuparse en un debate sobre la constitucionalidad del Decreto Legislativo y sostuvieron que la situación no guardaba relación con la aplicación de las disposiciones de la Convención o la práctica de la discriminación racial en Chile. Otros miembros del Comité, aunque estuvieron de acuerdo en que el Comité no era competente ni estaba calificado para examinar la constitucionalidad de un decreto proclamado en un Estado parte, sostuvieron, empero, que el Comité no podía seguir adelante en su examen del segundo informe periódico de Chile antes de recibir información adicional sobre las consecuencias exactas del estado de sitio sobre los derechos garantizados en virtud de la Constitución a todos los habitantes de la República, con particular referencia a los derechos consagrados en la Convención. Deseaban saber, entre otras cosas, si, en virtud del estado de sitio, se había dictado algún otro decreto por el que se suspendiera o restringiera la aplicación de algunos artículos de la Constitución y si se habían establecido tribunales judiciales o semijudiciales especiales.

164. Durante el intercambio de opiniones resumido en los párrafos anteriores, se formularon varias propuestas. Con arreglo a una propuesta, el Comité adoptaría una decisión en la que expresaría su profunda preocupación por el contenido del informe y por el hecho de que la junta militar chilena no estuviera cumpliendo con las disposiciones de la Convención, y observaría además con profundo pesar que, tras la suspensión de la Constitución, ya no existían en Chile disposiciones legislativas, judiciales, administrativas o de otra índole de las que todo Estado parte en la Convención se había comprometido a adoptar a fin de dar cumplimiento a las disposiciones de la Convención. Con arreglo a otra propuesta, el Comité, no habiendo llegado a un acuerdo, informaría de ello a la Asamblea General en su informe anual en el que incluiría resúmenes de las opiniones expresadas por diversos miembros o, en su defecto, extractos de las actas resumidas de las sesiones en que se examinó el informe de Chile, o simplemente haría referencia a los documentos de que se tratase, citando su signatura. Se hizo una tercera sugerencia en el sentido de que el Comité procediera de inmediato al examen del informe. Con arreglo a una cuarta sugerencia, el Comité suspendería su examen del informe hasta tanto se recibiera información adicional sobre las consecuencias del estado de sitio en los derechos constitucionales en Chile.

165. El Comité decidió dar instrucciones a su Relator para que preparara la sección del informe anual del Comité en la que figura el resumen del examen del segundo

informe periódico de Chile de la misma manera en que se preparan las demás secciones relativas a los informes de otros Estados partes, consignando las diversas opiniones expresadas por los miembros del Comité y la información suministrada por el representante del Estado informante.

Trinidad y Tabago

166. Los miembros del Comité expresaron la opinión de que la información que figuraba en el informe inicial de Trinidad y Tabago era completa. Señalaron que este informe proporcionaba información sobre la aplicación de los artículos 2 (párr. 1, incisos a), b), c) y e), y párr. 2), 3, 4, 5, 6 y 7 de la Convención, así como la información prevista en las recomendaciones generales III del Comité (sobre las relaciones con regímenes racistas) y IV (sobre la composición de la población); que proporcionaba los textos de las disposiciones legislativas pertinentes; que describía algunas medidas administrativas adoptadas para asegurar la aplicación de las disposiciones de la Convención y de la legislación pertinente del Estado informante; y que, en su organización, el informe seguía las directrices establecidas por el Comité en su primer período de sesiones.

167. Algunos miembros del Comité expresaron la esperanza de que en informes futuros los textos de las secciones 3, 4 y 5 de la Constitución, a las que se refería el preámbulo de la sección 2 (citado en el informe) se pusieran a disposición del Comité y de que se proporcionara información sobre los casos que se hubieran llevado ante los tribunales en relación con la sección 4 de la Ley sobre Sedición (enmendada).

168. La mayoría de los miembros del Comité opinaron que la sección 4 de la Ley sobre Sedición (enmendada) no daba pleno cumplimiento a todos los requisitos del párrafo b) del artículo 4 de la Convención, y en particular a la obligación imperativa asumida por los Estados partes de declarar ilegales y prohibir las organizaciones ... que promuevan la discriminación racial; y expresaron la esperanza de que el Gobierno del Estado informante examinaría la posibilidad de adoptar medidas legislativas específicas para aplicar dichas disposiciones a fin de asegurar que, si fuera necesario desarticular una organización que promueva la discriminación racial o incite a ella, exista legislación adecuada para tal fin. Algunos miembros del Comité, por otra parte, opinaron que no eran necesarias nuevas medidas legislativas, dado que las actividades de las organizaciones que promuevan la discriminación racial o inciten a ella podían coartarse mediante las leyes del Estado informante y que los individuos miembros de tales organizaciones estaban sujetos a castigos por perpetrar dichas actividades, aunque las organizaciones en sí no pudiesen ser declaradas ilegales.

169. El representante de Trinidad y Tabago aseguró al Comité que transmitiría a su Gobierno las observaciones hechas y las cuestiones suscitadas por los miembros del Comité durante el examen del informe, y en particular las opiniones expresadas en relación con la aplicación del párrafo b) del artículo 4 de la Convención.

Líbano

170. El informe inicial del Líbano, presentado el 30 de julio de 1975, que fue examinado por el Comité en su 12º período de sesiones, estaba destinado a complementar la información contenida en un informe anterior, presentado el 17 de agosto de 1972, que el Comité no había examinado antes a solicitud del Gobierno del Líbano.

Este había informado al Comité que consideraba ese informe como "preliminar" y solicitó que se aplazara su examen.

171. Algunos miembros del Comité observaron que la información contenida en el informe mencionado se relacionaba con la aplicación de los artículos 3, 4 (párr. a)), 5 y 6 de la Convención, así como con la aplicación de las resoluciones de los órganos competentes de las Naciones Unidas acerca de las relaciones con los regímenes racistas, a las cuales se refería la recomendación general III del Comité. Se observó, empero, que, aunque se proporcionaban los textos de algunos artículos de la Constitución mencionados en el informe, no se ponían a disposición del Comité los textos de otros artículos de la Constitución y otras disposiciones legislativas pertinentes, a las cuales hacía referencia el informe; se observó, además, que faltaba la información contemplada en la recomendación general IV del Comité (relativa a la composición de la población) y que el informe no estaba organizado según las directrices establecidas por el Comité en su primer período de sesiones.

172. Los miembros del Comité tomaron nota de la afirmación de que, como el Líbano se adhirió a la Convención, "las disposiciones de esa Convención son aplicables de la misma forma que las leyes vigentes en el Líbano y tienen carácter obligatorio para las autoridades públicas". Sin embargo, fueron de opinión de que, con respecto a los artículos de la Convención que no son de efecto inmediato, es necesario que los Estados partes tomen medidas legislativas específicas a fin de aplicar las disposiciones de esos artículos si no existían ya las leyes que las hicieran efectivas adecuadamente. Se observó que las leyes vigentes en el Líbano, según se informó, no parecían hacer plenamente efectivos los artículos 4 y 6 de la Convención.

173. Las dos últimas oraciones del informe que se examina dicen lo siguiente:

"En lo que respecta a la aplicación de los artículos 4 y 7, el Gobierno del Líbano ha dado instrucciones a las autoridades competentes para que tomen medidas inmediatas y eficaces y, entre otras cosas, disposiciones legislativas, con objeto de lograr los objetivos de la Convención.

"Conclusión"

"De lo anterior se desprende que en el Líbano no hay discriminación racial y que no es necesario tomar, de conformidad con los artículos 4 y 7 de la Convención, medidas legislativas, administrativas y judiciales para eliminar la discriminación racial, dado que la Convención Internacional sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación Racial se considera parte integrante de la legislación libanesa."

Algunos miembros del Comité fueron de opinión de que esas dos afirmaciones se contradicen.

174. Al examinar la medida en que el artículo 62 de la ley de prensa y el artículo 4, párrafo 2, de la ley de censura cinematográfica satisfacían las exigencias del artículo 4, párr. a), de la Convención, el Comité tropezó con el inconveniente de que los textos de esas disposiciones de la ley libanesa no fueron proporcionados por el Estado informante. En su examen del informe de que se trata, el Comité tropezó, además, con el inconveniente de que la traducción del informe a los idiomas de trabajo del Comité era, en varios casos, inexacta, como algunos miembros del Comité y el representante del Estado informante lo señalaron.

175. Comentando sobre las observaciones formuladas por miembros del Comité acerca de la contradicción entre las dos últimas oraciones del informe (véase párr. 173 supra), el representante del Líbano llamó la atención hacia un error de traducción. Las palabras "de conformidad con los artículos 4 y 7 de la Convención", que figuran en la última oración del informe, eran una traducción incorrecta de las palabras correspondientes que figuran en el texto árabe original, el cual debería haber sido traducido como: "después de tener debidamente en cuenta los artículos 4 y 7 de la Convención". El representante del Líbano aseguró al Comité que, en la medida de lo posible, el Gobierno de su país seguiría las directrices establecidas por el Comité en su primer período de sesiones en la preparación de su segundo informe periódico.

Uruguay

176. Los miembros del Comité observaron que, aunque había sido precedido por dos informes ordinarios, así como por uno suplementario, el tercer informe periódico del Uruguay contenía nuevas informaciones. En él se tenían también en cuenta las observaciones formuladas y las preguntas planteadas por los miembros del Comité en períodos de sesiones anteriores.

177. Los miembros del Comité observaron que el artículo 332 de la Constitución, cuyo texto se suministraba, mitigaba algunos de los temores que se habían expresado en los debates de los informes anteriores del Uruguay, en relación con la falta de una legislación concreta que pusiera en vigor las disposiciones del párrafo f) del artículo 5 de la Convención, especialmente dado el principio enunciado en el párrafo 2 del artículo 10 de la Constitución en el sentido de que, "ningún habitante de la República será obligado a hacer lo que no manda la ley, ni privado de lo que ella no prohíbe". Los miembros del Comité tomaron nota de las medidas adoptadas para aplicar el artículo 7 de la Convención. También observaron que la afirmación de que los derechos laborales - incluidos el derecho de educación, vivienda, salubridad y seguridad social - estaban protegidos por artículos de la Constitución (y no por leyes o reglamentos secundarios) que no hacían diferencia entre nacionales o extranjeros, sino que se referían a los "habitantes de la República".

178. Se tomó nota en especial de la afirmación de que "está a consideración del Consejo de Estado la reforma de la actual Constitución, que será plebiscitada una vez incluida su redacción. Entre las medidas en estudio estaba la incorporación dentro de su ordenamiento jurídico, de aquellas normas que, basadas en los instrumentos internacionales ratificados por el Uruguay, eran consideradas pertinentes o necesarias". Se expresó la esperanza de que las disposiciones de la Convención que no habían sido puestas en vigor por conducto de una legislación concreta quedarían incorporadas en las reformas contempladas y que el Comité sería debidamente informado en futuros informes sobre todos los cambios pertinentes que se produjeran en la Constitución y en el sistema jurídico del Estado informante.

179. En el informe objeto de examen figuraba la siguiente información: "No se registran en los anales de los juzgados y otras oficinas competentes del Uruguay ninguna denuncia de caso alguno de discriminación racial, por lo tanto, no se ha creído necesario elaborar normas en función del artículo 4 a), b) y c)". Al debatir esta afirmación, algunos miembros preguntaron si la decisión de no adoptar medidas para aplicar el artículo 4 de la Convención constituía una decisión adoptada ya dentro del contexto de la reforma constitucional y legislativa mencionada

en el párrafo anterior. Todos los miembros del Comité que participaban en el debate expresaron la esperanza de que se promulgaran disposiciones legales destinadas a poner en vigor las disposiciones del artículo 4 de la Convención.

180. Otras preguntas planteadas durante el examen del informe se referían a los artículos 6 y 14 de la Convención: ¿De qué recursos disponía en el Uruguay la víctima de un acto de discriminación racial, con arreglo al artículo 6 de la Convención? Asimismo, desde la formulación de la declaración que se preveía en el párrafo 1 del artículo 14 de la Convención, ¿había el Gobierno del Uruguay establecido o señalado algún órgano dentro de su orden jurídico nacional, que tuviera competencia para asumir las responsabilidades descritas en el párrafo 2 de dicho artículo?

181. El representante del Uruguay aseguró al Comité que la afirmación citada en el párrafo 179 supra se refería sólo a la situación existente hasta el momento y no prejulgaba las nuevas disposiciones que podrían aprobarse durante el proceso de la reforma constitucional propuesta, y que su Gobierno sería informado de la preocupación expresada por los miembros del Comité sobre el particular. Respondiendo a una pregunta relativa a los recursos de que se disponía de conformidad con el artículo 6 de la Convención, el representante del Uruguay indicó que mientras no se incluyeran disposiciones concretas sobre la materia en el Código Penal del Uruguay, el artículo 332 de la Constitución estaba destinado concretamente a lograr que se aplicaran las normas y obligaciones fundamentales; en la práctica, ello significaba que, si se producía realmente un caso de discriminación racial, la Corte Suprema era indudablemente competente para conocerlo. En relación con el órgano mencionado en el párrafo 2 del artículo 14 de la Convención, el representante del Uruguay informó al Comité de que no se había creado ni señalado ningún órgano semejante, porque las disposiciones de ese párrafo eran opcionales. En una declaración preliminar que formuló al iniciarse el examen del informe de su Gobierno por parte del Comité, el representante aseguró al Comité que transmitiría todas las observaciones que hicieran los miembros del Comité para que su Gobierno pudiera cumplir cabalmente sus obligaciones.

Botswana

182. Los miembros del Comité observaron que el informe inicial de Botswana, aunque conciso, contenía información que indicaba que el Estado informante había puesto en vigor algunas de las disposiciones de los artículos 2, 3, 4, 5 y 6 de la Convención. Sin embargo, la información no había sido organizada según las directrices establecidas por el Comité en su primer período de sesiones; y las disposiciones legislativas a que se hacía referencia en el informe en términos generales no habían sido citadas concretamente ni reproducidas en forma textual. Faltaba además información sobre la aplicación del artículo 7 de la Convención, así como la información prevista en las recomendaciones generales III (sobre las relaciones con los regímenes racistas) y IV (sobre la composición de la población) del Comité.

183. Los miembros del Comité tomaron nota de la declaración de que "la legislación que databa del período colonial y que presentaba matices raciales ha sido ya enmendada, derogada o anulada" y expresaron la esperanza de que en futuros informes se incluiría información detallada sobre la aplicación de dicha declaración, que se ajustaba al inciso c) del párrafo 1 del artículo 2 de la Convención. De manera análoga, con respecto a la parte del informe en que se reproducían las palabras del artículo 6 de la Convención, se expresó el deseo de que se proporcionara

información más concreta sobre los mecanismos y procedimientos pertinentes, así como sobre los casos llevados ante los tribunales y las sentencias dictadas por dichos tribunales, en caso de haberse dictado alguna. Y en relación con el artículo 4 de la Convención, los miembros del Comité señalaron que esperaban que se proporcionara información sobre disposiciones legislativas concretas; no obstante, se recordará que dicha información había sido proporcionada separadamente por el Gobierno de Botswana de conformidad con la decisión 3 (VII) del Comité. Algunos miembros consideraron que el artículo 3 (cap. II) de la Constitución, que establecía el principio de la no discriminación y la igualdad ante la ley en lo que respecta al disfrute de ciertos derechos, no tenía el mismo alcance que el artículo 5 de la Convención; sin embargo, otros miembros expresaron la opinión de que la lista de derechos que figuraba en el artículo 5 sólo tenía por objeto ser ilustrativa, y no exclusiva o exhaustiva; que a cada país le correspondía decidir qué derechos y libertades fundamentales estaba en condiciones de garantizar a sus ciudadanos y que el Comité no se ocupaba tanto de la naturaleza de los derechos proclamados por los Estados partes como de que dichos derechos se aplicaran sin discriminaciones basadas en la raza, color, ascendencia u origen nacional o étnico.

184. El representante de Botswana informó al Comité de que transmitiría a su Gobierno las opiniones y solicitudes de información adicional expresadas durante el debate y aseguró al Comité que el siguiente informe de Botswana se ajustaría a las directrices establecidas por el Comité y proporcionaría toda la información que éste había solicitado.

C. Otras medidas sobre los informes

185. En su 241a. sesión (11.º período de sesiones), el 11 de abril de 1975, el Comité examinó un proyecto de recomendación general presentado por el Sr. Čalovski, en el que se llamaba la atención sobre la necesidad de información sobre las "medidas administrativas y de otra índole" en los informes de los Estados partes, de conformidad con el párrafo 1 del artículo 9 de la Convención, y se invitaba a los Estados partes a incluir esta información en sus informes.

186. Aunque apoyaba firmemente los objetivos del proyecto de recomendación general, que se ajustaban al artículo 9 de la Convención, y reconocía la necesidad de señalar el asunto a la atención de los Estados partes, el Sr. Sayegh expresó dudas de que la publicación de otra recomendación general, de conformidad con el párrafo 2 del artículo 9 de la Convención, fuera el método más práctico para servir a los fines perseguidos. Hizo notar que, en relación con la preparación de los informes por los Estados partes, el Comité había publicado ya una comunicación general, cuatro recomendaciones generales y una solicitud concreta; y expresó temores sobre la publicación de otra recomendación general, que exigiría poner en marcha el procedimiento estipulado en el párrafo 2 del artículo 9 de la Convención. Observó que se podía servir mejor los fines perseguidos por el Comité con otros métodos, tales como la inclusión de una referencia a esta cuestión en el informe anual a la Asamblea General, la distribución de una comunicación general a los Estados partes o la inclusión de referencias a la insuficiencia de los informes que carecían de información sobre las medidas administrativas y de otra índole durante el examen de esos informes en presencia de los representantes de los Estados informantes. La Sra. Warzazi y los Sres. Soler y Tomko apoyaron este punto de vista; y los Sres. Soler y Tomko expresaron su preferencia por la primera de las soluciones propuestas por el Sr. Sayegh. El Sr. Dayal, concordando con

los fines del proyecto de recomendación general, declaró que estaría también de acuerdo con la incorporación a su informe anual de una expresión de los puntos de vista del Comité sobre el asunto. El Sr. Čalovski dijo que había puesto el proyecto de recomendación general en estudio porque existía la idea en el seno del Comité de que, en general, los informes de los Estados partes no proporcionaban suficiente información sobre las medidas administrativas y de otra índole adoptadas para poner en práctica las disposiciones de la Convención. Creía que los puntos de vista del Comité al respecto tendrían una mayor repercusión si fueran presentados en forma de recomendación general, pero estaría de acuerdo con una decisión del Comité de incorporar esos puntos de vista a su informe anual.

187. El Comité decidió no publicar una recomendación general como tal, sino expresar sus puntos de vista sobre el asunto en su informe anual a la Asamblea General.

V. EXAMEN DE COPIAS DE PETICIONES E INFORMES Y DE OTRA INFORMACION RELACIONADA CON LOS TERRITORIOS BAJO ADMINISTRACION FIDUCIARIA O NO AUTONOMOS Y DE CUALESQUIERA OTROS TERRITORIOS A LOS CUALES SE APLIQUE LA RESOLUCION 1514 (XV) DE LA ASAMBLEA GENERAL, DE CONFORMIDAD CON EL ARTICULO 15 DE LA CONVENCION

188. El Comité examinó este tema en sus sesiones 225a. y 246a. (11.º período de sesiones), el 31 de marzo y el 18 de abril de 1975, y en sus sesiones 262a. y 263a. (12.º período de sesiones) el 18 de agosto de 1975.

189. Las medidas adoptadas por el Consejo de Administración Fiduciaria en su 41.º período de sesiones de 1974 y por el Comité Especial encargado de examinar la situación con respecto a la aplicación de la Declaración sobre la concesión de la independencia a los países y pueblos coloniales en su período de sesiones de 1973, de conformidad con el artículo 15 de la Convención y la resolución 2106 B (XX) de la Asamblea General de 21 de diciembre de 1965, fueron estudiadas en el quinto informe anual del Comité presentado a la Asamblea General en su vigésimo noveno período de sesiones 20/. Las opiniones y recomendaciones del Comité para la Eliminación de la Discriminación Racial basadas en su examen de copias de peticiones e informes y de otra información que le había sido presentada por el Consejo de Administración Fiduciaria y el Comité Especial figuraban en el párrafo 262 de su informe a la Asamblea General 20/.

190. La Asamblea General, en su resolución 3266 (XXIX) de 10 de diciembre de 1974, tomó nota con reconocimiento del informe del Comité para la Eliminación de la Discriminación Racial, expresó su agradecimiento al Comité por la labor que realiza en cumplimiento de las disposiciones de la Convención y tomó nota también de la parte del informe del Comité concerniente a las peticiones y otra información relativas a los territorios en fideicomiso y no autónomos y a todos los otros territorios a los que se aplica la resolución 1514 (XV) de la Asamblea General de 14 de diciembre de 1960.

191. El Consejo de Administración Fiduciaria, en su 1443a. sesión (42.º período de sesiones), el 4 de junio de 1975, examinó un tema de su programa relativo a la cooperación con el Comité para la Eliminación de la Discriminación Racial, con especial referencia a las resoluciones 2106 B (XX) y 3266 (XXIX) de la Asamblea General. Decidió señalar a la atención de las autoridades administradoras las peticiones y observaciones del Comité, que figuran en el informe de éste a la Asamblea General, y pedir a las autoridades administradoras que las tuviesen en cuenta en sus próximos informes anuales a las Naciones Unidas.

192. En su 11.º período de sesiones (marzo/abril de 1975), el Comité fue informado por el Secretario General de las medidas adoptadas por el Comité Especial en su período de sesiones de 1974 en relación con el artículo 15 de la Convención. El Secretario General señaló a la atención del Comité las decisiones adoptadas por el Comité Especial en su 981a. sesión, celebrada el 5 de septiembre de 1974, y una carta del Presidente del Comité Especial, de fecha 18 de diciembre de 1974, que hacía referencia, entre otras cosas, a las peticiones que el Comité Especial

20/ Ibid., cap. V.

transmitía en virtud del inciso a) del párrafo 2 del artículo 15 de la Convención, junto con las actas del examen de estas peticiones, así como el hecho de que el informe del Comité Especial había sido aprobado por la Asamblea General en la resolución 3328 (XXIX) de 16 de diciembre de 1974.

193. De resultados de las decisiones adoptadas por el Consejo de Administración Fiduciaria en su 42.^o período de sesiones y por el Comité Especial en su período de sesiones de 1974, el Comité tuvo ante sí en sus períodos de sesiones 11.^o y 12.^o los documentos cuya lista figura en el anexo V infra.

194. En su 11.^o período de sesiones, el Comité estableció tres grupos de trabajo para que examinaran la información presentada al Comité por el Consejo de Administración Fiduciaria y el Comité Especial y comunicaran al Comité sus conclusiones, al igual que sus opiniones y recomendaciones. Los tres grupos de trabajo estaban integrados por los siguientes miembros del Comité:

- a) Grupo de Trabajo sobre los Territorios del Pacífico y del Océano Índico
Sr. Aboul-Nasr, Sr. Tomko, Sr. Valencia Rodríguez y Sr. Macdonald
(Presidente).
- b) Grupo de Trabajo sobre los Territorios del Océano Atlántico y del Caribe, incluido Gibraltar
Sr. Dehlavi, Sr. Kapteyn, Sr. Partsch, Sr. Soler y Sr. Čalovski
(Presidente).
- c) Grupo de Trabajo sobre los Territorios africanos
Sr. Ancel, Sr. Ingles, Sr. Lamptey, Sr. Safronchuk, Sra. Warzazi y
Sr. Ortiz Martín (Presidente).

El Comité convino en que el Sr. Dayal presidiría el grupo de Presidentes de los tres Grupos de Trabajo.

195. En su 12.^o período de sesiones, siguiendo sus prácticas anteriores, el Comité acordó que el texto definitivo de las opiniones y recomendaciones formuladas por el Comité, en virtud del artículo 15 de la Convención, estuviese precedido de las observaciones siguientes: 1) que el Comité presentaba, en vez de un "resumen de las peticiones e informes recibidos de los órganos de las Naciones Unidas", tal como se pedía en el párrafo 3 del artículo 15 de la Convención, una lista de esos documentos, que puede encontrarse en el anexo V infra; y 2) que las "opiniones y recomendaciones" que se le había pedido al Comité que presentara a los diferentes órganos de las Naciones Unidas en relación con las peticiones e informes de ellos recibidos, de conformidad con los párrafos 2 a) y 2 b) del artículo 15 de la Convención, no se preparaban en textos separados, sino en un texto integrado, que se presenta a la Asamblea General, de conformidad con el párrafo 3 del artículo 15 de la Convención, y también a los órganos interesados de las Naciones Unidas.

196. Los informes de los tres Grupos de Trabajo antes mencionados, que habían sido examinados por el Comité en sus sesiones 262a. y 263a., el 18 de agosto de 1975, fueron aprobados párrafo por párrafo, con algunas enmiendas.

197. Las opiniones y recomendaciones del Comité basadas en su examen de copias de peticiones e informes y de otras informaciones que le habían sido presentadas en virtud del artículo 15 de la Convención, tal como fueron aprobadas por el Comité en sus sesiones 262a. y 263a., el 18 de agosto de 1975, son las siguientes:

1) El Comité para la Eliminación de la Discriminación Racial ha examinado la información contenida en los documentos relativos a los territorios bajo administración fiduciaria o no autónomos y a todos los demás territorios a los que se aplica la resolución 1514 (XV) de la Asamblea General que le presentaron el Consejo de Administración Fiduciaria y el Comité Especial encargado de examinar la situación con respecto a la aplicación de la Declaración sobre la concesión de la independencia a los países y pueblos coloniales, de conformidad con lo dispuesto en el párrafo 2 del artículo 15 de la Convención Internacional sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación Racial.

2) El Comité desea señalar a la atención de la Asamblea General, del Consejo de Administración Fiduciaria y del Comité Especial las opiniones y recomendaciones que siguen, de conformidad con las obligaciones que le corresponden en virtud del artículo 15 de la Convención.

3) El Comité observa que en los documentos que ha examinado no hay en general información suficiente sobre las medidas legislativas, judiciales, administrativas o de otra índole relacionadas directamente con los principios, objetivos y disposiciones de la Convención, y a este respecto desea subrayar que esa información debe proporcionársele invariablemente para que pueda cumplir debidamente las obligaciones que le corresponden en virtud del artículo 15 de la Convención.

A. Territorios africanos 21/

1. Rhodesia del Sur

- 1) El Comité examinó el documento de trabajo relativo a Rhodesia del Sur (A/AC.109/L.992 y Corr.1 y Add.1 y 2) y tomó nota con interés del fracaso de la llamada "Operación 74" por la cual el régimen ilegal intentaba cambiar la situación demográfica del país a fin de perpetuar su política racial y afianzar la ilegalidad.
- 2) El Comité observó con profunda preocupación que continuaba la represión de la mayoría africana por los agentes del régimen ilegal. Sugiere que la Asamblea General inste a que la comunidad internacional ejerza una fuerte presión y la Potencia administradora tome medidas eficaces para impedir que el régimen de Smith continúe con esa represión y, en especial, con la ejecución de patriotas africanos.
- 3) El Comité tomó nota con preocupación de la evasión de sanciones de que se informó y en la que participaban la Rhodesian Iron and Steel Company (RISCO) en colusión con varias empresas residentes no rhodesias, y Air Rhodesia en colusión con varias líneas aéreas internacionales. Dado que tales prácticas tenderían a perpetuar la situación actual en Rhodesia, en contravención de las disposiciones de la Convención, el Comité aboga por que se haga un llamamiento a todos los gobiernos interesados para que investiguen las denuncias relativas a empresas que están bajo su respectiva jurisdicción. En el caso de Air Rhodesia y las líneas aéreas internacionales, el Comité también está a favor de que se solicite a la Asociación de Transporte Aéreo Internacional que pida a las líneas aéreas internacionales bajo su jurisdicción que den por terminados sus acuerdos mutuos en lo que éstos se refieran a Air Rhodesia.
- 4) El Comité lamentó la muerte del Sr. Herbert Chitepo en circunstancias trágicas, y tomó nota con agradecimiento del cierre de la llamada Embajada de Rhodesia del Sur en Lisboa, dispuesto por el Gobierno de Portugal, y del

21/ Texto aprobado en la 262a. sesión, el 18 de agosto de 1975. En relación con estos territorios, se presentaron al Comité los documentos siguientes:

A/9623/Add.4 (part II) (Somalia Francesa)
A/9623/Add.4 (part II) (Sáhara Español)
A/AC.109/L.992 y Corr.1 y Add.1 y 2 (Rhodesia del Sur)
A/AC.109/L.1007 y Add.1 (Namibia)
A/AC.109/L.1033 (Archipiélago de las Comoras)
A/AC.109/L.1006 (Política de descolonización de Portugal)
A/AC.109/L.1020 (Mozambique)
A/AC.109/L.1016 (Cabo Verde)
A/AC.109/L.1013 (Santo Tomé y Príncipe)
A/AC.109/L.1014 (Angola)
A/AC.109/PET.1253 (Petición relativa a Rhodesia del Sur)
A/AC.109/PET.1254 (Petición relativa al Sáhara Español).

apoyo a Zimbabwe ofrecido por dirigentes del Commonwealth en la reunión que celebraron en Kingston, Jamaica, a principios de este año.

5) El Comité hizo suya las recomendaciones de la resolución relativa a la cuestión de Rhodesia del Sur aprobada por el Comité Especial en su 1008a. sesión, celebrada en Lisboa, Portugal, el 17 de junio de 1975 (A/AC.109/494).

6) Tomando nota del acuerdo, públicamente anunciado, entre el régimen ilegal y el African National Council para celebrar conversaciones constitucionales en un coche de ferrocarril en la frontera entre Zimbabwe y Zambia dentro de muy poco tiempo, el Comité expresa la sincera esperanza de que tales negociaciones conduzcan finalmente a la anhelada solución del problema de Rhodesia. Mientras tanto, el Comité exhorta a que se ponga inmediatamente en libertad a todos los presos políticos de Zimbabwe, como signo de buena voluntad del régimen ilegal.

2. Namibia

1) El Comité examinó el documento de trabajo sobre Namibia (A/AC.109/L.1007 y Add.1) y expresó su profunda preocupación por la persistencia del Gobierno de Sudáfrica en su política de los llamados "territorios patrios", que está llevando a la fragmentación de Namibia y al desplazamiento de la población no blanca del Territorio.

2) El Comité condena la continua represión en Namibia, que ha conducido al éxodo en masa de namibianos del Territorio.

3) A juicio del Comité, al haber quebrantado Sudáfrica su mandato en Namibia, incumbe a las Naciones Unidas y a la comunidad internacional en general lograr que cese inmediatamente la administración del Territorio por Sudáfrica, a fin de permitir que el pueblo de Namibia ejerza su derecho a la libre determinación. A este respecto, el Comité hace suyo el consenso sobre la cuestión de Namibia, aprobado por el Comité Especial en su 1009a. sesión, celebrada en Lisboa, Portugal, el 18 de junio de 1975 (A/AC.109/495).

3. Somalia Francesa 22/

El Comité examinó el informe del Comité Especial sobre la Somalia Francesa (A/9623/Add.4, part II) y, habiendo tomado nota de la continuación de la controversia acerca del estatuto constitucional del Territorio y la denuncia de discriminación implícita en ella, sugiere que la Asamblea General dirija un llamamiento a las autoridades responsables para que adopten medidas que conduzcan a la armonía y unidad del Territorio.

22/ La nueva designación del Territorio conocido anteriormente como Somalia Francesa es Territorio Francés de los Afares y los Issas. Véase el Boletín de Terminología No. 240, publicado por la Secretaría el 15 de abril de 1968 (ST/CS/SER.F/240).

4. Sáhara Español

Al examinar el informe del Comité Especial sobre el Sáhara Español (A/9623/Add.4, part II), el Comité tuvo presente el hecho de que algunos aspectos del problema están ahora ante la Corte Internacional de Justicia y que están en vías de adoptarse medidas conexas. Por consiguiente, el Comité opina que, en el ínterin, la Potencia administradora debe asegurar que se respeten en el territorio los derechos humanos fundamentales.

5. Archipiélago de las Comoras

1) El Comité examinó el informe del Comité Especial sobre el Archipiélago de las Comoras (A/9623/Add.4, part II), y el documento de trabajo conexo (A/AC.109/L.1033) y con respecto al primero deploró la lista de denuncias de detenciones, actos de violencia e intimidación y medidas arbitrarias en el Territorio.

2) El Comité, a la luz de los recientes acontecimientos políticos en el Territorio, tomó nota de la aceptación por la Potencia administradora del principio de la independencia y reiteró su opinión 23/ de que el proceso de independización no debería llevar a la destrucción de la unidad nacional de las Comoras ni crear condiciones favorables a la discriminación sobre una base regional o étnica.

6. La política de descolonización de Portugal y la obtención de la independencia por ese Territorio

1) El Comité tuvo ante sí el documento de trabajo del Comité Especial sobre la política de descolonización de Portugal (A/AC.109/L.1006) y el Consenso del Comité Especial sobre la cuestión de los territorios bajo administración portuguesa (A/AC.109/493). Aunque observa que estos documentos no contienen información significativa relacionada con los objetivos y fines de la Convención, el Comité hace constar no obstante su satisfacción por la actitud progresista del nuevo Gobierno portugués acerca de la descolonización y el ejercicio de los derechos humanos fundamentales en lo que resta de sus territorios de ultramar.

2) Al examinar los documentos de trabajo del Comité Especial relativos a Mozambique (A/AC.109/L.1020), Cabo Verde (A/AC.109/L.1016) y Santo Tomé y Príncipe (A/AC.109/L.1013), el Comité tomó nota con satisfacción de que desde su publicación esos territorios se habían independizado, y expresó la esperanza de que pronto pasaran a ser partes en la Convención.

23/ Documentos Oficiales de la Asamblea General, vigésimo noveno período de sesiones, Suplemento No. 18 (A/9618), pág. 68.

7. Angola

El Comité estudió el documento de trabajo del Comité Especial sobre Angola (A/AC.109/L.1014). El Comité expresa la esperanza de que, a pesar de las dificultades con que actualmente se enfrenta el territorio, los movimientos angolanos de liberación observen su acuerdo de construir la nación angolana "sobre bases justas y democráticas, eliminando en consecuencia todas las formas de discriminación étnica, racial y religiosa y cualquier otro tipo de discriminación".

8. Peticiones

a) Petición del Sr. Jean Bruck y del Sr. Otto Kersten

El Comité examinó la información contenida en la petición del Sr. Jean Bruck, Secretario General de la Confederación Mundial del Trabajo y del Sr. Otto Kersten, Secretario General de la Confederación Internacional de Organizaciones Sindicales relativa a Rhodesia del Sur (A/AC.109/PET.1253). El Comité condena al régimen ilegal por introducir el trabajo forzado en el territorio y se une a la solicitud de que se apliquen sanciones más estrictas contra Rhodesia.

b) Petición del Comité Ejecutivo del Frente Popular para la Liberación de Saquiel El-Hamra y Río de Oro, relativa al Sáhara Español

Luego de examinar la petición del Comité Ejecutivo del Frente Popular para la Liberación de Saquiel El-Hamra y Río de Oro, relativa al Sáhara Español (A/AC.109/PET.1254), el Comité solicita a la Potencia administradora, que es Estado parte en la Convención, que proporcione información detallada sobre la situación en el territorio. Mientras tanto, expresa la esperanza de que los derechos humanos fundamentales sean respetados en el territorio.

B. Territorios del Pacífico y del Océano Indico 24/

1. Brunéi

El Comité examinó el documento de trabajo relativo a Brunéi (A/AC.109/L.1021) pero no halló en él elementos nuevos respecto de los principios y objetivos de la Convención en relación con el territorio.

2. Nuevas Hébridas

1) El Comité examinó el documento de trabajo sobre las Nuevas Hébridas (A/AC.109/L.997).

2) A pesar de la preocupación que manifestó en sus informes a la Asamblea General en sus períodos de sesiones vigésimo octavo y vigésimo noveno en relación con el rápido aumento de las inversiones económicas extranjeras en detrimento de los intereses del pueblo del territorio, el Comité lamenta que no se le haya proporcionado la información adicional solicitada y confía en que se le suministrará en breve.

3. Islas Seychelles

1) El Comité examinó el documento de trabajo sobre las Islas Seychelles (A/AC.109/L.1010) y el tercer informe periódico del Reino Unido (CERD/C/R.70/Add.34 parte B) presentado de conformidad con el artículo 9 de la Convención.

24/ Texto aprobado en la 262a. sesión, el 18 de agosto de 1975. En relación con estos territorios, se presentaron al Comité los siguientes documentos:

Informe de la Autoridad Administradora sobre Papua Nueva Guinea correspondiente al período comprendido entre el 1.º de septiembre de 1974 y el 23 de mayo de 1975 (T/1765)

Informe de la Autoridad Administradora sobre el Territorio en Fideicomiso de las Islas del Pacífico correspondiente al año terminado el 30 de junio de 1974 (T/1762)

Reseña de la situación existente en Papua Nueva Guinea (T/L.1192 y Add.1)

Reseña de la situación existente en el Territorio en Fideicomiso de las Islas del Pacífico (T/L.1191 y Add.1 a 3)

A/9623/Add.5 (part V), cap. XII (Niue)

A/9623/Add.5 (part II), cap. XX (Islas Cocos (Keeling))

A/AC.109/L.995 (Islas Gilbert y Ellice, Isla Pitcairn e Islas Salomón)

A/AC.109/L.1010 (Islas Seychelles)

A/AC.109/L.997 (Nuevas Hébridas)

A/AC.109/L.998 (Islas Cocos (Keeling))

A/AC.109/L.1000 (Islas Tokelau)

A/AC.109/L.1008 (Samoa Americana)

A/AC.109/L.1021 (Brunéi)

A/AC.109/L.1015 (Timor)

A/AC.109/L.1022 (Guam)

A/AC.109/L.1024 (Territorio en Fideicomiso de las Islas del Pacífico).

2) Según el documento mencionado supra, en 1971 la población del Territorio se calculaba en 52.650 personas, compuesta en su mayoría de criollos (descendientes de los primeros colonos franceses, africanos y otros inmigrantes de origen diverso), indios, chinos y algunos europeos. A pesar del carácter multirracial de esa sociedad, el Comité no recibió información sobre las medidas adoptadas para la integración de los diferentes grupos raciales.

3) El Comité señaló que, según la Potencia administradora, la Immovable Property (Transfer Restriction) Amendment Order, 1973, no contiene ninguna disposición relativa a la discriminación racial.

4) El Comité señaló que se habían celebrado conversaciones relativas a la independencia del territorio en 1976.

4. Papua Nueva Guinea

Habiendo examinado el informe de la Autoridad Administradora (T/1765) y los documentos de trabajo del Consejo de Administración Fiduciaria (T/L.1192 y Add.1), el Comité expresó su satisfacción por las informaciones recibidas, según las cuales el territorio alcanzará la independencia el 16 de septiembre de 1975.

5. Timor

1) El Comité consideró el documento A/AC.109/L.1015.

2) El Comité expresó el anhelo de que, superando las actuales dificultades, la población de Timor ejerza plenamente su derecho a la libre determinación.

3) Aunque no se le proporcionó información sobre la composición demográfica, se conoce que en el Territorio viven diversos grupos étnicos. El Comité desearía por ello recibir información sobre la forma en que se mantiene la integración social,

4) El Comité manifestó asimismo la esperanza de recibir amplia información acerca del sistema educativo, pues observó que, como consecuencia del régimen portugués anterior, parece que todavía subsistirían ciertas diferencias en la educación impartida a los niños autóctonos, y que los libros de texto estaban en portugués, idioma que sólo habla el 10% de la población.

6. Territorio en fideicomiso de las Islas del Pacífico

1) El Comité examinó los documentos de trabajo del Comité Especial y del Consejo de Administración Fiduciaria relativos al Territorio en Fideicomiso de las Islas del Pacífico (A/AC.109/L.1024, T/L.1191 y Add.1 a 3), así como el informe de la Autoridad Administradora (T/1762).

2) El Comité tomó nota con interés de la nueva información sobre los resultados del censo de 1973, la aplicación de la nueva escala de sueldos para los funcionarios públicos del Territorio en Fideicomiso, la promulgación de la Ley sobre la Convención Constituyente, y las normas relativas a la inmigración.

3) El Comité tomó nota de que en 1975 se reunió una convención constituyente, encargada de redactar una Constitución para Micronesia. El Comité desearía recibir información sobre el resultado de la Convención y sobre cualquier disposición de la nueva Constitución, promulgada o en proyecto, que pudiera tener relación con la labor del Comité.

4) El Comité tomó nota de que la ley reconoce el derecho de petición y que la población ha ejercido ese derecho ante la Autoridad Administradora. El Comité celebraría que se le informara si dichas peticiones se referían de algún modo a denuncias de discriminación racial.

5) El Comité tomó nota de la decisión de la Autoridad Administradora en 1974 de permitir el traspaso de las tierras públicas a la autoridad de las asambleas legislativas de distrito para su distribución. El Comité agradecería que se le informara si la base de distribución se refiere de alguna manera a los propósitos y principios de la Convención.

6) Aunque observó con agrado que el informe presentado por la Autoridad Administradora era muy completo, el Comité llamó la atención sobre el hecho de que dicho informe no se hubiera preparado teniendo en cuenta la finalidad de la labor del Comité o como respuesta a la solicitud previa de información adicional hecha por el Comité. En consecuencia, el Comité no pudo examinar la aplicación de los principios de la Convención a las situaciones concretas sobre las que había pedido información en su último período de sesiones. Confía, pues, en que se le suministre dicha información tan pronto como sea posible.

7. Islas Gilbert y Ellice, Isla Pitcairn e Islas Salomón

Habiendo examinado el documento de trabajo sobre los territorios mencionados (A/AC.109/L.995), el Comité deploró que, a pesar de sus insistentes peticiones de información concreta en relación con la aplicación en el territorio de los principios y objetivos de la Convención, no se le hubiera suministrado información al respecto.

8. Samoa Americana

El Comité examinó el documento de trabajo sobre Samoa Americana (A/AC.109/L.1008), pero no halló en él información pertinente directamente relacionada con el cumplimiento de los principios y objetivos de la Convención.

C. Territorios del Caribe y del Atlántico, incluido Gibraltar 25/

1. Belize

- 1) El Comité examinó los informes del Comité Especial relativos a Belize (A/9023/Add.6 y A/9623/Add.6 (part II)).
- 2) Después de las elecciones de 1966, la United Black Association for Development (UBAD), grupo minoritario sin representación en el Parlamento, se opuso al programa presentado por el People's United Party (PUP) (que tenía 17 de los 18 escaños en la Cámara de Representantes), cuyo objetivo era dar expresión a la cultura indígena maya como fundamento de la identidad nacional.
- 3) El Comité desearía recibir información estadística sobre la composición étnica de la población de Belize, así como sobre los efectos de la afluencia de trabajadores migrantes en las relaciones sociales.
- 4) El Comité Especial hizo distribuir las cartas del Sr. Dennis Young, de 14 de febrero y 18 de marzo de 1973, como peticiones (A/AC.109/PET.1237 y Add.1). El peticionario se opone básicamente a la incorporación de Belize con Guatemala, ya que, a su juicio, el programa de mayanización va en contra de la población "negra" y su cultura.

25/ Texto aprobado en la 263a. sesión, el 18 de agosto de 1975. En relación con estos territorios, se presentaron al Comité los siguientes documentos:

A/9023/Add.4 (Gibraltar)
A/9023/Add.6 (Belize)
A/9023/Add.6 (Islas Vírgenes de los Estados Unidos)
A/9623/Add.6 (part I), cap. XXV (Islas Caimán)
A/9623/Add.6 (part I), cap. XIII (Bermudas)
A/9623/Add.6 (part I), cap. XXV (Islas Vírgenes Británicas)
A/9623/Add.6 (part II), cap. XXV (Islas Turcas y Caicos)
A/9623/Add.6 (part II), cap. XXIV (Islas Vírgenes de los Estados Unidos)
A/9623/Add.4 (part II), cap. XIII (Gibraltar)
A/9623/Add.6 (part II), cap. XXVI (Islas Malvinas (Falkland))
A/9623/Add.6 (part II), cap. XXVII (Belize)
A/9623/Add.6 (part II), cap. XXVIII (Antigua, Dominica, San Cristóbal-Nieves-Anguila, Santa Lucía y San Vicente)
A/9623/Add.4 (part I), cap. X (Santa Elena)
A/9623/Add.6 (part I), cap. XXV (Montserrat)
A/AC.109/L.994 (Bermudas)
A/AC.109/L.999 (Islas Vírgenes Británicas)
A/AC.109/L.1003 (Islas Turcas y Caicos)
A/AC.109/L.1005 (Islas Vírgenes de los Estados Unidos)
A/AC.109/L.1044 (Islas Malvinas (Falkland))
A/AC.109/L.1004 (Islas Caimán)
A/AC.109/L.1025 (Belize)
A/AC.109/L.1023 (Santa Elena)
A/AC.109/PET.1237 y Add.1 (Peticiones relativas a Belize)

2. Bermuda

- 1) El Comité tomó nota con interés de la información suministrada por la Potencia administradora sobre las actividades del Consejo de Relaciones Raciales (CERD/C/R.70/Add.34).
- 2) El Comité toma nota de la información contenida en los párrafos 61 a 63 del documento A/AC.109/L.994 relativa a las medidas previstas para capacitar a jóvenes bermudeños para ciertos empleos que actualmente ocupan no bermudeños.

3. Santa Elena

- 1) El Comité examinó el informe del Comité Especial (A/9623/Add.4 (part I)) y tomó nota del papel que desempeñan los intereses económicos extranjeros en la explotación del Territorio y, en particular, de las actividades de la South Atlantic Trading and Investment Company (SATIC). A este respecto, en 1974, el Gobierno del Reino Unido refutó las afirmaciones según las cuales en la compañía existían condiciones semejantes a las del apartheid; no se ha recibido nueva información al respecto.
- 2) La Potencia administradora ha informado de que no se han adoptado medidas encaminadas a la eliminación de la discriminación racial en relación con la compañía sudafricana Frank Robb and Associates. El Comité se opone firmemente a cualquier penetración económica de Sudáfrica en el territorio y querría que la Autoridad Administradora le suministrara la información necesaria sobre las medidas adicionales adoptadas a este respecto.

4. Gibraltar

- 1) El Comité acoge con satisfacción la amplia información que sobre Gibraltar ha proporcionado el Gobierno del Reino Unido en su tercer informe periódico (CERD/C/R.70/Add.34) y toma nota de la afirmación en el sentido de que la Trade Licensing Ordinance y la Immigration Control (Amendment) Ordinance, recientemente aprobadas, han eliminado en gran medida los motivos de queja de la comunidad india de Gibraltar.
- 2) En los informes del Comité Especial (A/9023/Add.4 y A/9623/Add.4, part II) no se hace referencia a la discriminación racial en relación con las condiciones de trabajo, la vivienda, la sanidad o la educación. Sin embargo, el Comité desea saber si los salarios y las condiciones de empleo establecidos por el Employers Joint Industrial Council (A/9023/Add.4), que tiene carácter oficial, se aplican también a los trabajadores migrantes, y desearía recibir información sobre el número de trabajadores migrantes efectivamente empleados en Gibraltar.
- 3) El Comité también desearía saber si existen distinciones en cuanto a sueldos y salarios en esferas específicas, aparte de los servicios públicos.

5. Islas Turcas y Caicos

1) Debido a los estrechos vínculos económicos entre Canadá y las Islas, su asociación con Canadá fue propuesta por un miembro de un partido de la oposición en el Parlamento canadiense, al parecer con el apoyo de una delegación de las Islas. Sin embargo, el 10 de abril de 1974 la propuesta fue rechazada en la Cámara de los Comunes canadiense por el Secretario de Estado de Relaciones Exteriores, quien subrayó que "no es en modo alguno evidente que la asociación sería de beneficio mutuo en comparación con las relaciones amistosas que existen en la actualidad", y que "la creación de una nueva relación ... podría interpretarse como neocolonial ..." (A/9623/Add.6 (part I)).

2) La Potencia administradora ha informado de que no hay muestras de que se hayan producido tensiones raciales en las Islas como consecuencia de los esfuerzos encaminados a desarrollar la industria turística. Como el Gobierno continúa vigilando muy de cerca la situación, se recibirían con satisfacción nuevos informes sobre su evolución.

6. Montserrat

1) El Comité tomó nota del contenido de los párrafos 5, 7 y 9 del informe del Comité Especial (A/9623/Add.6 (part I), capítulo XXV) sobre las posibles consecuencias de la situación racial en el territorio. Según se informa, el Ministro Principal, P.A. Bramble, ha exhortado al electorado a que le otorgue un mandato "para proscribir el racismo", y ha dicho que las actividades de los racistas han creado "una situación de incertidumbre que no sólo puede detener los esfuerzos de desarrollo sino que también puede hacer que se vuelva sumamente difícil, si no imposible, que este país logre los adelantos económicos que son tan esenciales para la supervivencia de nuestro pueblo".

2) El Comité desearía recibir información general y concreta sobre la situación actual en relación con las disposiciones de la Convención.

7. Islas Vírgenes de los Estados Unidos

1) El Comité toma nota con preocupación de las conclusiones del Comité Especial en el sentido de que las relaciones raciales en el territorio son insatisfactorias.

2) También ha tomado nota de la declaración del Fiscal General de las Islas Vírgenes de los Estados Unidos según la cual "... el actual clamor por la independencia no es occidental. Es el camino natural para quienes están convencidos de que los objetivos de los blancos son incompatibles con los objetivos de los nativos, y de que no habrá forma de conciliarlos bajo el presente sistema". El Comité recibiría con agrado más información concreta del Comité Especial al respecto.

3) Según el informe del Comité Especial (A/9023/Add.6), el Tribunal de Distrito de las Islas Vírgenes de los Estados Unidos había decidido que todos los niños que no gozaran de la ciudadanía pero que vivieran en el territorio tenían derecho a asistir a las escuelas públicas. Como consecuencia de esta

decisión (según los documentos A/9623/Add.6 y A/AC.109/L.1005) la matrícula total en las escuelas públicas aumentó de 20.790 en 1972/73 a 25.248 en 1974/75. En 1972/73, la tercera parte de los estudiantes no tenían la ciudadanía y en 1973/74 se esperaba una afluencia mayor de lo normal de esos estudiantes (A/AC.109/L.1005). En 1973/74, el ingreso de dichos estudiantes provocó un incremento de más del 100% de la población escolar en comparación con 1968. Además, cerca de 5.000 niños estudiaban en escuelas no públicas (privadas y parroquiales). La existencia de más de 30.000 escolares en un país con una población de unos 100.000 habitantes constituye un elevado porcentaje. Sin embargo, como los informes no indican el número total de niños en edad escolar, es difícil obtener de esos documentos el porcentaje exacto de niños extranjeros que ingresaron en las escuelas.

4) Debido al aumento del desempleo y a la existencia de una considerable población extranjera en las Islas Vírgenes (casi la mitad de las 31.579 personas que constituyen la fuerza de trabajo), han aumentado las restricciones a la inmigración. En 1974 fueron devueltos a sus países 4.135 inmigrantes ilegales, la mayoría de los cuales procedían de los países del Caribe pertenecientes al Commonwealth.

5) Aunque el Alien Interest Movement hizo un llamamiento a todos los extranjeros en situación ilegal para que abandonaran el país voluntariamente, su presidente dijo el 4 de febrero de 1974 "que los naturales de las Islas Vírgenes nunca habían aceptado plenamente a los extranjeros", y que, "conceptos erróneos profundamente arraigados" habían provocado esta situación. Afirmó que "privarnos de los servicios que ayudamos a proporcionar significaría negarnos el derecho a la igualdad de tratamiento que está garantizado en la Bill of Rights y en la /Revised/ Organic Act". Por lo tanto, instó a "todos los que viven en las Islas Vírgenes a unirse y reconstruir una comunidad viable" (A/9623/Add.6). El Comité recibiría con agrado seguridades de que estas medidas no comportan discriminación racial contra los trabajadores extranjeros.

Observaciones generales

1) En general, el proceso de descolonización en la zona del Caribe y el Atlántico ha progresado lentamente por cuanto sólo han obtenido la independencia las Bahamas (el 10 de julio de 1973) y Granada (el 7 de febrero de 1974). Sin embargo, está pendiente la celebración de negociaciones para la descolonización de Belize (A/AC.109/L.1025, de 4 de mayo de 1975) y otras islas.

2) A juicio del Comité, todos los territorios de la zona se enfrentan, por diversas razones, con dificultades económicas y sociales. Es indudable que los intereses extranjeros desempeñan un papel destacado en el desarrollo de estos territorios, y han surgido problemas como consecuencia de las medidas políticas y los procedimientos adoptados por las autoridades competentes en relación con la emigración y la inmigración. El Comité opina que con una mayor cooperación regional se podría progresar en el logro de los objetivos de la Convención en la zona, así como acelerar el proceso de descolonización.

3) El Comité señala que la población de la mayoría de los territorios consiste en pueblos de distinto origen, factor que puede provocar tensiones raciales.

VI. REUNIONES DEL COMITE EN 1976 Y 1977

198. El Comité examinó este tema del programa en su 246a. sesión (11.º período de sesiones), el 18 de abril de 1975, y en su 261a. sesión (12.º período de sesiones), el 15 de agosto de 1975.

199. Cabe recordar que en su décimo período de sesiones (agosto de 1974) el Comité ya había acordado que su 13.º período de sesiones se celebrara en Nueva York del 29 de marzo al 16 de abril de 1976 26/.

11.º período de sesiones

200. En su 246a. sesión, el 18 de abril de 1975, el Comité decidió que su 14.º período de sesiones se celebrara también en Nueva York del 2 al 20 de agosto de 1976.

201. Por lo que se refiere a las reuniones del Comité en 1977, el Secretario General informó al Comité en su 11.º período de sesiones que sus 15.º y 16.º períodos de sesiones podrían celebrarse en Nueva York sin ninguna consecuencia financiera adicional del 28 de marzo al 15 de abril y del 1.º al 19 de agosto de 1977, respectivamente. El Comité acordó celebrar sus 15.º y 16.º períodos de sesiones en 1977 durante el período propuesto por el Secretario General. Sin embargo, aplazó el examen del lugar de celebración de estos dos períodos de sesiones para su 12.º período de sesiones, cuando el Secretario General informará al Comité sobre la posibilidad de celebrar en Ginebra una de estas reuniones, o ambas.

202. Habiendo escuchado las declaraciones del Sr. Dayal y del Sr. Sayegh, el Comité manifestó la esperanza de que los Estados partes en la Convención desearan invitar al Comité a celebrar en su país uno de los períodos de sesiones de 1977 en relación con sus actividades comprendidas en el programa para el Decenio de la Lucha contra el Racismo y la Discriminación Racial.

12.º período de sesiones

203. En su 261a. sesión (12.º período de sesiones), el 15 de agosto de 1975, el Comité fue informado de las consecuencias administrativas y financieras de la celebración de los períodos de sesiones 15.º y 16.º del Comité en 1977, en Ginebra o en Nueva York.

204. El Comité decidió que sus 15.º y 16.º períodos de sesiones se celebraran en la Sede de las Naciones Unidas en Nueva York en las fechas que se mencionan en el párrafo 201 supra, salvo reconsideración, el año próximo, del lugar de celebración de estos períodos de sesiones, si fuera necesario.

26/ Véase Documentos Oficiales de la Asamblea General, vigésimo noveno período de sesiones, Suplemento No. 18 (A/9618, cap. VI, párr. 280.

VII. DECISIONES APROBADAS POR EL COMITE EN SUS
11.º Y 12.º PERIODOS DE SESIONES

A. 11.º período de sesiones

1 (XI). Participación en el Programa para el Decenio de la Lucha contra el Racismo y la Discriminación Racial 27/

El Comité para la Eliminación de la Discriminación Racial,

Habiendo examinado en su noveno, décimo y 11.º períodos de sesiones el Programa para el Decenio de la Lucha contra el Racismo y la Discriminación Racial, contenido en la resolución 3057 (XXVIII) de la Asamblea General del 2 de noviembre de 1973,

Recordando la decisión 2 (X), aprobada por el Comité el 28 de agosto de 1974,

Habiendo examinado, asimismo, en su 11.º período de sesiones, las resoluciones 3223 (XXIX) y 3266 (XXIX) de la Asamblea General, de 6 de noviembre de 1974 y 10 de diciembre de 1974, respectivamente,

Plenamente consciente de su posición singular dentro del sistema de las Naciones Unidas con respecto al problema de la eliminación de todas las formas de discriminación racial, y manifestando profundo interés y preocupación por la feliz consecución de las metas y objetivos del Decenio,

Tomando nota con satisfacción de que la Asamblea General, en el párrafo 10 de su resolución 3223 (XXIX), elogió la participación activa del Comité para la Eliminación de la Discriminación Racial en la aplicación del Programa para el Decenio dentro de su competencia con arreglo a la Convención Internacional sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación Racial,

Tomando nota de que, en el párrafo 6 de su resolución 3266 (XXIX), la Asamblea General hizo suya la decisión del Comité de aportar su contribución, en el contexto del Decenio de la Lucha contra el Racismo y la Discriminación Racial y del Programa para el Decenio, a la eliminación total e incondicional del racismo y la discriminación racial, de conformidad con las atribuciones que le confirió la Convención Internacional sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación Racial, especialmente concentrando sus esfuerzos, de conformidad con los artículos 3, 9 y 15 de la Convención, en la preparación de recomendaciones respecto de las manifestaciones más flagrantes y en gran escala de discriminación racial, particularmente en las zonas que todavía se encuentran bajo la dominación de regímenes racistas y coloniales y la ocupación extranjera,

1. Afirma su determinación de intensificar sus esfuerzos encaminados a cumplir las obligaciones que le incumben en virtud de la Convención, sobre la base de la permanente cooperación de los Estados partes, contribuyendo así al logro de las metas y objetivos del Decenio;

27/ Aprobada en la 231a. sesión, el 4 de abril de 1975 (véase cap. III, párrs. 41 a 43).

2. Manifiesta estar dispuesto, a fin de contribuir a la aplicación del Programa para el Decenio, por ejemplo:

a) A tomar parte en la preparación de la conferencia mundial sobre la lucha contra la discriminación racial, prevista en el párrafo 13 a) del Programa;

b) A participar en esa conferencia;

c) A tomar parte en la preparación de los seminarios en los planos internacional y regional que se mencionan en el párrafo 13 b) del Programa, y a participar en ellos;

d) A participar en los seminarios de estudiantes previstos en el párrafo 15 b) del Programa, especialmente en las cuestiones relativas a la Convención Internacional sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación Racial;

e) A colaborar en la preparación de los estudios experimentales contemplados en virtud del párrafo 15 d) del Programa;

3. Recomienda que:

a) Se incluya en el programa de la Conferencia Mundial sobre la Lucha contra la Discriminación Racial uno o varios temas acerca de la Convención Internacional sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación Racial y los trabajos del Comité para la Eliminación de la Discriminación Racial en virtud de esa Convención;

b) Se presenten a esa conferencia mundial monografías sobre la labor del Comité en materia de la aplicación de las disposiciones de la Convención;

c) Se dedique un seminario a las disposiciones de la Convención y su aplicación;

d) Se incluya en el cuestionario que se ha encargado al Secretario General que prepare, en virtud del párrafo 18 e) del Programa, una pregunta respecto de las consideraciones que han impedido a los Estados Miembros que no son partes en la Convención ratificar la Convención o adherirse a ella:

e) Se transmitan al Comité copias de los informes bienales que se reciben de los Estados Miembros en virtud del párrafo antedicho;

4. Expresa la opinión de que, a fin de dar más impulso a las actividades correspondientes al Programa para el Decenio, el Secretario General podría considerar el establecimiento de un grupo de trabajo especial dentro de la División de Derechos Humanos de la Secretaría;

5. Pide al Secretario General que, de conformidad con los incisos f) e i) del párrafo 18 del Programa, transmita el texto de esta decisión al Consejo Económico y Social para que lo examine en su 58^o período de sesiones, y que, en su caso, informe al Comité, en su próximo período de sesiones, de las medidas que respecto de la presente decisión haya tomado el Consejo Económico y Social.

El Comité para la Eliminación de la Discriminación Racial,

Recordando su recomendación general III, en la que expresaba la opinión de que las medidas adoptadas en el plano nacional para dar vigencia a las disposiciones de la Convención están interrelacionadas con las medidas tomadas en el plano internacional para fomentar el respeto a los principios de la Convención,

Tomando nota de que el Programa para el Decenio de la Lucha contra el Racismo y la Discriminación Racial, contenido en la resolución 3057 (XXVIII) de la Asamblea General de 2 de noviembre de 1973, declara, en el párrafo 8, que una de las metas fundamentales del Decenio es resistir toda política y práctica conducentes al fortalecimiento de los regímenes racistas y que contribuyan al mantenimiento del racismo y la discriminación racial, y proclama, en el párrafo 13 e) y g), que debería denegarse a los regímenes racistas todo apoyo o asistencia que les permita perpetuar las políticas o las prácticas racistas, incluidas las políticas encaminadas a despojar a la población indígena de sus derechos inalienables y que deben estudiarse medios y arbitrios para lograr el aislamiento internacional y regional de los regímenes racistas.

Tomando nota, asimismo, de que, en el párrafo 7 de su resolución 3223 (XXIX) del 6 de noviembre de 1974, la Asamblea General instó a todos los Estados a que, entre otras cosas, aseguraran la cesación inmediata de todas las medidas, políticas y actividades - de orden militar, político, económico y de otra naturaleza - que permiten que los regímenes racistas del Africa meridional continúen la represión de los pueblos africanos,

1. Declara que toda política, práctica o vinculación que tenga por efecto apoyar, afianzar o alentar a los regímenes racistas es irreconciliable con las obligaciones con la causa de la eliminación de la discriminación racial inherentes a la adhesión a la Convención Internacional sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación Racial o su ratificación, e incompatible con los compromisos concretos contraídos por los Estados partes de condenar la segregación racial y el apartheid, de conformidad con el artículo 3 de la Convención, y con su resolución de edificar una comunidad internacional libre de todas las formas de segregación y discriminación raciales, expresada en el preámbulo de la Convención;

2. Insta a los Estados partes interesados a que, lo antes posible, dentro del Decenio de la Lucha contra el Racismo y la Discriminación Racial, reconsideren toda relación que puedan tener con los regímenes racistas, a la luz de sus propias obligaciones con la causa de la eliminación de la discriminación racial;

3. Invita a todos los Estados partes a incluir, en los informes que preparan de conformidad con el párrafo 1 del artículo 9 de la Convención, información acerca del estado de sus relaciones con los regímenes racistas del Africa meridional;

28/ Aprobada en la 233a. sesión, el 7 de abril de 1975 (véase cap. III, párrs. 41 a 43).

4. Observa que la decisión de principio adoptada por la Asamblea General, en su vigésimo noveno período de sesiones, de negarse a permitir que la delegación de Sudáfrica participara en sus trabajos, fue la vigorosa expresión del principio de que un régimen que hace de la segregación racial y de la discriminación racial la piedra angular de su política nacional queda fuera del ámbito de la comunidad de las naciones.

3 (XI). Información suministrada por Chipre referente a la situación en Chipre 29/

El Comité para la Eliminación de la Discriminación Racial,

Habiendo examinado la información proporcionada por el representante de Chipre en la 234a. sesión del Comité el 8 de abril de 1975 en el sentido de que se impide al Gobierno de Chipre cumplir las obligaciones que le corresponden en virtud de la Convención en una parte de su territorio y de que en ella se está practicando la discriminación racial,

1. Expresa su inquietud por la información presentada al Comité y su esperanza de que la situación en Chipre se normalice rápidamente;

2. Invita al Gobierno de Chipre a que le proporcione la información adicional de que pueda disponer para que el Comité la examine en su 12^o período de sesiones.

4 (XI). Trigésimo aniversario de la derrota del nazismo y del fascismo 30/

El Comité para la Eliminación de la Discriminación Racial,

Recordando que en el año 1975 se cumple el trigésimo aniversario de la derrota del nazismo y del fascismo, ideologías basadas esencialmente en el racismo y la discriminación racial,

Teniendo en cuenta que esa lucha costó la vida de millones de seres humanos y causó sufrimientos indecibles a la humanidad,

Consciente de que en algunas partes del mundo persisten el racismo y vestigios de esas ideologías,

Convencido de que deben adoptarse todas las medidas necesarias para extirpar esas políticas e ideologías como una contribución positiva a las metas y objetivos del Decenio de la Lucha contra el Racismo y la Discriminación Racial,

1. Tributa un homenaje a la memoria de los millones de seres humanos que perecieron en la segunda guerra mundial como víctimas de las ideologías racistas del nazismo y del fascismo;

29/ Aprobada en la 235a. sesión, el 8 de abril de 1975 (véase cap. IV, sec. E, párr. 88).

30/ Aprobada en la 242a. sesión, el 14 de abril de 1975 (véase cap. III, párrs. 41 a 43).

2. Condena el racismo y todos los vestigios del nazismo y del fascismo que persisten en el mundo, en cualquier forma que puedan existir;

3. Recuerda a los Estados partes interesados sus obligaciones en virtud de la Convención de adoptar las oportunas medidas legislativas, judiciales, administrativas o de otra índole a fin de poner término, donde existan, al racismo, y a los vestigios o manifestaciones de tales ideologías.

B. 12.º período de sesiones

1 (XII). Información proporcionada por Chipre en relación con la situación en Chipre 31/

El Comité para la Eliminación de la Discriminación Racial,

Tomando nota del informe suplementario presentado por el Gobierno de Chipre en respuesta a la decisión 3 (XI) del Comité del 8 de abril de 1975, y de la información adicional proporcionada por el representante de Chipre en la 251a. sesión del Comité, el 6 de agosto de 1975,

Tomando nota también de los progresos efectuados hasta la fecha en las tres series de conversaciones mantenidas entre las comunidades directamente interesadas, y de la decisión de celebrar una cuarta serie de conversaciones en el futuro próximo,

1. Expresa una vez más la preocupación que manifestó en su decisión 3 (XI);

2. Expresa firmemente la esperanza de que se continúe progresando como hasta la fecha, de que se apliquen las resoluciones aprobadas unánimemente por los órganos competentes de las Naciones Unidas, y de que se lleve a cabo una rápida normalización de la situación en Chipre, de forma que a todos los refugiados y a los demás seres humanos de Chipre que sufren privaciones por su origen racial o étnico se les permita gozar plenamente de sus derechos humanos fundamentales sin discriminación.

2 (XII). Declaración hecha por el Comité para la Eliminación de la Discriminación Racial durante su examen del tema relativo al Decenio de la Lucha contra el Racismo y la Discriminación Racial 32/

1. El Comité ha tomado nota de la resolución 1938 A (LVIII) del Consejo Económico y Social del 6 de mayo de 1975, que fue señalada a su atención por el Secretario General de conformidad con la solicitud hecha por el Comité en el párrafo 5 de su decisión 1 (XI) del 4 de abril de 1975, y ha examinado dicha resolución.

31/ Aprobada en la 251a. sesión, el 6 de agosto de 1975 (véase cap. IV, sec. B, párr. 90).

32/ Aprobada en la 260a. sesión, el 15 de agosto de 1975 (véase cap. III, párrs. 62 y 63).

2. El Comité ha tomado nota con reconocimiento, en particular, de los párrafos 3 f), 4, 7 y 8 de la parte dispositiva del proyecto de resolución que el Consejo Económico y Social, en el párrafo 5 de su resolución, ha recomendado que la Asamblea General apruebe en su trigésimo período de sesiones. No obstante, con referencia al párrafo 4 de la parte dispositiva de dicho proyecto de resolución, el Comité desea declarar que el año pasado se presentaron menos de la mitad de los informes que debían presentarse en virtud del artículo 9 de la Convención y que menos de la décima parte se presentaron dentro de los plazos establecidos en dicho artículo, a pesar de los numerosos recordatorios enviados por el Secretario General, en nombre del Comité, a los Estados partes interesados. En consecuencia, el Comité expresa la esperanza de que el texto del párrafo 4 del proyecto de resolución se modifique de manera tal que se tenga en cuenta la información detallada contenida en el informe anual del Comité a la Asamblea General 33/, que es, entre otras cosas, una de las fuentes principales de información sobre la situación en lo que respecta al cumplimiento por los Estados partes de sus obligaciones en virtud del artículo 9 de la Convención. A juicio del Comité, las palabras "a que sigan" del párrafo 4 de la parte dispositiva del proyecto de resolución presuponen la plena observancia por los Estados partes de sus obligaciones en virtud de los artículos pertinentes de la Convención, situación que, lamentablemente, no ha prevalecido hasta ahora en lo que se refiere al artículo 9. A este respecto, el Comité observa que la Asamblea General ha evitado acertadamente basar su llamamiento a la plena observancia, en los párrafos 5 y 9 de la resolución 3266 (XXIX) de 10 de diciembre de 1974, en el supuesto de que tal observancia se había logrado en el pasado.

3. El Comité pide al Secretario General que señale la presente declaración a la atención de la Tercera Comisión de la Asamblea General cuando ésta examine el proyecto de resolución propuesto por el Consejo Económico y Social en su resolución 1938 (LVIII).

3 (XII). Asistencia de un miembro del Comité a las sesiones de la Tercera Comisión 34/

El Comité para la Eliminación de la Discriminación Racial recomienda a la Asamblea General que se invite a un miembro designado por el Comité a participar en las sesiones de la Tercera Comisión de la Asamblea General en las que se examine el informe del Comité para la Eliminación de la Discriminación Racial.

33/ Véase cap. IV, sec. A, y el anexo III.

34/ Aprobada en la 261a. sesión, el 15 de agosto de 1975 (véase cap. II, sec. C, párr. 32).

ANEXO I

Estados partes en la Convención Internacional sobre
la Eliminación de todas las Formas de Discriminación
Racial al 22 de agosto de 1975

<u>Estado</u>	<u>Fecha en que se recibió el instrumento de ratificación o adhesión</u>	<u>Entrada en vigor</u>
Alemania, República Federal de	16 de mayo de 1969	15 de junio de 1969
Alto Volta	18 de julio de 1974 <u>a/</u>	17 de agosto de 1974
Argelia	14 de febrero de 1972	15 de marzo de 1972
Argentina	2 de octubre de 1968	4 de enero de 1969
Austria	9 de mayo de 1972	8 de junio de 1972
Bahamas	5 de agosto de 1975 <u>b/</u>	5 de agosto de 1975 <u>b/</u>
Barbados	8 de noviembre de 1972 <u>a/</u>	8 de diciembre de 1972
Bolivia	22 de septiembre de 1970	22 de octubre de 1970
Botswana	20 de febrero de 1974 <u>a/</u>	22 de marzo de 1974
Brasil	27 de marzo de 1968	4 de enero de 1969
Bulgaria	8 de agosto de 1966	4 de enero de 1969
Canadá	14 de octubre de 1970	13 de noviembre de 1970
Costa de Marfil	4 de enero de 1973 <u>a/</u>	3 de febrero de 1973
Costa Rica	16 de enero de 1967	4 de enero de 1969
Cuba	15 de febrero de 1972	16 de marzo de 1972
Checoslovaquia	29 de diciembre de 1966	4 de enero de 1969
Chile	20 de octubre de 1971	19 de noviembre de 1971
Chipre	21 de abril de 1967	4 de enero de 1969
Dinamarca	9 de diciembre de 1971	8 de enero de 1972
Ecuador	22 de septiembre de 1966 <u>a/</u>	4 de enero de 1969
Egipto	19 de mayo de 1967	4 de enero de 1969
Emiratos Arabes Unidos	20 de junio de 1974 <u>a/</u>	20 de julio de 1974
España	13 de septiembre de 1968 <u>a/</u>	4 de enero de 1969
Fiji	11 de enero de 1973 <u>b/</u>	11 de enero de 1973 <u>b/</u>
Filipinas	15 de septiembre de 1967	4 de enero de 1969
Finlandia	14 de julio de 1970	13 de agosto de 1970
Francia	28 de julio de 1971 <u>a/</u>	27 de agosto de 1971
Ghana	8 de septiembre de 1966	4 de enero de 1969
Grecia	18 de junio de 1970	18 de julio de 1970
Haití	19 de diciembre de 1972	18 de enero de 1973
Hungría	4 de mayo de 1967	4 de enero de 1969
India	3 de diciembre de 1968	4 de enero de 1969
Irán	29 de agosto de 1968	4 de enero de 1969
Iraq	14 de enero de 1970	13 de febrero de 1970
Islandia	13 de marzo de 1967	4 de enero de 1969

<u>Estado</u>	<u>Fecha en que se recibió el instrumento de ratificación o adhesión</u>	<u>Entrada en vigor</u>
Jamaica	4 de junio de 1971	4 de julio de 1971
Jordania	30 de mayo de 1974 a/	29 de junio de 1974
Kuwait	15 de octubre de 1968 a/	4 de enero de 1969
Laos	22 de febrero de 1974 a/	24 de marzo de 1974
Lesotho	4 de noviembre de 1971 a/	4 de diciembre de 1971
Líbano	12 de noviembre de 1971 a/	12 de noviembre de 1971
Madagascar	7 de febrero de 1969	9 de marzo de 1969
Malí	16 de julio de 1974 a/	15 de agosto de 1974
Malta	27 de mayo de 1971	26 de junio de 1971
Marruecos	18 de diciembre de 1970	17 de enero de 1971
Mauricio	30 de mayo de 1972 a/	29 de junio de 1972
México	20 de febrero de 1975	22 de marzo de 1975
Mongolia	6 de agosto de 1969	5 de septiembre de 1969
Nepal	30 de enero de 1971 a/	1.º de marzo de 1971
Níger	27 de abril de 1967	4 de enero de 1969
Nigeria	16 de octubre de 1967 a/	4 de enero de 1969
Noruega	6 de agosto de 1970	5 de septiembre de 1970
Nueva Zelandia	22 de noviembre de 1972	22 de diciembre de 1972
Países Bajos	10 de diciembre de 1971	9 de enero de 1972
Pakistán	21 de septiembre de 1966	4 de enero de 1969
Panamá	16 de agosto de 1967	4 de enero de 1969
Perú	29 de septiembre de 1971	29 de octubre de 1971
Polonia	5 de diciembre de 1968	4 de enero de 1969
Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte	7 de marzo de 1969	6 de abril de 1969
República Árabe Libia	3 de julio de 1968 a/	4 de enero de 1969
República Árabe Siria	21 de abril de 1969 a/	21 de mayo de 1969
República Centroafricana	16 de marzo de 1971	15 de abril de 1971
República Democrática Alemana	27 de marzo de 1973 a/	26 de abril de 1973
República Socialista Soviética de Bielorrusia	8 de abril de 1969	8 de mayo de 1969
República Socialista Soviética de Ucrania	7 de marzo de 1969	6 de abril de 1969
República Unida del Camerún	24 de junio de 1971	24 de julio de 1971
República Unida de Tanzania	27 de octubre de 1972 a/	26 de noviembre de 1972
Rumania	15 de septiembre de 1970 a/	15 de octubre de 1970
Rwanda	16 de abril de 1975 a/	16 de mayo de 1975
Santa Sede	1.º de mayo de 1969	1.º de junio de 1969
Senegal	19 de abril de 1972	19 de mayo de 1972

<u>Estado</u>	<u>Fecha en que se recibió el instrumento de ratificación o adhesión</u>	<u>Entrada en vigor</u>
Sierra Leona	2 de agosto de 1967	4 de enero de 1969
Suecia	6 de diciembre de 1971	5 de enero de 1972
Swazilandia	7 de abril de 1969 a/	7 de mayo de 1969
Togo	10 de septiembre de 1972 a/	10 de octubre de 1972
Tonga	16 de febrero de 1972 a/	17 de marzo de 1972
Trinidad y Tabago	4 de octubre de 1973	3 de noviembre de 1973
Túnez	13 de enero de 1967	4 de enero de 1969
Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas	4 de febrero de 1969	6 de marzo de 1969
Uruguay	30 de agosto de 1968	4 de enero de 1969
Venezuela	10 de octubre de 1967	4 de enero de 1969
Yemen Democrático	18 de octubre de 1972 a/	17 de noviembre de 1972
Yugoslavia	2 de octubre de 1967	4 de enero de 1969
Zambia	4 de febrero de 1972	5 de marzo de 1972

a/ Adhesión.

b/ Fecha de recibo de la notificación de sucesión.

ANEXO II

Composición del Comité

<u>Nombre del miembro</u>	<u>Nacionalidad</u>
Sr. Mahmoud ABOUL-NASR	Egipto
Sr. Marc ANCEL*	Francia
Sr. Naste Dimo ČALOVSKI*	Yugoslavia
Sr. Rajeshwar DAYAL*	India
Sr. Samiulla Khan DEHLAVI*	Pakistán
Sr. Adedokun A. HAASTRUP	Nigeria
Sr. José D. INGLES	Filipinas
Sr. Paul Joan George KAPTEYN	Países Bajos
Sr. George O. LAMPTEY	Ghana
Sr. Ronald St. John MACDONALD*	Canadá
Sr. Gonzalo ORTIZ MARTIN*	Costa Rica
Sr. Karl Josef PARTSCH	Alemania, República Federal de
Sr. Vasily S. SAFRONCHUK*	Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas
Sr. Fayez A. SAYEGH	Kuwait
Sr. Sebastián SOLER*	Argentina
Sr. Ján TOMKO*	Checoslovaquia
Sr. Luis VALENCIA RODRIGUEZ	Ecuador
Sra. Halima Embarek WARZAZI	Marruecos

* El mandato expira el 19 de enero de 1976.

ANEXO III

Presentación de informes e información adicional por los Estados partes, de conformidad con el artículo 9 de la Convención, durante el año que se examina

(30 de agosto de 1974 a 22 de agosto de 1975)

A. Informes iniciales

<u>Estado parte</u>	<u>Plazo de presentación</u>	<u>Fecha de presentación</u>	<u>Fecha de la nota o notas recordatorias (si corresponde)</u>
Alto Volta	18 de agosto de 1975	Aún no recibido	
Botswana	22 de marzo de 1975	1. ^o de agosto de 1975	1) 18 de abril de 1975
Emiratos Arabes Unidos <u>a/</u>	21 de julio de 1975	Aún no recibido	
Jordania <u>a/</u>	30 de junio de 1975	Aún no recibido	
Laos <u>a/</u>	24 de marzo de 1975	Aún no recibido	1) 18 de abril de 1975
Lesotho <u>a/</u>	4 de diciembre de 1972	Aún no recibido	1) 15 de mayo de 1973 2) 7 de septiembre de 1973 3) 25 de abril de 1974 4) 20 de septiembre de 1974 5) 20 de mayo de 1975
Líbano	12 de diciembre de 1972	30 de julio de 1975	
Malí	15 de agosto de 1975	30 de diciembre de 1974	
República Centroafricana <u>a/</u>	14 de abril de 1972	Aún no recibido	1) 26 de septiembre de 1972 2) 15 de mayo de 1973 3) 7 de septiembre de 1973 4) 25 de abril de 1974 5) 20 de septiembre de 1974 6) 20 de mayo de 1975

a/ Para los recordatorios que el Comité, en su 12.^o período de sesiones, decidió enviar a los Estados partes, véase capítulo IV, sección A, párrafo 71 supra.

<u>Estado parte</u>	<u>Plazo de presentación</u>	<u>Fecha de presentación</u>	<u>Fecha de la nota o notas recordatorias (si corresponde)</u>
República Unida de Tanzania <u>a/</u>	26 de noviembre de 1973	Aún no recibido	1) 30 de abril de 1974 2) 20 de septiembre de 1974 3) 20 de mayo de 1975
Senegal	18 de mayo de 1973	23 de abril de 1975	1) 7 de septiembre de 1973 2) 25 de abril de 1974 3) 20 de septiembre de 1974
Togo <u>a/</u>	1.º de octubre de 1973	Aún no recibido	1) 30 de abril de 1974 2) 20 de septiembre de 1974 3) 20 de mayo de 1975
Trinidad y Tabago	4 de noviembre de 1974	28 de julio de 1975	1) 18 de abril de 1975
Zambia	5 de marzo de 1975	11 de marzo de 1975	1) 15 de mayo de 1973 2) 7 de septiembre de 1973 3) 25 de abril de 1974 4) 20 de septiembre de 1974

B. Segundos informes periódicos

Argelia <u>a/</u>	15 de marzo de 1975	Aún no recibido	1) 18 de abril de 1975
Austria	8 de junio de 1975	12 de agosto de 1975	
Cuba	16 de marzo de 1975	21 de mayo de 1975	
Chile	20 de noviembre de 1974	16 de julio de 1975	1) 18 de abril de 1975
Dinamarca	8 de enero de 1975	8 de enero de 1975	
Francia <u>a/</u>	28 de agosto de 1974	Aún no recibido	1) 18 de abril de 1975
Jamaica <u>a/</u>	5 de julio de 1974	Aún no recibido	1) 20 de septiembre de 1974 2) 20 de mayo de 1975
Lesotho <u>a/</u>	4 de diciembre de 1974	Aún no recibido	

<u>Estado parte</u>	<u>Plazo de presentación</u>	<u>Fecha de presentación</u>	<u>Fecha de la nota o notas recordatorias (si corresponde)</u>
Líbano <u>a/</u>	12 de diciembre de 1974	Aún no recibido	
Malta <u>a/</u>	26 de junio de 1974	Aún no recibido	1) 20 de septiembre de 1974 2) 20 de mayo de 1975
Mauricio <u>a/</u>	29 de junio de 1975	Aún no recibido	
Países Bajos	9 de enero de 1975	18 de marzo de 1975	
Perú <u>a/</u>	30 de octubre de 1974	Aún no recibido	1) 20 de mayo de 1975
República Centroafricana <u>a/</u>	14 de abril de 1974	Aún no recibido	
República Unida del Camerún	24 de julio de 1974	11 de julio de 1975	1) 18 de octubre de 1974 2) 20 de mayo de 1975
Senegal <u>a/</u>	18 de mayo de 1975	Aún no recibido	
Suecia	5 de enero de 1975	2 de enero de 1975	
Tonga <u>a/</u>	17 de marzo de 1975	Aún no recibido	1) 20 de mayo de 1975
Zambia <u>a/</u>	5 de marzo de 1975	Aún no recibido	1) 20 de mayo de 1975

C. Terceros informes periódicos

Checoslovaquia	5 de enero de 1974	21 de octubre de 1974	1) 25 de abril de 1974 2) 20 de septiembre de 1974
Finlandia	16 de agosto de 1975	Aún no recibido	
Grecia	19 de julio de 1975	Aún no recibido	
India	5 de enero de 1974	22 de agosto de 1974	
Iraq	15 de febrero de 1975	Aún no recibido	1) 18 de abril de 1975
Mongolia	4 de septiembre de 1974	9 de abril de 1975	

<u>Estado parte</u>	<u>Plazo de presentación</u>	<u>Fecha de presentación</u>	<u>Fecha de la nota o notas recordatorias (si corresponde)</u>
Níger	5 de enero de 1974	23 de agosto de 1974	1) 25 de abril de 1974
Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte	5 de abril de 1974	21 de marzo de 1975	1) 25 de abril de 1974
República Árabe Libia	5 de enero de 1974	8 de octubre de 1974	1) 25 de abril de 1974 2) 20 de septiembre de 1974
Santa Sede	1.º de junio de 1974	3 de enero de 1975	1) 20 de septiembre de 1974
Túnez a/	5 de enero de 1974	Aún no recibido	1) 25 de abril de 1974 2) 20 de septiembre de 1974 3) 20 de mayo de 1975
Uruguay	5 de enero de 1974	4 de agosto de 1975	1) 25 de abril de 1974 2) 20 de septiembre de 1974 3) 20 de mayo de 1975
Venezuela	5 de enero de 1974	15 de julio de 1975	1) 25 de abril de 1974 2) 20 de septiembre de 1974 3) 20 de mayo de 1975
Yugoslavia	5 de enero de 1974	14 de agosto de 1974	1) 25 de abril de 1974

D. Información adicional solicitada por el Comité

<u>Estados partes a los que se solicitó nueva información</u>	<u>Pedida por el Comité en su</u>	<u>Fecha de presentación de la nueva información solicitada</u>
Tonga <u>a/</u>	Noveno período de sesiones	Aún no recibida
Bolivia	Décimo período de sesiones	12 de diciembre de 1974
Haití	Décimo período de sesiones	24 de abril de 1975
Perú <u>a/</u>	Décimo período de sesiones	Aún no recibida
Sierra Leona <u>a/</u>	Décimo período de sesiones	Aún no recibida
Chipre	11. ^o período de sesiones	30 de junio de 1975

ANEXO IV

Examen por el Comité en sus 11.º y 12.º periodos de sesiones de
los informes y la información presentados por los Estados partes
de conformidad con el artículo 9 de la Convención

Estado parte	Tipo de informe				Información sobre el artículo 4 en respuesta a la decisión 3 (VII)	Sesión(es) en la(s) que se examinó	Fecha de la(s) sesión(es)
	Inicial	Segundo	Tercero	Suplementario			
Argentina			X			232-233	7 abril 1975
Bolivia		X		X		233	7 abril 1975
Chipre			X			234-235	8 abril 1975
India			X			235	8 abril 1975
Dinamarca		X				236	9 abril 1975
Níger			X		X	236-237	9 abril 1975
República Árabe Libia			X			237	9 abril 1975
Yugoslavia			X		X	237-238	9-10 abril 1975
Santa Sede			X			239	10 abril 1975
Mali	X					239	10 abril 1975
Países Bajos		X			X	239-240	10-11 abril 1975
Checoslovaquia			X		X	240-241	11 abril 1975
Suecia		X			X	241	11 abril 1975
Zambia	X				X	242	14 abril 1975
Mongolia			X			243	15 abril 1975
Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte			X			244-245 248-249	17 abril 1975 5 agosto 1975
Senegal	X					249-250	5-6 agosto 1975
Haití				X		250	6 agosto 1975
Chipre				X		250-251	6 agosto 1975
Venezuela			X			251-252	6-7 agosto 1975
República Unida del Camerún		X				253	7 agosto 1975
Chile		X				253 y 255-257	7, 8 y 11 agosto 1975
Trinidad y Tabago	X					254-255	8 agosto 1975
Líbano	X					255	8 agosto 1975
Uruguay			X			257	11 agosto 1975
Botswana	X				X	258	12 agosto 1975

Documentos recibidos por el Comité para la Eliminación de la Discriminación Racial en sus períodos de sesiones 11.º y 12.º conforme a las decisiones del Consejo de Administración Fiduciaria y del Comité Especial encargado de examinar la situación con respecto a la aplicación de la Declaración sobre la concesión de la independencia a los países y pueblos coloniales, de conformidad con el artículo 15 de la Convención a/

A. Documentos presentados en cumplimiento de la decisión adoptada por el Consejo de Administración Fiduciaria en su 42º período de sesiones (1975)

1. Informes de las Autoridades Administradoras relativos al Territorio en Fideicomiso de las Islas del Pacífico y de Papua Nueva Guinea:

Territorio en Fideicomiso de las Islas del Pacífico (Estados Unidos de América)

T/1762
Para el año terminado el 30 de junio de 1974

Papua Nueva Guinea (Australia)

T/1765
Para el período comprendido entre el 1.º de septiembre de 1974 y el 23 de mayo de 1975

2. Informes del Consejo de Administración Fiduciaria a la Asamblea General y al Consejo de Seguridad en que se incorporan los documentos de trabajo preparados por la Secretaría (Bosquejo de la situación en el Territorio en Fideicomiso de las Islas del Pacífico (T/L.1191 y Add.1 a 3) y en Papua Nueva Guinea (T/L.1192 y Add.1)):

Documentos Oficiales de la Asamblea General, trigésimo período de sesiones, Suplemento No. 4 (A/10004)

Documentos Oficiales del Consejo de Seguridad, trigésimo año, Suplemento especial No. 1 (S/11735)

B. Documentos presentados en cumplimiento de decisiones del Comité Especial encargado de examinar la situación con respecto a la aplicación de la Declaración sobre la concesión de la independencia a los países y pueblos coloniales

1. Peticiones presentadas por el Comité Especial en cumplimiento de la decisión adoptada en su 981a. sesión, el 5 de septiembre de 1974, y transmitidas por carta del Presidente del Comité Especial de fecha 18 de diciembre de 1974:

Peticiones relativas a

Rhodesia del Sur
Sáhara Español

Signatura del documento

A/AC.109/PET.1253
A/AC.109/PET.1254

a/ Véase cap. V, párr. 197 supra.

2. Documentos de trabajo presentados por el Comité Especial:

	<u>1974</u>	<u>1975</u>
Rhodesia del Sur		A/AC.109/L.992 y Corr.1 y Add.1 y 2
Namibia		A/AC.109/L.1007 y Add.1
Territorios bajo administración portuguesa:		
Política de descolonización de Portugal		A/AC.109/L.1006
Angola		A/AC.109/L.1014
Mozambique		A/AC.109/L.1020
Cabo Verde		A/AC.109/L.1016
Santo Tomé y Príncipe		A/AC.109/L.1013
Timor		A/AC.109/L.1015
Bermuda	A/9623/Add.6 (Parte I), Capítulo XIII	A/AC.109/L.994
Islas Gilbert y Ellice		
Pitcairn y las Islas Salomón		A/AC.109/L.995
Nuevas Hébridas		A/AC.109/L.997
Islas Cocos (Keeling)	A/9623/Add.5 (Parte II), Capítulo XX	A/AC.109/L.998
Islas Vírgenes Británicas	A/9623/Add.6 (Parte I), Capítulo XXV	A/AC.109/L.999
Islas Tokelau		A/AC.109/L.1000
Islas Turcas y Caicos	A/9623/Add.6 (Parte I), Capítulo XXV	A/AC.109/L.1003
Islas Caimán	A/9623/Add.6 (Parte I), Capítulo XXV	A/AC.109/L.1004
Islas Vírgenes de los Estados Unidos	A/9623/Add.6 (Parte I), Capítulo XXIV	A/AC.109/L.1005
Samoa Americana		A/AC.109/L.1008
Seychelles		A/AC.109/L.1010
Gibraltar	A/9623/Add.4 (Parte II), Capítulo XIII	Aún no publicado

	<u>1974</u>	<u>1975</u>
Somalia Francesa <u>b/</u>	A/9623/Add.4 (Parte II), Capítulo XIV	Aún no publicado
Niue	A/9623/Add.5 (Parte V), Capítulo XXII	Aún no publicado
Islas Malvinas (Falkland)	A/9623/Add.6 (Parte II), Capítulo XXVI	A/AC.109/L.1044
Belize	A/9623/Add.6 (Parte II), Capítulo XXVII	A/AC.109/L.1025
Antigua, Dominica, San Cristóbal- Nieves-Anguila, Santa Lucía y San Vicente	A/9623/Add.6 (Parte II), Capítulo XXVIII	Aún no publicado
Santa Helena	A/9623/Add.4 (Parte I), Capítulo X	A/AC.109/L.1023
Montserrat	A/9623/Add.6 (Parte I), Capítulo XXV	Aún no publicado
Brunéi		A/AC.109/L.1021
Guam		A/AC.109/L.1022
Territorio en fideicomiso de las Islas del Pacífico		A/AC.109/L.1024
Archipiélago de las Comoras		A/AC.109/L.1033

b/ La nueva designación del Territorio, conocido anteriormente como Somalia Francesa, es Territorio Francés de los Afares y los Issas. Véase el Boletín de Terminología No. 240, publicado por la Secretaría el 15 de abril de 1968 (ST/SC/SER.F/240).

كيفية الحصول على منشورات الأمم المتحدة

يمكن الحصول على منشورات الأمم المتحدة من المكتبات ودور التوزيع في جميع أنحاء العالم . استعلم عنها من المكتبة التي تتعامل معها أو اكتب الى : الأمم المتحدة ، قسم البيع في نيويورك أو في جنيف .

如何购取联合国出版物

联合国出版物在全世界各地的书店和经售处均有发售。请向书店询问或写信到纽约或日内瓦的联合国销售组。

HOW TO OBTAIN UNITED NATIONS PUBLICATIONS

United Nations publications may be obtained from bookstores and distributors throughout the world. Consult your bookstore or write to: United Nations, Sales Section, New York or Geneva.

COMMENT SE PROCURER LES PUBLICATIONS DES NATIONS UNIES

Les publications des Nations Unies sont en vente dans les librairies et les agences dépositaires du monde entier. Informez-vous auprès de votre libraire ou adressez-vous à : Nations Unies, Section des ventes, New York ou Genève.

КАК ПОЛУЧИТЬ ИЗДАНИЯ ОРГАНИЗАЦИИ ОБЪЕДИНЕННЫХ НАЦИЙ

Издания Организации Объединенных Наций можно купить в книжных магазинах и агентствах во всех районах мира. Наводите справки об изданиях в вашем книжном магазине или пишите по адресу: Организация Объединенных Наций, Секция по продаже изданий, Нью-Йорк или Женева.

COMO CONSEGUIR PUBLICACIONES DE LAS NACIONES UNIDAS

Las publicaciones de las Naciones Unidas están en venta en librerías y casas distribuidoras en todas partes del mundo. Consulte a su librero o dirijase a: Naciones Unidas, Sección de Ventas, Nueva York o Ginebra.
